

CIUDAD {ES}

Intersecciones

Diversidad sexual y de género
e interseccionalidad

DIEGO SEMPOL

CIUDAD {ES} INTERSECCIONES

DANIEL MARTÍNEZ
Intendente de Montevideo

FABIANA GOYENECHÉ
Directora General de Desarrollo Social

JULIO CALZADA
Director de Políticas Sociales

ANDRÉS SCAGLIOLA
Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de la Diversidad

JUAN JOSÉ CALVO
Representante de UNFPA en Uruguay

JUAN MERÉ
Asesor UNFPA

CIUDAD {ES}

Intersecciones

Diversidad sexual y de género
e interseccionalidad

DIEGO SEMPOL



ISBN: 978-9974-93-067-4

DISEÑO EDITORIAL: José de los Santos

Este libro está compuesto con las variables tipográficas de la familia

LIBERTAD © Fernando Díaz, © Tipotype, Uruguay.

FOTOGRAFÍA: © Montevideo Iguaitario

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN

Cebra Comunicación Visual.

Depósito Legal: 373.099

Comisión del Papel. Edición amparada en el Decreto 218/96

CONTENIDO

Presentación	11
Prólogo Secretaría de la Diversidad	13
Prólogo CFCE-UNFPA	15
Introducción	19
CAPÍTULO I	
Tras los orígenes de la mirada interseccional	25
LA INTERSECCIONALIDAD EN LATINOAMÉRICA	30
CAPÍTULO II	
La interseccionalidad entre género y diversidad sexual	35
LAS DEBILIDADES DEL BIOLOGISMO	35
¿FUSIONARLAS O MANTENERLAS SEPARADAS?	38
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES URUGUAYOS Y LA INTERSECCIONALIDAD	44
DE BARCELONA A MONTEVIDEO: LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA	50
CAPÍTULO III	
Etnia-raza y sexualidades no heteroconformes	57
LA CENTRALIDAD DE LA VIOLENCIA	58
OTRAS BARRERAS Y ALGUNAS POSIBLES POLÍTICAS PÚBLICAS	60
LA EXCEPCIONALIDAD URUGUAYA EN ACCIÓN	63
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES: LOGROS Y DESAFÍOS	65

CAPÍTULO IV

Una revolución en la familia 71

EN URUGUAY 72

PROBLEMAS Y AUSENCIAS 75

CAPÍTULO V

Personas LGTBI y el ciclo de vida 85

INFANCIAS TRANS: DESAFÍOS Y PROBLEMAS 86

LAS «PALOMITAS BLANCAS» Y EL ACOSO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS .. 89

LA VEJEZ COMO PROBLEMA 93

CAPÍTULO VI

Privación de libertad y población LGTBI 103

ALGUNOS CAMBIOS INSTRUMENTADOS 104

ENCIERRO A LA MEXICANA 108

ALGUNOS EJES PENDIENTES EN URUGUAY 110

CAPÍTULO VII

Múltiples ejes, múltiples debates 119

EL REGRESO A UNA EPIDEMIA CONCENTRADA 119

PENSANDO LA DISCAPACIDAD 124

MOVIMIENTOS SOCIALES: AUSENCIAS Y POSIBLES DIÁLOGOS 128

MIGRANTES LGTBI: EL DESEMBARCO DE LO GLOBAL 130

INMIGRANTES LGTBI EN LA URBE 131

CAPÍTULO VIII

Algunas reflexiones finales 139

MOVIMIENTOS SOCIALES 139

POLÍTICAS PÚBLICAS 141

ACADEMIA 142

BIBLIOGRAFÍA 145

ANEXOS 149

PRESENTACIÓN

Desde otro lugar

La ciudad es un escenario clave en las luchas de gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersex por el reconocimiento de sus derechos. La polis deviene espacio público de lucha y de resistencia y, a la vez, de transformación y celebración. Conocerla, en su complejidad, es fundamental.

Porque no cuenta lo que no se cuenta, es imprescindible generar información para construir el problema de la discriminación hacia las personas LGBTI, también en la ciudad, como problema público. Porque no se transforma lo que no se conoce, es condición necesaria generar información para diseñar políticas públicas —en este caso de ámbito local y departamental— de calidad. Esta serie de publicaciones, abierta, es un aporte a pensar las ciudades en relación a la diversidad sexual y de género de las personas que la habitan. Y a hacerlo de forma sistemática.

Los seis tomos que la integran nos llevarán por diferentes espacios y miradas.

Los baños públicos y las consecuencias de la segregación por géneros; los servicios de salud como herramienta para generar inclusión en los barrios; los espacios públicos y su potencial transformador para la construcción de una sociedad amable libre de discriminación.

La mirada interseccional, esto es, la de las múltiples desigualdades que atraviesan a las personas LGBTI; la mirada comparada que nos permite el trabajo en red con otras ciudades; para, finalmente, proponer la mirada ética y estratégica, condición *sine qua non* para la transformación durable —en el espacio y en el tiempo— hacia una ciudad en la que igualdad legal e igualdad social sean sinónimos.

Les invitamos a acompañar esta serie que será, desde ya, otra forma de recorrer la ciudad. Y de mirar. ¶

PRÓLOGO

Estamos muy felices. Como Secretaría de la Diversidad nos propusimos visibilizar la pluralidad y singularidad de las personas LGBTI atravesadas por una multiplicidad de desigualdades (género, etnia/raza, clase social, discapacidad, condición de migrante o refugiado, niñez, adolescencia y juventud, vejez, VIH, privación de libertad) y, a la vez, promover la construcción de agendas comunes que den cuenta de esas intersecciones.

Pensamos que el ciclo del que da cuenta esta publicación fue un aporte significativo en ese sentido. Esta publicación, realizada en el marco del convenio que nos une a la Universidad de la República, dará continuidad a ese esfuerzo.

Trabajar desde la interseccionalidad no es sólo una propuesta académica: es la urgencia de dar respuesta desde la política pública a la situación de personas concretas que, siendo tremendamente vulneradas, atravesadas por múltiples desigualdades, caen en las omisiones de las agendas sociales y políticas, y en los vacíos de la compartimentación de las burocracias.

Participaron en el *Ciclo Intersecciones, Diálogos sobre las desigualdades que atraviesan a las personas LGBTI*, más de 400 personas a lo largo de 60 horas de intercambio; participaron 70 expertos de 8 países. A todas y todos quienes participaron, nuestro agradecimiento sincero.

El ciclo, además, dio impulso a nuevas iniciativas que co- lideramos.

Una, el proyecto piloto *Interseccionalidad en las políticas LGBTI metropolitanas* para la elaboración de un manual de diseño y

monitoreo de políticas públicas locales con este enfoque, en el marco de la Asociación Mundial de Grandes Metrópolis, junto a las ciudades de Berlín, Barcelona, Medellín, México y Buenos Aires.

Otra, la elaboración de un plan de acción local sobre la población migrante y afro LGBTI, en el marco de la Coalición Latinoamericana de Ciudades contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de Discriminación, junto a la Secretaría para la Equidad Étnico-Racial y de Poblaciones Migrantes.

Finalmente, junto al Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay y el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, nos proponemos generar un curso regional que exponga –y multiplique– los aprendizajes de este proceso.

Ese es ahora el reto: alcanzar una comprensión precisa y profunda de qué hablamos cuando hablamos de interseccionalidad y, desde allí, crear herramientas útiles de política pública para dar respuestas complejas a la singularidad y la pluralidad de lesbianas, gays, bisexuales, y de personas trans e intersex. En eso estamos.

ANDRÉS SCAGLIOLA

COORDINADOR EJECUTIVO

SECRETARÍA DE LA DIVERSIDAD
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

PRÓLOGO

El diseño e implementación del Ciclo sobre políticas públicas y diversidad sexual, Intersecciones, organizado por la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo, representa, sin duda, una iniciativa innovadora en la región por los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersex y, en ese sentido, se trata de una oportunidad inédita de cooperación internacional plenamente alineada con la agenda 2030 y el Consenso de Montevideo, como agenda regional de población y desarrollo.

Poner el foco en la ciudadanía y los derechos de las personas LGBTI desde una perspectiva interseccional permite conocer y reconocer la complejidad de las situaciones de exclusión y de desigualdad aún imperantes en Uruguay y la región, que afectan la calidad de vida de demasiadas personas por el mero hecho de querer vivir su orientación sexual, su expresión e identidad de género. Sobre todo, Intersecciones se constituyó, a través de múltiples e intensos intercambios con actores académicos, de la sociedad civil, políticos, uruguayos y de la región, en el espacio privilegiado para abordar la cuestión crítica de qué y cómo impulsar políticas públicas y promover cambios sociales que generen sociabilidades y oportunidades efectivas en clave de igualdad e inclusión para todos y todas, en todas las ciudades, en todos los países.

La Cooperación española y el Fondo de Población de las Naciones Unidas reafirmamos nuestro compromiso de apoyo y acompañamiento a esta acción estratégica de la Intendencia de Montevideo por la

ampliación de derechos y la inclusión social, en el entendido que enfoca con eficacia la indispensable decisión de no dejar a ningún ciudadano y ninguna ciudadana fuera del logro de un desarrollo equitativo, sustentable y justo. ¶

MERCEDES FLOREZ GÓMEZ

DIRECTORA

CENTRO DE FORMACIÓN
AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO (AECID)
EMBAJADA DE ESPAÑA EN URUGUAY

JUAN JOSÉ CALVO

REPRESENTANTE NACIONAL

FONDO DE POBLACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS

CIUDAD {ES}

Intersecciones

Diversidad sexual y de género
e interseccionalidad

DIEGO SEMPOL

INTRODUCCIÓN

Desde el siglo XIX la sexualidad se volvió un lugar de control y vigilancia sobre los sujetos y una mercancía más en circulación dentro del sistema capitalista contemporáneo. Los trabajos académicos en los últimos cincuenta años han buscado, muchas veces, analizar cómo las diferentes matrices de poder generan formas de sexualidad y desigualdad concretas. A estas visiones más estándar se sumaron con el tiempo intentos de complejización que buscaron poner en diálogo la sexualidad con otras dimensiones sociales que generan nuevas barreras y problemas de desigualdad.

En los estudios clásicos de la interseccionalidad parte de la discusión gira en torno al lugar privilegiado —o no— de la sexualidad respecto al género, a la etnia-raza o a la clase social. Durante las nueve sesiones organizadas por la Secretaría de la Diversidad (Intendencia de Montevideo) en colaboración con el Centro de Formación Española a lo largo de todo el año 2017, los debates e intercambios prácticamente no se centraron en estos tópicos clásicos, sino antes que nada en fortalecer la perspectiva interseccional esbozada en el movimiento social y en pensar cómo trasladarla al Estado y a la construcción de las políticas públicas. Las jornadas programadas terminaron acumulando sesenta horas de diálogo e intercambio, durante las que participaron más de setenta ponentes provenientes de Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, España, México y Uruguay. A su vez, entre los ponentes participaron representantes de agencias de cooperación e instituciones gubernamentales, académicos, integrantes de organizaciones sociales y protagonistas que compartieron testimonios con los presentes. Finalmente, aproximadamente un total de cuatrocientas personas asistieron a las sesiones realizadas, las que participaron activamente en la discusión a través de la

formulación de preguntas y la comunicación de ideas y problemas en cada una de las instancias.

Este punto de partida rico y heterogéneo fue muy difícil —sino imposible— de sintetizar en este texto, por lo que se optó por hacer un recorte —uno posible entre muchos otros— que siguiera algunos ejes de reflexión en cada uno de los nudos abordados durante todo el ciclo. Los criterios —como siempre sucede— tienen que ver con las necesidades del contexto uruguayo y con el momento histórico que atraviesa este país. Esto implicó en los hechos priorizar la palabra de algunos de los participantes antes que la del conjunto. La elección fue difícil y los criterios que marcaron la senda fueron resueltos colectivamente por el equipo organizador del ciclo y funcionaron como arco de bóveda del documento marcando la trayectoria narrativa a seguir. Además, para agregarle más complejidad al asunto, el género narrativo de este documento es fronterizo, ya que se resolvió desde el comienzo rechazar la alternativa de realizar una relatoría en el sentido clásico y se optó por un texto que pusiera en diálogo los nudos clave y las participaciones seleccionadas con alguna bibliografía local y global sobre el tema, a efectos de profundizar en algunos aspectos, así como de instalar preguntas y problemas que no estuvieron presentes durante las jornadas de debate pero que pueden ser centrales para pensar los desafíos de la interseccionalidad.

También el punto de partida dejó su marca/sesgo en toda la reflexión. El hilo conductor de los diálogos y de este texto busca subrayar y visibilizar cómo las sexualidades e identidades no heterconformes dialogan con otras formas de desigualdad, como el género, la etnia-raza, la discapacidad, los ciclos de vida y la emigración, o qué desafíos instalan en los servicios de salud en la familia y en las instituciones penitenciarias. Por lo tanto, toda la reflexión tiene esta asimetría tanto a nivel teórico como respecto a la casuística abordada y analizada a lo largo de los capítulos.

Llegados a este punto, sería oportuno esbozar, junto con Lucas Platero (2012), una batería de problemas que atravesaron el ciclo. ¿Qué aporta la interseccionalidad a la comprensión de la sexualidad o en qué medida renueva la reflexión sobre las formas en que el poder construye lugares de privilegio o alienta nuevos puntos de resistencia? ¿Qué beneficios introduce abandonar las perspectivas monocausales de la discriminación para asumir un acercamiento más integral y complejo?

Poner en diálogo la sexualidad no heteroconforme con dimensiones como clase social, discapacidad, colonialismo o etnia raza, ¿qué tanto contribuye a avanzar en la crítica sobre las formas de dominación y qué tanto a diluir formas particularizadas de desigualdad?

De una forma u otra, este documento intentó dar respuesta a cada una de estas preguntas problema, a la vez que introducir asuntos nuevos y particularizados que colaboraran a pensar el problema de la interseccionalidad en forma contextualizada y contingente. ¶

CAPÍTULO I

Tras los orígenes de la mirada interseccional

LA INTERSECCIONALIDAD EN LATINOAMÉRICA

Tras los orígenes de la mirada interseccional

Lo que resulta problemático en este uso de «mujeres» como grupo, como categoría de análisis estable, es que se asume una unidad antihistórica y universal entre las mujeres, fundada en la noción generalizada de su subordinación. En vez de demostrar analíticamente la producción de las mujeres como grupos socioeconómicos y políticos dentro de contextos locales particulares, esta jugada analítica limita la definición del sujeto femenino a la identidad de género, ignorando por completo identidades de clase o étnicas

TAPAL DE MOHANTY, 1988: 12

El feminismo estadounidense de la segunda ola introdujo en los setenta y ochenta una fuerte reflexión crítica sobre la ceguera persistente dentro de este movimiento sobre la discriminación por etnia-raza, clase y sexualidad, de la mano fundamentalmente de pensadoras afroamericanas y chicanas como Angela Davis (1981), Combahee River Collective (1977/1981), bell hooks (1984/2004) y Audre Lorde (1979), quienes introdujeron el problema de las posibles relaciones entre género, etnia-raza y clase social.

Estas miradas precursoras abonaron una reflexión que terminó por germinar. Oficialmente, el término *interseccional* vio la luz en 1989 de la mano de Kimberlé Crenshaw. Con el tiempo, su uso creció exponencialmente y viajó por diferentes contextos políticos y disciplinas académicas. Crenshaw (1989) analizó la interseccionalidad estructural en la vida de las personas y los grupos sociales, subrayando cómo las mujeres afroamericanas se ven afectadas a menudo a nivel laboral o cuando son víctimas de violencia por un *pool* de desigualdades que vinculan lo étnico-racial, la clase social y el género, todos problemas sociales que confirman que estas dimensiones estructurales no son independientes, sino que, por el contrario, interactúan en forma compleja. El otro gran aporte de la autora fue subrayar cómo las estrategias políticas que se enfocaban en alguna de estas desigualdades terminaban marginado o relegando en su agenda

soluciones para las vulneraciones que generaba su intersección. Su perspectiva fue así una crítica a las políticas de los movimientos sociales feministas y antirracistas que centaban sus luchas en una única categoría, invisibilizando la heterogeneidad interna y las diferentes formas que tenía y tiene la desigualdad. Esta forma de pensar y llevar adelante la lucha política, advirtió, podía terminar generando que el movimiento feminista reforzara el racismo y que el movimiento antirracista acabara reforzando la subordinación por razón de género.

En sus trabajos académicos Crenshaw terminó por definir la existencia de tres tipos de interseccionalidad: una *interseccionalidad estructural* en la que se vinculan los sistemas de dominación raciales, de género y clase; una *interseccionalidad política*, a partir del análisis de la relación entre el movimiento feminista y afroamericano, donde se subrayó cómo atender una sola dimensión de la desigualdad excluía y marginaba a aquellos sujetos que vivían una exclusión que imbricaba varios sistemas de opresión, y, por último, una *interseccionalidad representativa*, que proponía analizar la relación entre los estereotipos raciales y los de género.

Progresivamente, la categoría de interseccionalidad fue creciendo y sumando una gran cantidad de cruces de categorías y problemas. Dado que este *boom* volvió al término hasta cierto punto polisémico, y a veces incluso ambiguo, se introduce a continuación una propuesta de definición sintética perteneciente al teórico español Lucas Platero, a efectos de precisar el sentido con el que se lo va a utilizar en este texto. Para Platero intersección implica:

... señalar cómo diferentes fuentes estructurales de desigualdad mantienen relaciones recíprocas. Es un enfoque teórico que subraya que el género, la etnia, la clase, u orientación sexual, como otras categorías son construidas y están interrelacionadas. No se trata tanto de enumerar y hacer una lista inacabable de todas las desigualdades posibles, superponiendo unas tras otras, como de estudiar aquellas manifestaciones e identidades que son determinantes en cada contexto y cómo son encarnadas por los sujetos para darles un significado que es temporal (2012: 26-27).

De esta forma, la interseccionalidad busca superar los enfoques sumativos que abonan la idea de que existe discriminación doble o múltiple, tan frecuentes en la perspectiva jurídica, donde se presupone que la vivencia de desigualdad de un individuo puede ser explicada como la suma de una serie de experiencias de discriminación independientes y definidas por categorías específicas. La interseccionalidad propone pensar que las categorías analíticas están sometidas a una economía política en la interacción social donde se mixturan y fusionan en los cuerpos de los individuos que atraviesan, generando formas nuevas de discriminación, en las que esas categorías son casi indisociables analíticamente. A su vez, esta perspectiva permite romper con la tendencia a homogenizar a las personas al rotularlas en forma excluyente a partir de una categoría social específica, intentando ubicar el foco de análisis en cómo la discriminación se materializa para los diferentes individuos dentro de un grupo y no solo en tanto colectivos unificados.

Como señaló Marta Cruells, asesora de Concejalía de Feminismes i LGBTI del Ajuntament de Barcelona, esta visión involucra una crítica a las concepciones reducidas de la identidad grupal por parte de las diferentes estrategias políticas, pero no busca anular las categorías en sí mismas, sino solamente complejizarlas, en la medida en que para Crenshaw las identidades son también un lugar de resistencia y empoderamiento. Esta complejización de la mirada pretende contribuir a visualizar las formas y estrategias en las que el poder y las normas sociales trabajan, denunciando los efectos no buscados que generan muchas veces el activismo y la construcción de políticas públicas orientadas a combatir la desigualdad social. Además, este enfoque permite afinar la escucha y traer al centro del análisis los sujetos que se ubican en los márgenes de la reflexión y la construcción de un problema social, así como rescatar sus estrategias de sobrevivencia y los aportes significativos de su mirada singular. En definitiva, alienta la reflexión sobre que exclusiones puede terminar generando el término *mujer* o *gay* en una política pública que busca la igualdad, para habilitar así la crítica de las dimensiones opresivas que pueden agazaparse en todo discurso emancipatorio.

Otra autora clave en la conceptualización de esta mirada sobre la desigualdad fue Patricia Hill Collins (1990), quien buscó conceptualizar los diferentes ejes de opresión como parte de una matriz en función de la

que las personas se constituyen, ocupando cambiantes y diferentes posiciones de poder. Como señala Cruells, esta visión permite pensar que las personas y grupos pueden ocupar, al mismo tiempo o en distintos momentos de su vida, el lugar de opresoras y oprimidas, lo que constituye un excelente antídoto teórico para evitar las narraciones excesivamente victimizadas. Para Collins, esta matriz se organiza en cuatro áreas diferentes: en las instituciones, en las formas de vigilancia y la burocracia, en la cultura y la ideología y, por último, en los vínculos interpersonales. Y si bien la matriz permite detectar los patrones comunes en los que funciona la dominación, la forma en que esta se organiza varía en función del momento histórico y de los contextos.

Para Collins (1990) la eficacia de la resistencia pasa por lograr articular una repuesta en la multiplicidad de niveles implicados en la opresión, lo que implica, entre otras cosas, conformar coaliciones y promover el diálogo transversal.

Tanto Crenshaw como Collins —señala Cruells— hacen énfasis en la agencia de los grupos sociales y su relación con los procesos de dominación y las formas en que funciona la desigualdad, énfasis que las sucesivas olas de producción dentro del campo descentran para pasar a ocuparse de la relación entre los sistemas y las dimensiones de la desigualdad, a efectos de determinar la relación entre contextos y diferentes niveles del problema. En esta dirección se orienta toda la producción de Laurel Weldon (2006), quien reivindica que no existe un único sistema en el que todas las formas de desigualdad interactúen porque esto implicaría reconocer que no existen efectos sociales autónomos de cada desigualdad. En cambio, Weldon propone pensar que hay múltiples sistemas de desigualdad que no pierden su existencia propia por más que trabajen juntos y se superpongan en algunas ocasiones, lo que permitiría reconocer que se pueden generar efectos autónomos e interseccionales.

Por último, Cruells introdujo brevemente —durante su exposición de apertura en la jornada inaugural del ciclo de Intersecciones en Montevideo—, los planteos de Myra Marx Ferree (2011), quien propone pensar a los regímenes de desigualdad en relación, por lo que las diferencias de clase no se construyen y tienen lugar solo en el sistema económico sino también, por ejemplo, en el campo de la cultura. Además, Ferree señala que las intersecciones tienen como resultado una desigualdad compleja

que cobra forma a la luz de un contexto y que no implica la mera suma de esas variables. Esta crítica a la lógica aditiva propone entonces pensar a la desigualdad generada por la intersección como una forma específica y nueva, lo que exige respuestas específicas y soluciones *ad hoc*. En definitiva, como señaló Cruells, no se puede saber en forma anticipada qué desigualdad va a tener más fuerza, ya que no todas tienen siempre el mismo peso y significación. Es necesario por eso encontrar la respuesta en forma contextualizada y situada, lo que exige investigación y reflexión crítica.

Llegados a este punto podríamos preguntarnos sobre la naturaleza de la intersección y de las desigualdades que involucra: ¿qué pasa con cada una de las desigualdades durante una intersección? ¿Qué productividad tiene diferenciar entre las formas en las que se produce la desigualdad y las consecuencias que genera? En el intento de responder estas preguntas, Cruells planteó que se si mantiene la idea de que existen diferentes sistemas de desigualdad y que estos, según cómo interactúen, producen diferentes tipos de vulnerabilidad, la interseccionalidad no sería más que una alternativa entre el menú variado de desigualdades posibles. Por lo tanto, no todas las desigualdades son interseccionales, aclara Cruells, sino que existen algunas que son fruto del juego de una sola desigualdad. Por ejemplo, la criminalización del aborto tiene como intención afectar solo a la categoría de mujer, una desigualdad de género, más allá de que las consecuencias de esta prohibición se pongan en juego en forma distinta según la clase social, los niveles educativos, etcétera.

A su vez, un ejemplo de desigualdad interseccional podrían ser las esterilizaciones compulsivas focalizadas en algunos grupos de mujeres por motivos de discapacidad o etnia-raza, como las que sufrieron las mujeres afroamericanas pobres en algunos estados de Estados Unidos. Allí, la intención de la desigualdad buscaba afectar en forma selectiva solo a las mujeres afro de clase baja en los estados del sur. Otro tipo de desigualdad sería la asimétrica, donde si bien existen diferentes aspectos en juego uno de ellos predomina claramente sobre el resto. Por ejemplo, en el Holocausto las víctimas fueron judíos, homosexuales, gitanos, presos políticos, etc., pero la etnia-raza articuló toda esa política genocida y era algo claramente predominante.

Cruells planteó también la posibilidad de que exista una desigualdad aditiva, basándose en los trabajos de Hannett (2003), que confirmaron un

caso en el que operó un proceso de selección laboral donde se discriminó por un lado por etnia-raza y por otro por motivos de género, lo que implicó que en los hechos finalmente la persona afectada acumulara ambas discriminaciones. La estrategia para el análisis de este tipo de desigualdades debe ser cualitativa, ya que es imposible cuantificar diferentes formas de opresión y busca una forma aritmética para atraparlas.

Por último, Cruells señaló cómo, hasta el presente, en la lucha contra la desigualdad lo que ha predominado son las estrategias que combate en un solo eje por vez (efectos autónomos) sin que se reconozca la necesidad de complejizar las intervenciones para mejorar los resultados. Esta dificultad para el cambio radica en las resistencias que impone la inercia en la cultura laboral, las dudas que existen debido a las escasas buenas prácticas para orientarse, en la desconfianza a que el cambio sea utilizado para dejar de trabajar el eje de desigualdad, o por la oposición lisa y llana de la sociedad civil a la perspectiva interseccional.

LA INTERSECCIONALIDAD EN LATINOAMÉRICA

Las teorizaciones interseccionales también han tenido en las últimas décadas un fuerte desarrollo en América Latina. Mapear todas las ramificaciones de su recorrido y los principales nudos analíticos que se construyeron supera largamente los objetivos de este trabajo. Bastará por eso introducir algunos autores claves dentro del campo y plantear como en la reflexión regional ocuparon un lugar central los efectos de la colonialidad, el género y lo étnico-racial.

En ese sentido, a partir del legado del feminismo negro estadounidense, el feminismo materialista francés (crítica a la idea de naturaleza), de la reflexión poscolonial (violencia epistémica) y de la crítica del feminismo autónomo regional (las distorsiones que producen los fondos globales en la acción colectiva regional), el feminismo decolonial latinoamericano profundiza en forma original en la perspectiva interseccional.

Un primer camino posible para subrayar la originalidad de la reflexión en este continente es introducir al teórico peruano Carlos Quijano, quien acuñó el término *colonialidad del poder* para aludir a los patrones de poder que España instaura después de la conquista en este continente, y

la centralidad que tuvo la idea de raza para permitir ordenar en forma jerárquica la población en las colonias en función del idioma, la *pureza de sangre* y la relación con el cristianismo. Esta racialización de la desigualdad contaminó todas las dimensiones de la vida social, afirma Quijano, subordinando a esta dimensión todas las otras categorías sociales como género, sexo o incluso clase social.

A partir de allí, María Lugones (2015: 5-6) retoma en forma crítica estos planteos al introducir un giro analítico nuevo: la idea de *colonialidad de género*, reflexión que busca subrayar que ni la categoría de género ni la de sexualidad existían entre los pueblos indígenas africanos y de Norteamérica con anterioridad a la llegada del conquistador. Para Lugones las mujeres de los pueblos originarios no fueron solo racializadas, sino que, al mismo tiempo, fueron reiventadas como «mujeres» a partir de los códigos y estereotipos occidentales, lo que las ubicó tanto bajo la dominación de los conquistadores como bajo el poder de los hombres colonizados. Esta perspectiva —próxima a la reflexión de Hill Collins sobre la existencia de una matriz de dominación— subraya en definitiva que el sistema moderno colonial de género está en la base de la reflexión eurocéntrica y en cómo se piensa la propia América Latina. Si bien Rita Segato (2011) critica esta idea (la no existencia de una categoría de género antes de la llegada del hombre blanco), comparte de todas formas la opinión de que la colonización generó cambios en el sistema sexogenérico en el continente. A su juicio, el régimen precolombino que regulaba la relación de hombres y mujeres estaba anclado en la fórmula *diferentes pero iguales*, lógica que la colonización modificó por completo al instalar otra nueva que podría condensar en la fórmula *desiguales pero distintos*.

La reflexión latinoamericana en torno a la interseccionalidad realizó un aporte importante al campo. Según Yuderkis Espinosa, Diana Gómez y Karina Ochoa

... el feminismo decolonial hace suya la tarea de reinterpretación de la historia en clave crítica a la modernidad, ya no solo por su androcentrismo y misoginia —como lo ha hecho la epistemología feminista clásica— sino desde su carácter intrínsecamente racista y eurocéntrico (2014: 31).

De esta forma, todas estas dimensiones devienen variables coconstitutivas a la procura de denunciar el sesgo occidental, blanco y burgués del feminismo estadounidense y europeo, en tanto la opresión de género no puede ser universalizada ni separada de otras formas de opresión contextualizadas. Autoras como Karina Bidaseca plantean precisamente cómo negar una reflexión crítica de este tipo implica repetir las lógicas de inferiorización y exclusión que el propio feminismo critica. Conceptualización que sintetiza, en una forma aguda y paródica, con la frase «mujeres blancas buscando salvar a las mujeres de color café de los hombres color café» (2011: 95).

En similar dirección, Ochy Curiel (2014: 332) busca denunciar cómo pese a la crítica introducida en forma temprana por el feminismo estadounidense y europeo, este no logró liberarse por completo de ese lastre colonialista, que termina fomentado una «colonización discursiva» (Espinoza, 2009; Curiel, 2014): la construcción de las *mujeres del Tercer Mundo* como como víctimas antes que como sujetos capaces de desarrollar formas de resistencia propias y el desarrollo de ciertos parámetros de reflexión académicos que limitan la producción de conocimiento. Estas visiones críticas no desconocen la existencia de desigualdad a nivel económico y a nivel de posibilidades de construcción de demandas políticas, pero reivindican la necesidad de reconocer la existencia de trayectorias locales, legítimas, eficaces y viables, que buscan dar respuestas contextualizadas a problemas contextualizados. El feminismo blanco occidental y las organizaciones *mainstream* latinoamericanas ligadas en forma acrítica al feminismo transnacional, pueden contribuir a ese proceso, siempre y cuando desistan de imponer sus agendas y estrategias y desarrollen una lógica empática con los movimientos locales y sus propuestas. ¶

CAPÍTULO II

La interseccionalidad entre género y diversidad sexual

LAS DEBILIDADES DEL BIOLOGISMO

¿FUSIONARLAS O MANTENERLAS SEPARADAS?

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES URUGUAYOS Y LA INTERSECCIONALIDAD

DE BARCELONA A MONTEVIDEO: LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA

La interseccionalidad entre género y diversidad sexual

En este capítulo se presentan en forma sintética algunas presentaciones y discusiones que se dieron en el marco de la jornada de inauguración del ciclo *Diálogos sobre desigualdades que atraviesan a las personas LGBTI*, que implicó dos intensas sesiones en el Centro de Formación de la Cooperación Española los días 23 y 24 de marzo de 2017. En este primer diálogo participaron 18 invitados/as (académicos, activistas, operadores y gestores públicos), se presentó una serie de videos con testimonios y hubo intercambio con el nutrido público en espacios reservados para el debate.

En primer lugar, se trabajará la reflexión crítica sobre las visiones biologicistas sobre el género y la sexualidad que vienen difundiendo las posiciones fundamentalistas religiosas en América Latina y se sintetizarán los argumentos a favor y en contra de mantener lo LGBTI y el género como dimensiones separadas o pensarlas como una única cosa. Luego se dará paso a un análisis del movimiento social uruguayo y su relación con la interseccionalidad, para cerrar el capítulo con un análisis de algunos casos de políticas públicas que hayan trabajado la intersección entre género y lo LGBTI.

LAS DEBILIDADES DEL BIOLOGISMO

Gerard Coll-Planas, director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad de Vic, buscó problematizar en su presentación la relación que se puede establecer entre los ejes de género y LGBTI para pensar incluso la posibilidad de subsumir ambas cosas en una única

dimensión analítica. Este especialista partió de una perspectiva teórica que confronta dos visiones sociales muy extendidas sobre el género y la diversidad sexual.

La primera visión es el biologismo, una mirada que plantea que hombres y mujeres son heterosexuales por naturaleza y que la identidad está determinada por la biología, por lo que los individuos nacen con cuerpos diferentes y tienen habilidades diferentes. Esta perspectiva ahistórica subraya que desde la prehistoria hombres y mujeres han hecho cosas diferentes porque esto viene codificado a nivel genético, por lo que aunque se nazca en el siglo XXI toda esa información impele a los hombres a intentar hacerse del control y a las mujeres a encargarse del cuidado de los otros. Coll-Planas mostró algunos picos importantes de esta línea interpretativa que vuelve a la anatomía destino. El primero mojón importante fue Steven Golberg, quien en los años setenta escribió el libro *La inevitabilidad del patriarcado*, donde argumenta cómo esta forma de dominación social nace de los sustratos genéticos de los individuos, por lo que no es algo politizable ni modificable. Un segundo planteamiento, con un poco más de sofisticación, es el de Helen Fisher, quien en *El primer sexo* busca básicamente defenestrar *El segundo sexo* de Simone De Beauvoir, afirmando que en el terreno de lo femenino y lo masculino nada se hace, sino que sencillamente se nace así. Coll-Planas citó durante su presentación dos ejemplos del texto:

Ella dice que es natural que las mujeres tengan necesidad de entrega y sumisión sexual a los hombres porque eso responde a algo extremadamente común en el reino animal y para argumentar utiliza el caso de la iguana para naturalizar esta posición de subordinación de las mujeres respecto a los hombres. Y, en segundo lugar, el texto plantea que el hombre, por biología, tiene la necesidad e instinto de inseminar a tantas hembras como pueda, porque eso responde a una estrategia de adaptación.

Esta perspectiva biológica puede ser criticada a nivel político y a nivel científico. Según el especialista, las impugnaciones de carácter político se basan en la idea de que el biologismo plantea un marco donde no hay posibilidad de cambio, donde el patriarcado es inevitable, por lo que

no hay mucho que pueda cambiarse o que reste por hacer. Y aclaró: «Esta crítica política tiene poco recibo para los biólogos, porque, como ellos afirman, “no se trata de que te guste o no, sino de cómo funcionan las cosas en la naturaleza”». Coll-Planas no dudó en caracterizar a este discurso como *pseudocientífico* en tanto define aspectos de la realidad social como inmodificables.

Por otro lado están las críticas de carácter académico. Allí, el libro de R. Lewontin, S. Rose y L. Kamin *No está en los genes*, un texto producido por estos investigadores del campo de las ciencias naturales que denuncian la intromisión de la ideología en el trabajo y la reflexión académica, criticando el determinismo biologicista en tanto discurso académico defectuoso. Estos autores subrayan algunas debilidades del determinismo: la continua comparación entre los seres humanos y el resto de los animales es analíticamente insostenible, porque el resto de los animales —a diferencia de los humanos— nace con una programación instintiva, como explicó Coll-Planas:

Por ejemplo, las tortugas nacen en la arena, en el medio de la playa y saben instintivamente a dónde ir y saben nadar. En cambio el ser humano es el animal menos autónomo de todos por esa falta de instinto. Es durante su proceso de socialización donde se va configurando su identidad, su deseo no es algo que viene en forma automática, sino que es algo que se va generando,

Además, señaló cómo la comparación entre animales, en la perspectiva determinista, se hace en forma aleatoria: «de repente les interesa la iguana, de repente el ciempiés. Siempre podés encontrar uno que pueda justificar lo que quieras», pero, además —agregó—, no hay ningún comportamiento humano que sea idéntico a otro en todo momento, por lo que no se puede hablar de genética. La maleabilidad de generar cultura y cambios implica que existe una relación directa entre acciones y consecuencias, no son los genes los que justifican las desigualdades sino la política.

La segunda visión sería la creencia de que la perspectiva constructivista niega la biología. Alejándose de esta posición, Coll-Planas señala que defender una perspectiva del género anclada en la construcción cultural

no implica negar la parte biológica, sino solo afirmar que los seres humanos son a la vez, y en forma dialéctica, naturaleza y cultura. «Nuestros cuerpos, incluso nuestros cerebros, son el producto de la dialéctica entre naturaleza y cultura y no se puede desentrañar. Nuestro cuerpo tomará forma en función de unas tecnologías como pueden ser la alimentación, el gimnasio, etcétera».

¿FUSIONARLAS O MANTENERLAS SEPARADAS?

Durante su presentación Coll-Planas explicó las cuatro dimensiones del género normativo: la asignación del sexo anatómico, que permite clasificar a los cuerpos entre machos y hembras; la identidad de género, que diferencia a hombres y mujeres y que en el sistema actual establece un binarismo ligado necesariamente al cuerpo (hembra-mujer, macho-hombre); las expresiones de género, que tematizan los comportamientos considerados femeninos y masculinos y vinculan expresiones con identidad, y, finalmente, la orientación sexual, que establece la complementariedad entre estos subtipos masculino y femenino.

«¿Esto implica que podemos entender la LGBTI-fobia al margen de las dinámicas de género?», se pregunta el experto. Y contesta:

Para mí no son ejes diferentes, sino que son parte de una misma cosa. La homofobia nace de esa necesidad de clasificar y de alguna forma la homosexualidad nace de la mano del tema de la complementariedad, lo que quiebra todo el marco de género. Eso lleva a las desigualdades, a las discriminaciones de las personas intersexuales, a las desigualdades entre mujeres y hombres, de personas trans o con expresión de género no normativo, y lesbianas, gays, bisexuales, etcétera.

En primer lugar, según Coll-Planas

en realidad nadie está del todo dentro de una categoría, nadie encaja siempre dentro de la norma, es un esquema coercitivo. Si somos mínimamente honestos, podemos reconocer en nuestras historias fantasías que no llegaremos a hacer porque son atribuidas a otra categoría.

El deseo es algo indomable y de repente tú eres muy heterosexual pero estás ahí en el vestuario y ves algo que te gusta. O de repente eres gay o lesbiana, estás en una conversación con una persona de otro sexo y de repente surge una atracción o luego viene un sueño erótico. La cuestión siempre es mucho más compleja. O sea que todos estamos fuera de la norma aunque aparentemente seamos de la vertiente más normativa.

A su vez, para este especialista es importante abordar en forma compleja la LGBTI-fobia y prestar realmente atención a sus discursos, para comprender y poder formular intervenciones que sean significativas. Es decisivo, afirma, superar la visión victimista y lineal de los problemas de discriminación, lo que implica asumir el rasgo complejo que nos impone la realidad en las diferentes situaciones de violencia y discriminación en las que aparece la mezcla de imaginarios y deseos. «Yo no sería capaz de distinguir entre algunos casos de lgbtifobia y de sexismo. No sabría establecer una línea para ver qué hay de una cosa y qué de la otra. Incluso creo que si intentamos desentrañar eso estableciendo más categorías, al final nos perderemos mucho de lo que está en juego. Nos dificulta en definitiva ver la violencia patriarcal», recalcó. De ahí que para Coll-Planas no se pueda decir que son dos ejes diferentes, más allá de que luego las políticas de género y diversidad sexual emerjan como dos cosas separadas en el espacio público.

Es claro que unificar ambos ejes en una política pública despierta suspicacias y problemas. El experto catalán señala cómo muchas veces el movimiento feminista siente que una unificación de este tipo implica que un hombre gay conquiste un espacio ganado por las mujeres con mucho esfuerzo.

Pero para mí hay otra interpretación a este proceso de articulación de ambas políticas que tiene que ver con la evolución del propio feminismo. Ha habido un cambio en relación con el sujeto político. Antes se partía de la mujer y esto luego se complejizó con las mujeres. Se instaló una nueva interpretación que plantea que al final el sistema de género va más allá de las categorías hombre-mujer.

Por tanto, como plantea Butler:

asumir que el género implica única y exclusivamente la matriz de lo masculino y lo femenino es precisamente no comprender que la producción de la coherencia binaria es contingente, que tiene un poste, que aquellas permutaciones de género que no cuadran con el binario forman parte del género tanto como su ejemplo más normativo (2006: 70).

En resumen, partir solo de categorías *hombre-mujer* acaba esencializando, ya que se concibe solo como posible esas dos alternativas. Para este experto este es un discurso dentro del feminismo, con el que se podrá estar de acuerdo o no, pero está lejos de ser una invasión exógena a este campo de reflexión teórico y político.

Una mirada de conjunto —que Coll-Planas denominó *política feminista o de género en sentido amplio*—, implicaría en vez de focalizarse en los *targets* (población LGBTI, hombres, mujeres) centrarse en las causas comunes que producen desigualdad. En vez de hacer foco en el dilema de si se hacen políticas para mujeres o para LGBTI, discutir cuál es el espacio del patriarcado o del especismo y a partir de ahí definir con qué colectivos hay que trabajar y qué consecuencias tiene eso. Pero atención:

... esto no implica que todo tenga el mismo peso. De hecho, cuando hicimos el plan de diversidad sexual y de género de Barcelona era evidente, en comparación con el plan de igualdad entre hombres y mujeres, que este último tenía mucha más importancia y muchos más espacios y nos hablaba de muchas más discriminaciones que lo LGBTI. No se trata de poner todo junto y tratarlo como si fuera igual de importante, ya que no es verdad, hay un tema que cruza la mitad de la población y que nos permite explicar muchísimas cosas que están pasando y queremos hacer.

Al mismo tiempo, aclaró, este cambio de enfoque no implica en absoluto desdibujar grupos ni servicios. Y puso un ejemplo: se puede tener una mirada común sobre las violencias patriarcales donde se reúnan las violencias de género como la homofobia, la lesbofobia y el sexismo, lo que no implicaría que se tuviera que hablar indistintamente de todo, sino antes que nada desarrollar un marco común para hacer intervenciones más

conscientes y potentes al contarse con más recursos. «¿Existen inconvenientes para hacer esta política en común? —se preguntó—: Hay problemas infinitos o grandísimos —contestó, para iniciar una sesuda enumeración—: El miedo a que se invisibilicen las problemáticas, las desconfianzas, las competencias de recursos, la inercia institucional, las lógicas de la sociedad civil que luchan porque se prioricen sus políticas y sus servicios».

En cualquier caso, agregó, estar de acuerdo en que puede haber un marco común no implica que no pueda haber planes o servicios separados:

...el fin es dejar de pretender que no tiene nada que ver una violencia o una desigualdad con la otra y después podemos convenir que, en el momento en que estamos, tiene sentido mantener propuestas y presupuestos separados aunque se trabaje en conjunto. Dejar de decir que son dos ejes que hay que ver cómo se cruzan y empezar a pensar que la matriz de estas violencias es la misma.

Coll-Planas señaló que también existen importantes riesgos de seguir trabajando en la forma en que ya se viene haciendo: las políticas se solapan o se vuelven contradictorias. En definitiva, este nuevo enfoque implica un cambio en el sujeto político y también posibles cambios en la práctica política. Pero para este proceso, concluyó, «no hay fórmulas ni discusiones cerradas. Y si bien no es fácil el camino que nos espera, se debería de todas formas hacer».

Esta perspectiva teórica y global dialogó con otra presentación que buscó reflexionar desde lo local y lo latinoamericano. Diego Sempol, del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República), ordenó su presentación en dos momentos complementarios: una discusión más teórica anclada en la relación entre homofobia y sistema sexo-género y otra de corte sociohistórico.

Para este especialista se pueden plantear muchas relaciones entre género y diversidad sexual y uno de los recortes posibles es evidenciar cómo la homofobia refuerza el binarismo genérico. La idea de que hay solo dos géneros, complementarios y opuestos, es una construcción contingente histórica que la homofobia no hace más que reforzar una y otra vez otorgándole un carácter natural o necesario. De alguna forma la homofobia ayuda a ver al sexo, al género y a la sexualidad en forma alineada,

como si siempre hubiese sido así y siempre fuera a ser así, porque en definitiva los cuerpos tienen ese «destino». Entonces, la homofobia, afirmó, tiene como uno de sus trabajos fundamentales en el sistema sexo-género reforzar este binarismo, operando como una suerte de «picana» que agrede y «corrige» todo aquello que quiera desafiar esa lógica de hierro, forzando a que tanto los cuerpos como los comportamientos y las expresiones de género se realineen debido a los costos que implica seguir adelante con una confrontación de este tipo. Es claro que hay personas que asumen pagar esos enormes costos sociales, psíquicos, subjetivos, pero muchos otros decantan por acatar.

El segundo trabajo de la homofobia en el sistema sexo-género es el reforzamiento de la frontera entre la heterosexualidad y la homosexualidad mediante la legitimación de la heteronormatividad. La homofobia fortalece la idea de lo heterosexual como lo humano, construyendo las otras sexualidades como algo abyecto, algo problemático, algo fuera de lo natural, una copia aberrante de un original. La clásica pregunta «¿Quién hace de hombre y quién de mujer?» condensa expresivamente esta idea de copia burda que el régimen heteronormativo trata de imprimir a las sexualidades no heteroconformes.

En tercer lugar, la homofobia construye diferentes tipos de hombre. El machismo genera desigualdades entre hombres y mujeres, pero también construye diferencias y jerarquías entre los primeros. Hay hombres que cumplen con las expectativas desde el punto de vista sexual y de identidad de género y esto les da un estatus, un reconocimiento, y cierto lugar de poder, y otros que de alguna forma viven en los márgenes. Sempol reconoció que este planteo es una reflexión teórica que en la realidad tiene un anclaje más complejo y flexible en función del contexto específico donde esté inserto el individuo. Por último, la homofobia colabora también en la construcción y el reforzamiento de las jerarquías étnico-raciales. Por ejemplo, la idea muy extendida durante el siglo XIX de que los afroamericanos eran esclavos porque eran un pueblo de «afeminados» o que su supuesta incapacidad de defender su propia libertad o la de «sus mujeres» se debía a un déficit de masculinidad, creencias que en las sociedades latinoamericanas —atravesadas por formas complejas de colonialismo— también se pueden ver utilizadas en relación con los pueblos originarios. La construcción de la masculinidad en América Latina

está atravesada por la matriz del colonialismo y esto ha generado marcas violentas que siguen operando en las formas en las que se construye, refuerza y naturaliza las jerarquías.

Además de estas cuatro articulaciones, aseguró Sempol, se podrían incluir varias más, incluso algunas que ayuden a pensar la relación entre lesbofobia y género o transfobia y género. Esta alternativa teórica, lejos de hacer proliferar las categorías, lo que busca es evitar invisibilizar formas específicas de desigualdad que funcionan en forma contingente a nivel social. Por eso, si bien puede resultar muy útil pensar la propuesta de Coll-Planas de focalizar la mirada en las raíces comunes que comparten la LGBTI-fobia y el sexismo, es conveniente, para Sempol, mantener, por el momento, las dimensiones de género y homolesbotransfobia como dos aspectos disociados. De esta forma, aseguró, se podría seguir visualizando cómo diferentes regímenes históricos y sexogénicos han planteado cambiantes relaciones de prevalencia entre esas dos dimensiones. Por ejemplo, históricamente la forma en la que se caracterizó la homosexualidad ha variado mucho. En algunos regímenes históricos y sexogénicos lo que ha predominado ha sido el género sobre la sexualidad y en otros ha sido exactamente al revés.

Por ejemplo, el modelo latino estudiado en el Cono Sur por Néstor Perlongher (1987), Peter Fray y MacRae (1985) y Carlos Muñoz (1996) es una forma de codificación donde el género está pautando las formas de construcción de estos actores. Por el contrario, en el modelo gay lo que predominan son los patrones de sexualidad sobre la matriz de género. O sea que si mantenemos ambas dimensiones separadas analíticamente podemos ver la complejidad de estos dispositivos de dominación y ser más asertivos en la respuesta. Si quiero lidiar con los problemas de discriminación en contextos donde predominan matrices de género sobre la sexualidad el abordaje es uno, pero si la situación es exactamente al revés la política pública y todas las formas de intervención son otras. Reivindico la necesidad de mantener ambas cosas diferenciadas a nivel teórico para hacerlas trabajar analíticamente y no reproducir acríticamente formas históricas contingentes de la desigualdad,

explicó.

Estas ventajas teóricas, para Sempol, trascienden el escenario local, ya que como señaló David Halperin (2002) han existido diferentes codificaciones identitarias homoeróticas en Occidente, entre las que destacó la figura del «invertido», donde lo que predominaba era el género sobre las dimensiones de la sexualidad. Una codificación que aún en la actualidad —debido a la coexistencia de diferentes regímenes históricos y sexogénicos— convive en América Latina con formas más transnacionales de habitar la homosexualidad y a las que históricamente se ha subestimado o se les ha prestado poca atención académica o política por la influencia del neocolonialismo y los procesos de modernización.

De todas formas, Sempol señaló —más allá de esta discusión a nivel teórico—, que al momento de pensar políticas públicas concretas es posible y conveniente generar líneas de trabajo interseccionales que exploren los problemas comunes que comparten la perspectiva de género y la LGTBI. No obstante, Sempol advirtió que construir políticas públicas de calidad con esta perspectiva implica obligatoriamente no fusionar misiones, objetivos y tareas sin incrementar las asignaciones presupuestales y desarrollar intervenciones y políticas que sean sensibles a la pluralidad de problemas existentes: dar soluciones a situaciones que implican directamente la dimensión de género, a otras que están vinculadas a la LGTBI y, por último, a aquellas que implican problemas comunes de fondo que atañen a ambas dimensiones.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES URUGUAYOS Y LA INTERSECCIONALIDAD

Existe relativo consenso a nivel académico y entre operadores políticos en torno a que es muy difícil avanzar en cuestiones de interseccionalidad a nivel institucional sin que antes el tema esté mínimamente saldado en el movimiento social. Sin este piso previo inevitablemente se instala una batalla entre las organizaciones por los recursos y en la opinión pública crecen las voces que denuncian la pérdida de centralidad de la población objetivo en las políticas públicas instrumentadas.

Durante esta primera jornada de reflexión casi todas las presentaciones, fueran académicas o de militantes sociales, coincidieron en que ya

existe en Uruguay una tradición de trabajo interseccional dentro del movimiento social que podría funcionar como un piso para desarrollar políticas públicas de este tipo. En primer lugar, afirmó Sempol, en los años ochenta la segunda ola del movimiento feminista uruguayo integró la perspectiva interseccional. La agenda feminista dialogó con la variable de clase social y, en menor medida, con la de etnia-raza, de cierta manera gracias a la existencia de una extendida «doble militancia» entre estas mujeres en sectores de izquierda que volvieron centrales los problemas de desigualdad socioeconómica. Este trabajo interseccional tuvo sus logros y límites en la década del noventa (Townsend-Bell, 2011), pero generó importantes debates internos y aprendizajes que hasta la actualidad siguen nutriendo al movimiento feminista. Esta trayectoria puede ayudar a comprender los motivos por los que el feminismo uruguayo —a diferencia de otros feminismos latinoamericanos— no tuvo dificultades en integrar en sus filas a las personas trans. En segundo lugar, señaló Sempol, existe en Uruguay un movimiento de la diversidad sexual que hizo a partir de 2005 importantes cambios en su marco de interpretativo. Antes, en la década del noventa, las organizaciones LGBTI uruguayas apelaban a la movilización a partir de las identidades sexuales y de la construcción de una agenda liberal donde los únicos aspectos a politizar y por los que luchar eran aquellos vinculados exclusivamente con la orientación sexual y la identidad de género. Esta forma de acción colectiva fue eclipsada gracias a un cambio en el paradigma del modelo de pensar los problemas de discriminación dentro del movimiento social. A partir de 2004 fue cobrando fuerza una lógica interseccional sobre la discriminación donde se reconocía la confluencia de múltiples sistemas de desigualdad en los individuos concreto.

¿Esto qué generó? —se preguntó Sempol— Que el movimiento acá comenzara a desarrollar una estrategia de trabajo interseccional que se tradujo en la articulación con otras organizaciones y otros movimientos sociales. Se formó así una familia de movimientos, donde las organizaciones de la diversidad articularon con las feministas y con parte del movimiento afrodescendiente, el estudiantil, la central obrera. Más tarde se unió el movimiento cannábico y en forma más parcial algunas organizaciones que trabajan la discapacidad.

Los logros de estos diálogos —agregó— han sido muy heterogéneos: en algunos casos se tuvo más éxito e impacto, en otros fue un proceso más complicado y estratégico porque las organizaciones tenían perfiles más identitarios. Pero es claro —afirmó este especialista— que esto terminó cuajando en una especie de bloque político social más o menos informal y relativamente estable que permitió pensar problemas conjuntos y articular estrategias en un ciclo de lucha. Este trabajo conjunto impidió que se instalara una «olimpiada de los oprimidos» (Hankivsky y Cormier, 2010), situación en la que todas las organizaciones luchan contra las otras para lograr que se priorice su agenda. En su lugar, se logró un acuerdo entre todas las organizaciones y los parlamentarios que iban a motorizar estos proyectos de ley en el Poder Legislativo, para primero intentar resolver la despenalización del aborto, luego lograr la aprobación del matrimonio igualitario y por último la regulación del cultivo y venta de la marihuana.

Pese a que hubo discusiones, incluso algunas muy acaloradas, esta forma de trabajo suscitó consenso en un *pool* importante de organizaciones sociales en todos los movimientos ya mencionados y la estrategia fue exitosa ya que se logró la aprobación de los tres proyectos de ley. En ese sentido, Magdalena Bessonart del Colectivo Ovejas Negras subrayó que su organización es «feminista y de la diversidad sexual» y que viene trabajando aspectos vinculados al género, a la clase, a la etnia-raza y a la discapacidad en diálogo con la diversidad sexual. «Trabajamos a partir de una síntesis política que nos dice que tiene más impacto trabajar así, que lograrás más cosas, tenés más llegada y crecés y te formás gracias a que te enterás de otras cosas que a vos no te pasan. No necesitás ser la causa para militar la causa», concluyó.

La política atraviesa el cuerpo y este es también un lugar de resistencia y de intersecciones. Para Delfina Martínez, integrante de la Unión Trans del Uruguay (UTRU), para quien su construcción en tanto sujeto político implicó

... procesar previamente varias cosas que atravesaban mi cuerpo en forma interseccional. Primero estaba todo el asunto del comercio sexual. Al ver esto entendí que las personas trans pertenecemos a las clases sociales más bajas. Después me pregunté por qué hoy aún existe en nuestra sociedad una visión tan despectiva de los cuerpos trans, y allí entendí que esta sociedad está regida por un orden patriarcal con una

visión totalmente binaria. Por último, puedo decir que mi afrodescendencia siempre ha estado muy presente en esto de la segregación y la falta de posibilidades.

El diálogo entre género y diversidad sexual es clave también para la activista Lilián Celiberti, integrante de Cotidiano Mujer, para pensar la matriz de colonización, que implica la subjetividad, la economía y el medio ambiente, la autoridad y la gestión y control del conocimiento.

El patriarcado es impensable sin la heteronormatividad porque esta funciona como un patrón de organización central de la cultura. Por eso romper cada una de estas categorías es un trabajo intelectual significativo, ya que el patriarcado y la racialización sostienen el patrón cultural de poder, una de las formas de colonización que existen hasta la actualidad,

dijo.

La historicidad de trabajar *en los hechos* la interseccionalidad fue reconocida también por otras activistas, como por ejemplo Karina Pan-kievitch de la Asociación Trans del Uruguay (ATRU) y por Azul Cordo de Mujer y Salud Uruguay (MYSU), para quien «en realidad pensar lo interseccional es un desafío para la política pública y es instalarlo, porque en el movimiento social ya lo estamos haciendo desde hace años».

Esta cierta tradición y los avances importantes alcanzados en la última década, precisó Sempol, no pueden impedir de todas formas que se reflexione sobre cinco desafíos con los que necesariamente se debe lidiar en la actualidad si lo que se quiere es avanzar más en esta línea. Un primer asunto pendiente es que buena parte de la izquierda uruguaya y latinoamericana sigue pensando en la centralidad de la clase social para pensar los problemas de desigualdad, minimizando el peso del género, la orientación sexual y la etnia-raza en la construcción de formas de opresión. Por lo tanto, por más que este tema esté bastante superado en el movimiento social, aquí sigue siendo un asunto pendiente. Cada vez que se exige una política social afirmativa, o se la intenta instrumentar desde el Estado —aclaró—, aparecen voces mediáticas o dentro de la propia fuerza política de izquierda que critican este tipo de estrategias y las rotulan como corporativistas o «políticamente correctas» pero de baja eficacia transformadora.

En segundo lugar, si bien los movimientos feminista y de la diversidad sexual cuentan con cierta trayectoria en la aplicación de la perspectiva interseccional, ambos tienen sus propios puntos ciegos o dificultades para el abordaje de ciertos clivajes. El feminismo uruguayo, recalcó Sempol, es el único en América Latina que no cuenta con organizaciones lésbico-feministas entre sus filas y el movimiento LGTBI no logró hasta el momento consolidar un solo espacio de reflexión y politización sobre las masculinidades o sobre las dimensiones étnico-raciales. En tercer lugar, existe una visión crítica en parte del feminismo institucional y académico local sobre la perspectiva interseccional y la problematización del sujeto político clásico universal, a los que se rotula defensivamente como «un feminismo diluyente», un abordaje que supuestamente descentra y difumina los problemas que aquejan a «la mujer». Para Sempol esta perspectiva

...no desarrolla una lectura crítica de su propio lugar de enunciación. Si la perspectiva interseccional diluye algo, no es otra cosa que el poder de las mujeres blancas, de clase media, universitarias, heterosexuales, ya que genera una reflexión crítica sobre las formas de opresión que pueden consagrar los propios discursos emancipatorios. A su vez, complejizar y profundizar no es diluir, sino evitar puntos ciegos en las políticas públicas. Mientras tengamos presente que hay formas particulares de desigualdad y las atendamos al mismo tiempo que pensamos problemas en común, me parece que estamos a salvo de legitimar alguna forma de desigualdad.

En cuarto lugar, parece cada vez más necesario trabajar hacia adentro del movimiento para lograr un mayor involucramiento de las organizaciones y militantes con esta perspectiva. Es claro, señaló Sempol, que existen posiciones encontradas: por un lado, algunas organizaciones parecen necesitar un momento más identitario para empoderarse, para fortalecer sus agendas o para plantear cuestiones que no han sido lo suficientemente tematizadas y, por otro, hay grupos embanderados con la guerra a las categorías sociales. «¿Cómo nos relacionamos con estas posiciones y con las necesidades que instala la propia acción colectiva? —se preguntó Sempol. Y respondió—:

...es todo un aprendizaje social que está en pleno proceso. Tenemos que tratar de pensar cada vez más los problemas cambiando el foco de

las identidades a los factores profundos que los generan. A su vez, en Uruguay, debido a nuestra cultura política, el movimiento es posidentitario, por lo que ha intentado desestabilizar lo más posible la identidad, sin desconocer su utilidad para visibilizar formas de desigualdad histórica. Podemos hablar de inclusión de las personas no heteroconformes o de la diversidad sexual dentro del espacio educativo, pero es imprescindible la palabra *trans* para instalar el debate sobre el acceso en los baños. De lo contrario, en mi afán de desestabilizar termino consagrando desigualdades.

De esta forma, el camino sería desestabilizar cada vez que sea posible las identidades y subsumirlas en unidades políticas más grandes y directamente ligadas a objetivos concretos, reificarlas cada vez que sea necesario combatir una forma de desigualdad contingente y particularizada.

En quinto lugar, para Sempol es necesario reflexionar sobre todos los desafíos que instala el desembarco de formas de financiamiento globales que aplican perspectivas neoliberales y que imponen toda suerte de condiciones para vehicular sus fondos en el continente. Por ejemplo, el Fondo Mundial de Lucha contra el VIH-Sida, la Tuberculosis y la Malaria exigía la creación de organizaciones exclusivamente de trans y de hombres que tienen sexo con hombres (categoría epidemiológica) para financiar intervenciones y acciones. Esto, señaló Sempol,

...iba claramente en contra de la tradición en nuestro movimiento social de organizaciones mixtas y no por identidad. Los grupos más importantes dentro de la historia LGBTI uruguaya son los que estuvieron integrados por trans, gays, lesbianas, bisexuales e incluso heterosexuales. Y esto, lejos de ser un problema (mientras hubiera una reflexión crítica acerca de las relaciones de poder y el desarrollo de estrategias internas colaborativas), permitió avanzar en forma importante en las agendas. Las políticas identitarias del Fondo generaron organizaciones que ni bien se acabó el chorro de financiamiento desaparecieron abriendo una importante distorsión en el movimiento social y una crisis en la cultura de la militancia al naturalizar formas mercantilizadas en el trabajo político y social,

concluyó.

DE BARCELONA A MONTEVIDEO: LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA

Cruells relató cómo la llegada al poder del partido Barcelona en Común implicó la unión de diferentes movimientos sociales (feminista, okupa, sindical, etc.) que buscaban generar una serie de cambios a nivel institucional en un momento de crisis económica y política. Este origen, afirmó, facilitó empezar a trabajar la interseccionalidad a nivel de políticas públicas. Cruells se insertó en Barcelona en Común a partir de su militancia en el feminismo y la universidad, donde había analizado las políticas públicas LGTBI y su cruce con las políticas feministas más clásicas. Las conclusiones de la investigación arrojaron, recordó, que había mucha dificultad para articular ambas políticas y que se las planteaba por separado cuando para ella eran políticas que por su naturaleza deberían poder trabajar juntas, porque de hecho las causas que están por detrás de ambas luchas son la opresión y las desigualdades del sexismo, independientemente de que luego este se exprese de forma diferente. A partir de ese acumulado, Cruells comenzó la discusión dentro del eje programático de su partido y aparecieron las primeras resistencias. La estrategia fue empezar con aquellos temas en los que, sin teorizar demasiado, ya se estaba trabajando de manera interseccional, como por ejemplo el tema de la salud, los derechos sexuales y reproductivos y el problema de la violencia en las escuelas, donde se propuso trabajar en forma integral y no por separado el sexismo implícito en la violencia LGTBI y la que enfrentan las mujeres.

Cruells recordó el momento de tensión que implicó el diálogo con otros partidos aliados, como el Partido Comunista o el Partido Verde, que ya tenían sectoriales de mujeres, LGTBI o ambientalistas que resistían una fusión de este tipo. La discusión se centró entonces en definir cuándo y por qué se necesitan espacios de empoderamiento identitarios y cuándo estos se vuelven una traba para avanzar en la transformación social. El asunto se volvió más difícil cuando su partido triunfó en las elecciones y hubo que modificar la institucionalidad en función del plan previamente acordado, lo que, relató Cruells, no fue nada fácil. Reunir feminismo y LGTBI implicó reagrupar en un solo espacio diferentes servicios de la vieja estructura y juntarlos por temas pragmáticos. Además, se buscó evitar que el cambio implicara solo compartir un espacio y seguir trabajando

en forma paralela, ya que está muy estudiado que eso no sirve de nada e incluso debilita las diferentes luchas y los logros conseguidos. Una vez iniciado el camino se volvió evidente, explicó la experta, que las políticas de mujeres y las LGTBI tenían recorridos muy diferentes.

Las políticas de mujeres tenían un recorrido de casi veinte años, mientras las políticas LGTBI tenían a lo sumo diez. Se había hecho un primer plan, pero evidentemente no estaban en el mismo nivel y no tenían el mismo peso dentro de la institución. También para las políticas de género teníamos una ley estatal, leyes de violencia, el estatuto de Catalunya y una ley de igualdad también catalana. O sea, todo un marco legislativo muy potente sumado a todo el marco legislativo europeo, por lo que el peso que acababa teniendo una política y la otra no eran similares.

Al final, ante esta situación y la fuerte incertidumbre de los equipos técnicos y las organizaciones LGTBI y feministas de la ciudad se resolvió elaborar dos planes, uno para la igualdad entre hombres y mujeres y otro para la diversidad sexual. «Dos planes que se parecieran mucho, donde se pudieran compartir objetivos y acciones», aclaró Cruells. En ese sentido, el plan de justicia de género buscó transversalizar esta perspectiva en toda la institución (producción de datos, programas, presupuestos, concesiones, subvenciones, cláusulas de contratación) y se buscó compatibilizar algunas de estas dimensiones con las que incluyó el plan de diversidad sexual: por ejemplo, a nivel de contratación de personal o de la inclusión de las trans en los objetivos donde se lucha contra la feminización de la pobreza, política de refugio, en el bloque de ciudad y derechos y el de barrios habitables e inclusivos y en el programa de una vida libre de violencia. También se instrumentó una prueba piloto para crear una red de escuelas por la igualdad y no discriminación, donde se trabajan diferentes ejes de discriminación (género, etnia-raza, discapacidad, edad, clase) y se creó un protocolo contra las agresiones sexistas en las fiestas de la ciudad.

Algo similar hicimos con los derechos sexuales y reproductivos. Intentamos hacer una agenda más feminista. Entonces se empezó a trabajar el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, en toda su

variedad, no solo el aborto sino también la reproducción asistida. Buscamos problematizar cómo la ginecología trabaja e invisibiliza a las mujeres lesbianas,

agregó.

De todas formas, Cruells enfatizó que más allá de los avances logrados, el camino es lento y de a poco, ya que

...cuando intentas llevar la interseccionalidad a las políticas públicas no hay que ir de prisa. Hay que ver los tiempos de los movimientos, los tiempos de las personas técnicas que están trabajando, los tiempos de cada una de las políticas, y de ver en espacios y objetivos muy concretos qué es lo que se puede hacer. Y a partir de aquí ir haciendo experiencias piloto, no querer abarcar grandes cosas, porque de hecho aquí es donde empiezas a tejer, donde empiezas a construir esa interseccionalidad.

Una gran traba para avanzar en un camino de este tipo es la disparidad de los marcos legislativos, que genera que algunos grupos tengan mucha más protección que otros.

Las normas a favor de la igualdad de las mujeres son mucho más importantes que los derechos LGTBI en Europa, en el Estado español y en Catalunya, los que básicamente están vinculados a los delitos de odio y a los derechos antidiscriminación. Ese marco te habilita al litigio personal, a la denuncia, pero no a trabajar en la promoción de derechos. Es necesario cambiar esto, así como también compartir diagnósticos. Lo que hemos visto es que las políticas de igualdad entre hombres y mujeres tienen muchísimos más diagnósticos que las políticas LGTBI, entonces cuando intentas saber qué pasa con las políticas LGTBI no encuentras una sola encuesta de victimización, algo que es imprescindible para definir una política pública,

sentenció.

Bastante diferente es la experiencia de Montevideo, donde hay una estructura no unificada pero se comparten algunos objetivos a través

de la transversalización en programas. Solana Quesada, integrante de la División Asesora para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo (IM), señaló que los logros en la instrumentación de políticas inteseccionales son más acotados en el tiempo y en la cantidad de programas implicados. Según Quesada, «la diversidad sexual irrumpió en programas que no estaban pensados así». Un ejemplo fue el programa Barrido Otoñal, que era para mujeres jefas de hogar en situación de pobreza, algo que muy pocas trans logran cumplir a cabalidad. Pero los cambios introducidos no fueron «hechos de manera sistemática», aclara. Otro cambio importante fue la inclusión pionera en los servicios de atención a violencia de la problemática de parejas lésbicas, así como se comenzó en las Comuna Mujer a asesorar y patrocinar jurídicamente el cambio de identidad de sexo. Además, Quesada destacó como herramientas fundamentales la Comisión de Equidad de Género y el Tercer Plan para la Igualdad de Género de la IM, que incluye numerosos aspectos donde se intersectan diversidad sexual y género en los servicios.

Por último, Quesada propuso generar una cultura laboral que permita superar las chacras y que fomente una cooperación capaz de aprovechar e integrar las experticias existentes entre los funcionarios. Y también sugirió como relevante avanzar a nivel normativo a efectos de generar marcos más similares entre las agendas de género y la LGBTI a nivel municipal y en el tercer nivel de gobierno. «Es una oportunidad para hacer una ley integral, que sea de igualdad y no discriminación para toda la ciudad, que va a servir para bajar a tierra políticas para los espacios públicos», explicó. ¶

CAPÍTULO III

Etnia-raza y sexualidades no heteroconformes

LA CENTRALIDAD DE LA VIOLENCIA

OTRAS BARRERAS Y ALGUNAS POSIBLES POLÍTICAS PÚBLICAS

LA EXCEPCIONALIDAD URUGUAYA EN ACCIÓN

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES: LOGROS Y DESAFÍOS

Etnia-raza y sexualidades no heteroconformes

*El comisario Pablo Echavarría emite preso al moreno
Manuel Rivera por ladrón y andar vestido de mujer*

PARTE DE LA POLICÍA DE BUENOS AIRES, 23/12/1839

Si tomamos por cierto los planteos de Sylvia Walby (2007), si bien todas las categorías relevantes de diferenciación (etnia-raza, género, clase social, orientación sexual, etc.) están mutuamente constituidas, no pierden en ningún momento su propio carácter, lo que implica en los hechos plantear que la desigualdad puede ser en ocasiones fruto del trabajo conjunto de varias dimensiones y en otro solo es fruto de la acción autónoma de uno de ellos. Esto no implica negar que las diversas desigualdades se constituyen siempre «parcialmente» también en cada uno de los sistemas económico, político y sociocultural. De ahí que a su juicio es un error pensar que para combatir la desigualdad de clase baste con prestar solo atención a lo económico. Esta visión invita a pensar desde la complejidad y a visualizar que las formas de desigualdad se constituyen frecuentemente desde una interseccionalidad asimétrica (donde no todas las dimensiones implicadas tienen el mismo peso).

Llegados a este punto podemos plantearnos tres preguntas ineludibles: ¿Cuándo y por qué se detiene la lista de categorías? ¿Qué lugar ocupan en la respuesta a esta primera pregunta los saberes que instalan los propios activistas? ¿Siempre coinciden las categorías que han sido consideradas social y políticamente importantes con las que subrayan los activistas? Todas ellas remiten no solo a cómo funciona la realidad social sino a cómo estas desigualdades son construidas y representadas en el campo político de una sociedad. Como señala Nira Yuval-Davis (2006), algunas divisiones sociales son más fuertes que otras porque implican y afectan a gran parte de la sociedad, mientras que otras deben ser batalladas insistentemente en la arena pública para volverse visibles. Esto implica que pueden existir ejes de diferenciación clave cuya importancia

o relevancia sea cuestionada o completamente ignorada a un nivel práctico y cotidiano aunque desde el punto de vista analítico su peso sea central. ¿Hay alguna dificultad de este tipo operando actualmente en Uruguay? Si bien existe cierto consenso sobre que las categorías de etnia-raza, clase y género son la trilogía más importante en casi todas las configuraciones sociales (Dhamoon, 2009; García Bedolla, 2007; Hancock, 2007), ¿cómo funciona esto en América Latina y en particular en Uruguay? ¿Los/las participantes del encuentro estuvieron de acuerdo con esta trilogía o propusieron otras?

En este capítulo se intenta contestar estas y otras preguntas a partir de la presentación sintética de los ejes y las discusiones que tuvieron lugar en la jornada *Afro LGBTI* del 13 de julio en el Centro de Formación de la Cooperación Española, de la que participaron 18 activistas y académicos uruguayos, brasileros y argentinos, con el marco de fondo de la segunda edición del Mes de la Afrodescendencia en Uruguay. La jornada fue intensa e introdujo varios puntos clave de análisis.

LA CENTRALIDAD DE LA VIOLENCIA

El proyecto occidental de la modernidad buscó dejar atrás el mundo medieval y fundar una nueva episteme anclada en la idea de la desigualdad, con base en dos orígenes distintos: la dimensión religiosa y los aspectos biológicos (razas y sexos). Los conquistadores hispanos desembarcaron con sus creencias sobre las diferencias étnico-raciales y el dimorfismo sexual y, amparándose en estas, ejercieron por doquier la violencia y construyeron formas rígidas de jerarquía durante todo el régimen colonial.

En el presente, uno de los legados de esa colonización sigue siendo la naturalización de la violencia. Tanto Claudio Nascimento, exdirector del programa Río Sin Homofobia, como Eliane Dias, representante de la Red Afro LGTB, subrayaron la fuerte presencia de este problema en Brasil. El régimen esclavista y su naturalización de formas violentas de construcción de la jerarquía y el castigo sobre el cuerpo tienen grandes continuidades en el presente. Los datos de victimización de la población «preta», si se cruzan con los de la población LGTBI, resultan

sumamente preocupantes. En términos generales, cada 25 horas una persona LGTBI es víctima de un ataque de odio en Brasil. «Nuestro país lidera el ranking mundial de los países que violan los derechos humanos de la población LGTBI, al mismo nivel que algunos países de África y Medio Oriente, donde existe incluso pena de muerte para los homosexuales», aclaró Nascimento. El número de asesinatos crece de manera alarmante: en 2000 fueron 130 asesinatos, en 2010 se registraron 260 y en 2016 343, un número «histórico», ya que nunca se había registrado una cifra tan abultada en los 37 años de historia del Observatorio de Violencia LGTB brasileiro.

A su vez, al desagregar las cifras globales de asesinatos de personas LGTBI en Brasil, Nascimento buscó destacar algunas prevalencias que demuestran cómo el género y la violencia dialogan en forma compleja: aproximadamente el 50 % de los asesinados eran gays, el 40 % personas trans y, bastante más lejos, aparecían recién las mujeres lesbianas (5 %) y las personas heterosexuales (2 %), individuos que fueron asesinadas por ser pareja de personas trans o parientes de alguno de los agredidos del grupo LGTBI.

La variable etaria también cobró relevancia durante la presentación de varios de los expertos invitados. Por ejemplo, Nascimento señaló cómo el 52 % de las personas LGTBI asesinadas tenían entre catorce y treinta años, lo que implica a su vez que gran parte de la violencia se focalice en las cohortes juveniles, volviendo central pensar el problema en su intersección con los ciclos de vida, las formas de violencia de la masculinidad hegemónica y los contornos estrictos de humanización que impone la heteronorma.

Si se analiza el grupo de víctimas en función de la etnia-raza se encuentra que el 52 % de los asesinados eran personas afro (y se supone que hay un gran subregistro). Esto implica que los hombres gay y las personas trans, jóvenes y afrodescendientes pueden ser considerados como un grupo especialmente vulnerable al tener que lidiar con formas de violencia física, enfrentar la muerte prematura o los efectos de la simple superposición de las agresiones. Esta selectividad de la violencia también se replica a nivel institucional. En ese sentido, Dias señaló cómo Brasil tiene una de las mayores poblaciones carcelarias del mundo (657.000 personas privadas de libertad) de la cual una gran parte son afrodescendientes.

Parece entonces que en América Latina la variable étnico-racial es central para analizar formas de desigualdad, así como es imprescindible poner esta categoría en diálogo con otras dimensiones como género, clase social, orientación sexual e identidad de género y generación para lograr un cuadro analítico de la complejidad social que habitan los individuos de carne y hueso. Las cifras y la visión de los activistas en Brasil coinciden y a la trilogía que tradicionalmente la literatura académica considera relevante parece haberse sumado solo algunas más.

OTRAS BARRERAS Y ALGUNAS POSIBLES POLÍTICAS PÚBLICAS

La violencia es el problema más ruidoso, pero está lejos de ser el único. Todos los especialistas coinciden en que el racismo opera en múltiples formas. Una de ellas es a nivel de las representaciones sociales disponibles en una sociedad y sobre las formas en que lo positivo, bueno, seguro y bello se construye y entreteje con matrices etnicorracializadas.

Sumadas a esta exclusión o desvalorización simbólica, las barreras de acceso a los espacios públicos, las oportunidades laborales, sanitarias y educativas son también importantes y cotidianas. Para todos los expositores de esta sesión el acceso de la población afro-LGTBI en términos igualitarios a todos estos espacios no está garantizado. Como señaló Dias «todavía importantes grupos sociales, la policía y algunos funcionarios de alto rango en agencias estatales siguen pensando que la población negra es escandalosa y delictiva». Una de las asistentes a la jornada señaló algo similar en el momento de los comentarios y preguntas. Según Tina, una de las asistentes,

...cuando las trans nos integramos a una institución muchos compañeros empiezan a confrontar y romper mitos sobre nosotras: de que tenemos una enfermedad mental, de que siempre estamos buscando, de que somos conflictivas. Empieza entonces a visibilizarse otra forma de ser trans, un modelo que logra ver la luz y que puede ser útil para las futuras generaciones de trans que vienen detrás de mí.

Estas exclusiones circulan e impactan a nivel de la subjetividad. Como señaló Nascimento:

Una persona negra va a tener un nivel de aceptación en la medida en que sea funcional a un modelo emblanquecedor. Muchos negros y negras tuvieron y tienen que adoptar patrones culturales y simbólicos asociados a lo blanco, porque negro es alguien pobre, burro, que vive en la favela, mientras que si alguien es rico y vive bien es blanco y lo blanco le permitió ese lugar. El emblanquecimiento tiene que ver con mecanismos sutiles de integración y diferenciación, en los que se sigue desvalorizando lo que somos y lo que podemos aportar. Por algo en espacios politizados casi no existe presencia de personas afro-LGTBI.

A su vez, las políticas públicas brasileras orientadas a los afrodescendientes y a la población LGBTBI tienen importantes limitaciones, ya que, como señaló Nascimento, «se trabaja con los negros y negras pero como si no tuvieran sexualidad o diferencias de clase social, o se trabaja con la población LGBTBI sin tener en cuenta su dimensión étnico-racial, las matrices religiosas, etc. En definitiva, invisibilizando la existencia de intersecciones». Este problema, claramente se podría extender también a Uruguay y Argentina, donde ha primado la construcción de políticas públicas centradas en una dimensión excluyente de desigualdad. Esto pese a que existe una «interseccionalidad para el odio», como explicó Nascimento, en tanto «si un tiro en la cabeza te mata, una persona negra LGBTBI recibirá quince o veinte tiros. Si una puñalada en el corazón te mata, a un afro-LGTBI le van a dar treinta», una realidad que obliga a pensar y construir una política que absorba y lidie en forma productiva con esta complejidad social, algo que para la población afrouruguaya implica además —y sobre todo— combatir la pobreza y la exclusión estructural en la que se encuentra subsumida, así como frenar las formas de blanqueamiento compulsivas que muchas veces deben transitar como único camino para lograr el ascenso social. «El racismo nos sigue mostrando que mientras más negro más prácticas de discriminación vivís y menos posibilidades de ascenso social tenés. Nosotros somos pobres por ser negros», recalcó Carlos Álvarez, integrante de la organización argentina Xangó. Por eso, a su juicio, si bien se debe intentar romper el esencialismo, esto no implica negar la posibilidad de construir medidas de acción afirmativa que incluyan en su instrumentación y monitoreo la presencia de los propios beneficiados.

En Brasil se crearon varias redes para promover políticas públicas de este tipo, que trabajan desde una perspectiva interseccional: una red nacional de «mujeres negras», otra de «trans negras» y una tercera de personas afro-LGTBI. Además, existen encuentros regionales y nacionales periódicos donde se evalúan la agenda y los problemas y se comparte información sobre las dificultades en la aplicación del sistema de cuotas para afro y mujeres, buscando mantener politizados estos procesos y abrir los espacios de incidencia así como derribar las barreras de acceso a los servicios y espacios de poder.

Para la socióloga Patricia Gainza, las políticas públicas uruguayas necesariamente deben aplicar una perspectiva de derechos humanos, debido a los innumerables acuerdos y tratados que firmó Uruguay en el ámbito internacional, así como también debido a que la interdependencia de los derechos y su integralidad son «casi sinónimo de la interseccionalidad, la que sería una herramienta para concretar esto». Además, Gainza recordó que esta perspectiva no implica que los individuos simplemente sumen exclusiones o desigualdades, sino que su cruce configura nuevos sujetos sujetos, una nueva realidad que es necesario atender. La pregunta se instala entonces:

¿Cómo hacerlo? ¿Cómo instrumentamos la interseccionalidad? Es claro que existe una disección de las personas a través de la política pública que rompe su integralidad como persona y de sus necesidades. Además, existe el sobrediagnóstico: hay mucha gente que diagnostica a la misma persona de manera diferente. Otra cosa: varios equipos van al mismo hogar, unos porque atienden niños, otros porque atienden viejos, lo que implica que un mismo núcleo familiar se ve sometido al estudio y al escrutinio estatal, volviéndose así un objeto de estudio.

Para Orlando Rivero, integrante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, las políticas públicas en Uruguay tienen que tener la suficiente integralidad que permita superar, aunque sea en forma parcial, una brecha profunda que existe entre los «dos países»:

...estamos hablando de entre 250 a 400.000 personas negras o afrodescendientes que están en la periferia, con alta prevalencia de jefatura

femenina, más de dos hijos e importantes brechas educativas, mientras que el país blanco está mucho más extendido territorialmente y tiene una mayor heterogeneidad interna.

Por su parte, Elizabeth Suárez, de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes de la IM, subrayó cómo desde el espacio departamental se viene trabajando para lograr que la población afro acceda a otros espacios culturales y no solo al carnaval y al candombe, así como para fomentar el desarrollo de cooperativas de viviendas y de afroartesanas. Por último, anunció la creación del Servicio de Orientación y Consejería sobre Salud Étnica —medida institucional que se concretó en abril de 2018—, algo completamente ausente hasta la actualidad en los servicios de salud departamentales.

LA EXCEPCIONALIDAD URUGUAYA EN ACCIÓN

Carlos Álvarez reivindica en su militancia cotidiana a la identidad afrodescendiente como una identidad afrodiaspórica, que implica trabajar a favor de la visibilización del colectivo afroargentino, afrouruguayo y brasileño, haitianos negros, dominicanos negros o cubanos. Este trabajo tiene especial significación en países como Argentina, México, Chile y Uruguay, que se han construido, de diferentes formas, como países blancos eurocéntricos.

En ese sentido, en Uruguay para Mauricio Coitiño, integrante del Colectivo Ovejas Negras, se invisibilizan permanentemente la existencia del racismo y de las desigualdades que persisten asociadas a su historia y a la trata. «Tenemos siempre que partir de cero, si existe o no existe, si es igual o no que en Estados Unidos. Es un gran tema. Desde el movimiento de diversidad sexual hay que visibilizar esto hacia la interna de la comunidad y hacia la interna del activismo y del movimiento», destacó. Algo similar opinó Mario Silva, integrante de la organización Mundo Afro, quien subrayó la fuerte autocomplacencia de la reflexión uruguaya: «Somos un país tolerante, abrimos la puerta a los inmigrantes, todos tocamos el tambor y tenemos los lubolos, donde se juntan negros y blancos y es un ámbito de integración. Y además somos tan integradores y

abiertos que acá la esclavitud fue muy suave. Los esclavos eran tratados como una persona más de la familia». Para Silva esta visión hegemónica silencia las violencias, las explotaciones y los conflictos y termina volviendo al que exige derechos o igualdad alguien sospechoso de romper la paz y armonía por intereses particularistas.

Aquí, quien adopta una identidad que pertenece a una minoría tiene que estar siempre a la defensiva. El afro tiene que justificar por qué se autodefine afro, el gay tiene que fundamentar por qué su orientación sexual es diferente, algo que obliga a construir todo un discurso de por qué uno es lo que es. Yo nunca he visto a Caetano Veloso justificar por qué le gusta el samba, le gusta simplemente.

Otra de las formas de invisibilizar el racismo y su impacto proviene del propio discurso de algunos sectores de izquierda, que insistentemente jerarquizan a la clase social como la forma única o central de desigualdad en la sociedad uruguaya. Este análisis, que piensa que aquí existe una desigualdad asimétrica, ha sido fuertemente cuestionado gracias a la introducción de la variable étnico-racial en los censos nacionales. Los datos confirman que el grupo más duro de la pobreza y la exclusión en Uruguay tiene pieles oscuras y que la desocupación y la brecha educativa son mucho mayores entre los afrodescendientes que en el resto de la población. Este es un debate político cotidiano y recurrente en los últimos veinte años, a pesar de lo cual cada vez que se genera permite avanzar un poco más en la visibilización de esta problemática. Por eso, para Noelia Ojeda, integrante de la organización Mizangas, «que se hable explícitamente de racismo en un ámbito público para mí es un avance. Sería muy bueno que comenzaran a hacerlo también el sistema educativo y el sistema judicial uruguayo».

Esta falta de reconocimiento implicó también para muchos activistas romper con el armario al que los había confinado la heterosexualidad obligatoria. Álvarez recuerda su propia trayectoria: «Empecé a reflexionar sobre la identidad sexual y esto también fue una revolución al interior de mi familia, mi comunidad y en las prácticas políticas que desarrollaba. Pero de eso se trata la interseccionalidad, de vivir la diferencia, de posicionarse desde ese lugar y de buscar aportar desde ahí».

A su vez, la posibilidad de pensar el diálogo y el trabajo conjunto de diferentes sistemas de desigualdad en los individuos exige pensar una teoría de la identidad que critique las formas esencialistas y que sea compatible con la perspectiva constructivista. Álvarez señaló en ese sentido cómo era importante empezar a pensar desde un lugar de «desidentidades», como «una forma de romper estas dinámicas, la política del estancamiento identitario, para ver cómo los individuos pueden fluir entre cada una de esas identidades particulares». Todos los participantes reconocieron en reiteradas oportunidades la existencia de homo-lesbo-transfobia dentro del movimiento afro y la existencia de racismo y clasismo dentro del movimiento LGTBI.

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES: LOGROS Y DESAFÍOS

En Uruguay hace ya más de dos décadas que en el campo del movimiento social se viene avanzando en la aplicación de una perspectiva interseccional de la discriminación, lo que ha permitido una transversalización de agendas. Tania Ramírez, de la organización Mizangas, señalaba en ese sentido: «La interseccionalidad a la comunidad afrodescendiente la ha atravesado y ha estado presente en todas las discusiones colectivas y en todas las conquistas de derechos que se han dado en todos estos años. Referidos a la comunidad LGTBI, a la legalización del aborto, a la regulación de la marihuana». ¿Pero cuáles son los alcances de estos cruces? ¿Dónde exactamente tienen lugar su punto de partida?

Para Ojeda la politización se inicia a partir de pensar y poner bajo análisis al propio cuerpo y los diferentes discursos y prácticas sociales que buscan capturarlo.

El cuerpo de las mujeres afrodescendientes ha estado históricamente cargado de connotación sexual; siempre hemos sido vistas como un objeto de deseo. Entonces, ¿cómo articular esto dentro del movimiento feminista?, ¿cómo problematizar el tema del racismo y la identidad de género con el género? Por eso no podemos estar luchando contra la homo-lesbo-transfobia si no pensamos en los cuerpos y en que la lucha es una.

Algo similar introdujo Martínez (UTRU) cuando inició su alocución: «Mi cuerpo travesti sin decir nada, sin querer reivindicar anda, de por sí solo abraza la interseccionalidad. Y desde esa vulnerabilidad es desde la que hablo y hago política».

El punto de partida para Coitiño está en cambio en otros dos elementos complementarios: por un lado, sostener un proyecto de lucha vinculado a la defensa de la libertad, la igualdad y la fraternidad y la dignidad de las personas no es compatible con practicar alguna forma de discriminación. «Uno no puede decir que cree en la igualdad, libertad de las personas y ser a la vez homófobo, transfóbico, racista, xenófobo; sería una contradicción esencial», recalcó. A su vez, para Coitiño, más allá de que pueda ser contextualmente estratégico unir luchas, en el fondo todos los que militan este tipo de causas creen en la «universalidad de la dignidad de las personas, algo que hace que nos irrite y nos avergüence y nos movilice todas las formas de generación de privilegios y menoscabo de derechos y discriminaciones que sufren las personas por las identidades que portan. Este es el punto inicial en el que confluirnos, y a partir de allí tenemos que hacer confluir nuestras agendas». Además, para este activista la discriminación es «polimorfa» y le «pega a todo lo que se mueve por fuera de lo hegemónico, machista, heterosexual, blanco». En el fondo la lucha social de las organizaciones afro y de la diversidad sexual es una «lucha contra la ajenidad que sienten las personas hacia otras personas». El desafío pasa, a su juicio, por construir «empatía» y explicar la necesidad de una articulación de este tipo.

En particular en Ovejas Negras, en las redes, llegan todo el tiempo cuestionamientos de gente que no entiende que uno y una es portador de múltiples identidades y cuando las vas sumando se van sumando exclusiones, y esto que para muchos puede ser muy intuitivo, hay una parte de la población que no lo ve así. Que cree esencialmente y a los ojos de otros es básicamente gay o lesbiana o trans y no problematiza nada más que eso. Y eso es un gran desafío,

concluyó.

Para enfrentar problemas de este tipo, coincidieron todos los participantes de la jornada, es necesario desplegar estrategias educativas hacia

adentro y hacia afuera del movimiento, buscando visibilizar estas formas particularizadas de discriminación, así como problematizar las formas de opresión que pueden incluir los propios discursos de emancipación.

¿Pero cuáles son los límites de este diálogo entre movimientos? Para Ojeda aún falta mucho: «Es necesario que los movimientos pueden hacer una introspección y construir una plataforma coherente sobre la lucha contra el racismo. Es hora de que cada uno de los movimientos dé un paso más en su lucha contra el racismo y ayude a darle visibilidad a este problema. Es hora de que todas estas organizaciones se apropien de esta lucha. Cosas concretas: ¿Qué vamos a hacer el 25 de julio o el 21 de marzo? ¿Con quién articulan? ¿Con quiénes trabajan?» Yendo un poco más lejos, Martínez (UTRU) planteó que si bien el espacio de la Coordinadora de la Marcha de la Diversidad es un espacio de diálogo y construcción conjunta, lo que aún predomina es que cada colectivo trabaje un eje en forma dominante y excluyente, ya que no se ha logrado, a su juicio, crear objetivos transversales a todo el movimiento.

Para Silva es necesario desarrollar los escasos estudios académicos que existen en nuestro país sobre los afros para avanzar en la perspectiva interseccional. «Tenemos que lograr problematizar esa visión auto-complaciente de que no hubo mejor esclavitud en el mundo que en el Uruguay, porque aquí los amos amaban a sus esclavos y los esclavos les pedían por favor que no los liberaran porque estaban bien así», recalcó. A su vez, dentro del movimiento afro no todas las organizaciones comparten el interés ni el paradigma interseccional. Para Silva es necesario entonces generar un gran debate interno y empezar a construir acuerdos que permitan pensar formas de lucha integrales que no terminen por priorizar un eje de desigualdad sobre otro. «¿En esta interseccionalidad todas esas problemáticas tienen un orden de prioridad? En la interseccionalidad el racismo, la orientación, la marginación económica, etc., ¿cómo se hace para abordarlas todas sin relegar ninguna?», se preguntó Silva. Para Andrés Scagliola, Secretaría de la Diversidad de la IM, para hacer política interseccional primero se deben generar espacios de diálogo que permitan visibilizar y visualizar cómo son estas intersecciones y a partir de allí comenzar a ensayar posibles alternativas. El desafío es trascender la mera agregación y encontrar formas eficientes. «Tenemos que preguntarnos cómo trabajar diversidad sexual y género en el candombe, la comparsa y

en el carnaval. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo trabajan estos ejes en las diferentes formas de religiosidad?», se preguntó. Algo bastante similar planteó Ojeda, para quien es importante encontrar el tono y el camino adecuado para avanzar dentro del movimiento afro en la construcción de un discurso sobre la diversidad, la interseccionalidad y el tema de la violencia basada en el género, mientras que para Coitiño los principales problemas surgirán cuando se comiencen a aplicar las nuevas políticas de acción afirmativa. «¿Cómo se van a articular las cuotas para trans con las cuotas para afros? ¿Qué lugar va a haber en su aplicación para la interseccionalidad?». Y el otro gran asunto pendiente es qué institucionalidad se puede construir para lograr que la lucha contra la discriminación y el racismo sea más eficiente en nuestro país.

Presentamos una queja a nivel internacional de que Uruguay tiene una Comisión de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de Discriminación que no funciona. Ahora una de las recomendaciones que se le hicieron al Estado uruguayo indica que esta institucionalidad tiene que tener capacidad técnica, tiene que tener presupuesto y además tiene que reformarse para tener una cierta jurisdicción y tener capacidad de resolver asuntos. Uno es el tema de la reparación de las víctimas: hoy en día si uno no tiene el privilegio de disponer de recursos para judicializar está perdido. El otro tema es cómo lograr que esos actos de discriminación o racismo, sean castigados sin contribuir a la inflación penal y a terminar pasando todo por la cárcel y la penitenciaria,

concluyó Coitiño.

Algo similar opinó Scagliola: «Este es un país que firma todos los convenios y tratados internacionales pero después no garantiza aquí la exhibibilidad de esos derechos. No hay duda de que una lucha interseccional sería pelear por mejores mecanismos y oficinas de denuncia y atención a las víctimas de discriminación». ¶

CAPÍTULO IV

Una revolución en la familia

EN URUGUAY

PROBLEMAS Y AUSENCIAS

Una revolución en la familia

Y cuando fue Camilo a casa, la gente nos preguntaba:

—¿Cuál es la madre?

Y nosotros respondíamos:

—Ninguno

RUBEN LÓPEZ

Durante el siglo XX hubo décadas en las que la Demografía y las ciencias sociales no se ocuparon de trabajar la familia y su relación con la vida social. Este eje pasó a ocupar nuevamente el centro de atención en el debate académico cuando se detectó el desarrollo de toda una serie de cambios decisivos en Occidente, tanto a nivel de su estructura como en la erosión de las formas más institucionalizadas de vivir ese espacio.

La primera disciplina en tomar nota de estos cambios y producir reflexión académica sobre ella fue la Sociología, a través de la producción de una serie de textos fundacionales en los años noventa. Autores como Anthony Giddens (1992), Ulrich Beck y Elisabeth Beck Gernsheim (1990) y Louis Roussel (1995) llamaron la atención sobre el creciente proceso de desinstitucionalización de los vínculos familiares, lo que generaba una creciente liberación del individuo de las ataduras que imponían la tradición, las instituciones y el matrimonio.

El cambio de prioridad en la agenda académica se debió a que hubo cambios radicales en este terreno. En los años sesenta y setenta se vieron los signos de lo que hoy se conoce como la segunda transición demográfica en Europa y que comenzaron a ser estudiados en los siguientes quince años. Como señaló Wanda Cabella, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales/UdelaR, esa gran «bolsa de gatos» que implica hablar de la segunda transición incluye varios aspectos: caída de los matrimonios de forma espectacular, algo que llama mucho la atención porque a esta institución se la evaluaba como central y muy estable; el incremento significativo de los divorcios, de las uniones consensuales y de los nacimientos

extramatrimoniales, y la caída significativa de los niveles de fecundidad. También los tránsitos de las personas se volvieron más flexibles y se extendió la complejidad y diversidad de formas de transitar y construir una familia. Apareció toda una gran cantidad nueva de figuras (padrastras, madrastras) y ya no había nada tan esperable, en la medida en que hasta cambiaban los calendarios en los que ocurren los principales eventos en una biografía tipo.

En Europa se aplazaron la mayoría de los eventos familiares: la gente se empezó a unir más tarde, porque estudiaba más para poder después generar mejores trabajos y eso que antes pasaba en los varones comenzó a ocurrir también en las mujeres. La pareja se volvió un lugar donde dos personas que negocian para obtener gratificación sexual, autonomía, consideración de su persona. La idea de la reflexividad que planteó Giddens es muy potente, porque subraya que ya no se responde a esa idea normativa de curso de familia. Pasa a ser importante la autonomía individual y la autorrealización. Eso impacta en las decisiones con respecto a los hijos.

Esta transformación, agregó Cabella, tiene como motor una serie de cambios a nivel estructural: la salida masiva de las mujeres al mundo laboral, el descenso de la fecundidad debido a que existen métodos anticonceptivos efectivos y la mujer planifica y negocia esta alternativa con objetivos laborales y profesionales, y la pérdida de centralidad del matrimonio en la vida de las mujeres, así como una mayor autonomía económica que les permite —ahora mucho más que antes— escapar de un matrimonio que las haga infelices.

EN URUGUAY

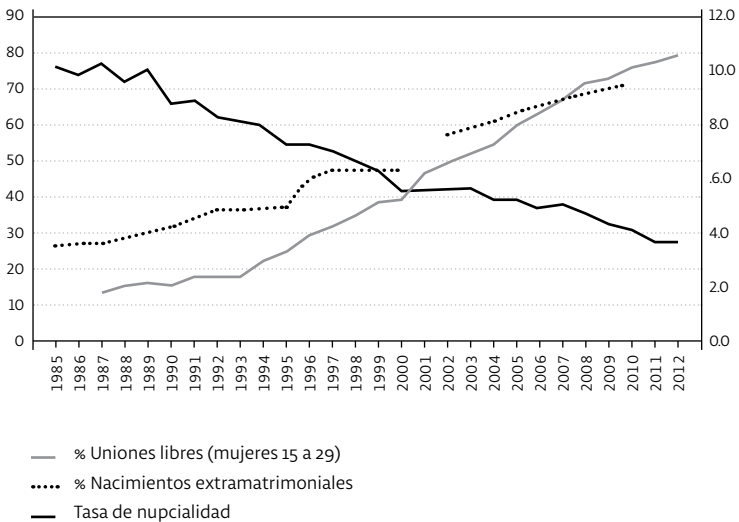
¿Existe en Uruguay una segunda transición demográfica? Para Cabella la respuesta es un rotundo sí: «existen pocas dimensiones de la vida social en las que se pueden encontrar todos los indicadores moviéndose en un sentido esperado y con tanta virulencia», afirmó. Para esta especialista existe la instalación de un nuevo pacto conyugal marcado

por la desinstitucionalización de las relaciones de pareja y la idea de diversidad de familias, algo que permea todos los sectores sociales, si bien se mantienen —e incluso se agravan— algunas diferencias en torno al calendario, como por ejemplo el evento de cuándo empezar a tener hijos.

Y agregó:

Uno piensa que la sociedad uruguaya cambia poco, pero es al revés, cambió mucho. Por ejemplo, las uniones consensuales, desde 1990 hasta 2015, tienen una progresión perfecta. La gente no se casa para empezar a vivir en pareja (salvo una proporción muy minoritaria), lo que confirma que hay desinstitucionalización. Y esto ocurre en todos los niveles educativos. O sea que la idea ahora es *primero convivo y pruebo y después me caso* y ahora ni siquiera es *me caso*.

GRÁFICO 1. Uniones libres y tasa de nupcialidad en Uruguay

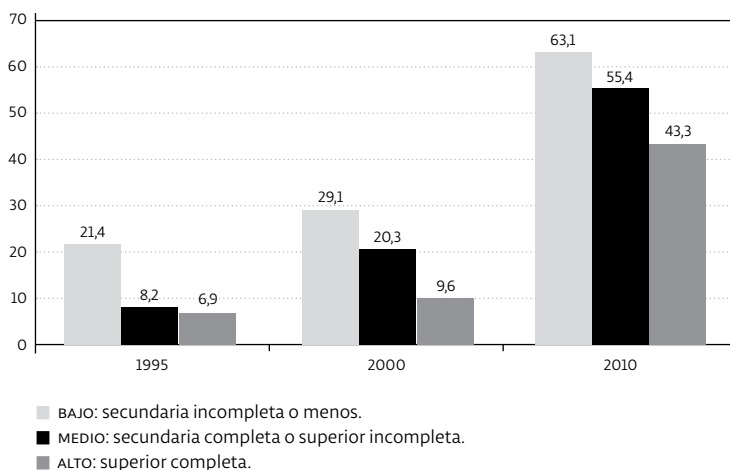


Fuente: Wanda Cabella con base en población, 1950-1995 Celade; 1996-2015 INE, revisión 2005. Nacimientos, matrimonios y divorcios: INE. Mujeres en unión libre y casadas ECH y ENHA 2006

Dos datos interesantes a subrayar: en primer lugar, el último censo nacional (2011) preguntó por primera vez a las personas que estaban en unión libre si la pareja era del mismo sexo o de uno diferente. El 0,2 % del total declaró estar en una pareja homosexual o lésbica. Más allá del obvio subregistro, las cifras parecen indicar que existe una mayoría de parejas de hombres (60 % contra 40 %). En segundo lugar, siguen existiendo —pese a todos los cambios— dos países en función de la fecundidad y el nivel educativo. Cuanto más nivel educativo, más tardía la edad de la mujer para tener hijos; cuanto menor es, más temprano se inicia este proceso. Las cifras parecen no haber cambiado en forma significativa desde los años noventa.

Estos cambios a nivel de organización familiar desafían todo el sistema de protección montado en torno a la institución del matrimonio y generan una gran cantidad de problemas nuevos desde el punto de vista jurídico. La brecha entre normas y realidad social se ha vuelto cada vez mayor durante las últimas cuatro décadas. El surgimiento de importantes movimientos sociales que trabajan sobre este eje problema implicó el de-

GRÁFICO 2. Nivel educativo y fecundidad



Fuente: elaboración Wanda Cabella con base en Censos Nacionales.

sarrollo de una serie de conquistas normativas que permitieron disminuir las diferencias entre ambas esferas de la vida social.

Scagliola subrayó en ese sentido que América Latina es una de las regiones del mundo donde más ha cambiado la normativa que protege a las parejas del mismo sexo: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, Colombia, Costa Rica y Chile. Las conquistas de derechos en Uruguay fueron: unión concubinaria (2007), reforma integral del sistema de adopción y Ley de Cambio de Nombre y Sexo Registral (2009), matrimonio igualitario (2013) y Ley de Reproducción Asistida (2014).

PROBLEMAS Y AUSENCIAS

Para el diputado Sebastián Sabini, diputado del Frente Amplio, la aprobación de las leyes donde se reconocieron derechos sexuales y derechos reproductivos implicaron

establecer, o empezar a establecer, un nuevo sentido común y eso creo que tiene que ser parte del puntito a favor que tenemos, porque cuando figuras públicas notorias deciden casarse ya no como un acto de amor, sino también como un hecho político y además hacia eso van sectores sumamente conservadores de esta sociedad, bueno, me parece que estamos conquistando parte de ese sentido común y estamos cambiando el sentido común y no es poco. Yo no fui de los que se enojó cuando Bordaberry y Lacalle Pou fueron al casamiento de Puglia, porque me parece que es una victoria para los que estamos de este lado, porque estamos cambiando la forma de ver de sectores conservadores.

Estos avances en la transformación cultural son importantes y contribuyen a fortalecer una suerte de mojón que dificulta el retroceso en las conquistas ya logradas. Pero si bien la aprobación de cada una de estas normas tuvo alta exposición y hubo bastante calidad en sus debates públicos, su implementación en diferentes oficinas estatales fue menos visible y mucho más atravesada por la falta de formación e información. Esta falta de exposición y la ausencia de mecanismos de contralor internos hace que se mucho más difícil avanzar en los cambios concretos en

estas burocracias. Esto condena a la sociedad civil a trabajar exclusivamente a partir de casos y denuncias concretas, las que no siempre se formulan, porque muchas veces las personas afectadas solo quieren ejercer un derecho y no iniciar un proceso de lucha y disputa.

En ese sentido, según Adriana Boggio, funcionaria del Registro Civil, la implementación del matrimonio igualitario se hizo a los «ponchazos». Hubo situaciones, recuerda, que confirmaban la falta absoluta de información de los operadores judiciales. «Me llamaron jueces para preguntarme “Y yo cuando los vaya a casar ¿tengo que preguntar quién hace de hombre y quien hace de mujer?”. Además, muchos impresos que utiliza el Registro siguen hablando de “don” y “doña” y no se han hecho nuevas impresiones por falta de recursos».

Otro de los problemas para lograr evaluaciones periódicas sobre qué tan bien funcionan los servicios encargados de instrumentar las leyes es que tradicionalmente el Estado en nuestro país no produce información estadística de ningún tipo. No saber cuánta gente está pudiendo efectivizar unos derechos complica mucho la posibilidad de evaluar su eficacia y la detección de barreras de acceso. Por ejemplo, Adriana Daguerre, directora del Programa de Legitimación Adoptiva y Adopción del INAU, no ofreció ninguna cifra sobre la cantidad de parejas del mismo sexo que están llevando adelante el proceso para adoptar un niño/a o que ya han logrado transitarlo en forma exitosa. Y las cifras que fueron manejadas durante la jornada fueron más que nada aproximaciones. Según Boggio unas seiscientas personas trans iniciaron el trámite de cambio de nombre y sexo registral, y de estas menos de diez son menores de 18 años.

Para Florencia Forrisi, funcionaria del Ministerio de Salud Pública, los cambios introducidos a nivel del sistema de salud permitieron una rebaja significativa de la cantidad de dinero necesaria para acceder a tratamientos de baja y alta complejidad en la reproducción asistida, pero sigue habiendo importantes dificultades para su instrumentación en los servicios de salud. A este problema se agrega la dificultad que tiene buena parte de los usuarios para realizar la denuncia: «es difícil para muchas personas porque implica posicionarse en la vida privada, en la cotidianeidad, en el deseo de tener hijos desde un lugar político y militar derechos reproductivos».

Tampoco ha acompañado los cambios normativos la academia local. Existe una gran falta de producción sobre los cambios que han atravesado

aquí la familia y la población LGBTI, así como la persistencia aún en la actualidad en la opinión pública de ideas tradicionales que explican el surgimiento de un miembro de la familia con una orientación sexual o identidad de género socialmente no esperadas como fruto de la «crisis», el abuso sexual, u otro tipo de comportamientos «desviados». También es imprescindible, subrayó Sempol, investigador de Facultad de Ciencias Sociales/Udelar, problematizar la persistente relación que se establece entre esterilidad y diversidad sexual, así como poner bajo observación el uso de términos como «arreglos familiares» como alternativos al de «familia», a efectos de evitar reforzar un orden jerárquico donde todos los cambios, todo lo nuevo, entre en la primera categoría, mientras se reserva la segunda para la familia tradicional (papa, mamá e hijos).

Además, Sempol introdujo durante su intervención una batería de asuntos para la reflexión académica y discusión política: las leyes aprobadas son un paso importante en el reconocimiento de derechos y lo gran resignificar el lugar que tradicionalmente tienen el peso de la sangre y la biología en los vínculos familiares, pero estos derechos están ligados a la dimensión erótica entre dos personas, lo que en los hechos introduce la exclusión de otro tipo de alternativas existentes a nivel social (tríos, familias donde los vínculos son no sexualizados, etc.). A su vez, las conquistas logradas no deben promover una visión de cotillón del espacio familiar, sino que la reflexión debe estar acompañada por una perspectiva crítica de las relaciones de poder que en forma intensa se reproducen dentro de ese espacio. La violencia de género no es un problema patrimonio exclusivo de los vínculos heterosexuales, sino un problema importante para la relación entre lesbianas y gays. La invisibilidad de estos problemas a nivel de política pública está relacionada tanto con la fuerte matriz heteronormativa que reproducen acríticamente las políticas públicas como con una falta de trabajo político de las organizaciones debido al contexto de fuerte impugnación conservadora que sopla por toda América Latina contra la llamada «nueva agenda de derechos». Este problema es especialmente visible cuando se aborda a nivel público o en los medios la existencia de familias trans, familias sobre las que hay un persistente y masivo borrado a nivel de políticas públicas o intervenciones institucionales. Como señaló Gonzalo Gelpi, investigador de la Facultad de Psicología (Universidad de la República):

¿Qué pasa cuando la familia duele? Duele cuando no hay un reconocimiento a una identidad trans en la infancia o la adolescencia. Duele cuando no se puede hacer la salida del clóset porque los padres tienen altos niveles de homo-lesbo-transfobia. Duele cuando te hacen separarte de tus amigos porque creen que es una mala influencia. Duele cuando a partir de estar en el marco de una familia homoparental te discriminan o te excluyen por tener dos mamás o dos papás en el colegio.

Sufrimiento, incomodidades y violencias, todas ellas se pusieron sobre la mesa, durante el encuentro, gracias al testimonio de varios invitados que contaron su experiencia en primera persona. Los primeros en romper el silencio fueron los integrantes la pareja de Mario Bonilla y Ruben López, que llevan 25 años juntos y tienen un hijo de 19 años, Camilo, quien actualmente estudia en la Armada Nacional. Su relato subrayó cómo ambos utilizaron cada norma que existió para lograr amparo jurídico y protección a su núcleo familiar y evitar sorpresas de cualquier tipo. El camino no fue fácil: «Estuvimos dando examen cada día de nuestra vida ante la mirada de los otros», concluyó López.

La historia de Cecilia Estévez fue aún más dura. Una vez que visibilizó su identidad trans la relación con sus hijos se deterioró significativamente y actualmente ni siquiera puede tener contacto con sus nietos, una situación que confirma una vez más cómo en el terreno de la familia el mayor anatema parecen ser aquellas trayectorias vinculadas con un tránsito en la identidad de género. ¶

Pueblo chico, infierno grande

«Somos personas que tuvimos que enfrentar todo tipo de prejuicios y creencias cuando [...] no había mucha información para hacerlo. Por ejemplo, la creencia de que las parejas homosexuales no duran: nosotros ya llevamos 25 años. Las ideas sobre que no podíamos o debíamos tener hijos, sino ¿cómo iban a salir? Que lo íbamos a volver un degenerado. Que éramos todos pedófilos. Que no lo íbamos a dejar elegir. Nuestra vida da hoy respuesta a cada una de esas impugnaciones. Cuando nosotros le contamos al padre de Mario que estábamos pensando en comprar una casa en Mercedes, nos pidió que nos viniéramos a Montevideo, porque se diluía acá más todo el asunto. Y nos sugirió que consiguiéramos una pareja de lesbianas e hiciéramos el simulacro de dos parejas heterosexuales. Nos planteó eso, que no fuéramos a vivir a Mercedes, que nos mudáramos para acá. Desde ahí tuvimos que remarla. [...] ¿Sabés lo peor que tuvimos que enfrentar? Es que habrá poca gente que haya dado más exámenes en la vida que nosotros, dimos examen permanente, todos los días, a toda hora y en todos los lugares. Porque era la mirada permanente del otro: cómo nos mostrábamos, qué hacíamos, que no hacíamos, con quién se juntaba el hijo. Nos hacíamos los pelotudos, pero la realidad era esa» (Ruben López)

«Una de mis hermanas siempre fue a visitarnos a casa pero nunca vino con sus hijos, porque éramos un mal ejemplo. Y los demás sobrinos fueron todos. Por supuesto no nos invitaron al casamiento». (Ruben López)

La salud en problemas

Daniela, una usuaria del servicio de salud privada que está intentando hacer un año acceder al programa de reproducción asistida señaló: «Es como que tenemos que estar dando pruebas de lo que queremos hacer todo el tiempo. Y lo único que queremos es tener un hijo. Todo demora, todo es lento y todo es un obstáculo»

Familias trans

«Mi familia no es convencional, por el contrario, es completamente atípica. Tengo un hijo de cada matrimonio y actualmente estoy divorciada desde hace tres años. Ellos dos viven con la mamá, con la mamá biológica, no con la otra mamá. Yo a veces me defino como mapá. Nada tiene que ver con los cursos, sería poco original. Estoy cumpliendo un poco todo, cuando puedo verlos, cuando ellos me lo permiten. Intento amalgamar un poco las dos partes. Debo agradecer mucho al Centro de Referencia Amigable (CRAM), que me ayudó a desandar mi camino y construir otro. Sobre todo con mis muchachos, el mayor tiene 35 años y el más chico tiene 24. Me han dado muchísimos dolores de cabeza, pero muchísimos dolores de cabeza. Yo por más de que estuve con los dos desde pequeños, fui mapá muy jovencito. No voy a decir que me obligaron a casarme, porque no sería cierto, pero sí desde un punto de vista viví con muchísima culpa. Soy closetera, me pasé cuarenta años de clóset. Un esfuerzo brutal, fue uno de los secretos mejor guardados. En aquella época no había internet, no había nada. No se sabía nada. A veces éramos putos y otras veces mi rol masculino pude llevarlo también con cierta soltura. Pude mantener un equilibrio. Me costó muchísimo, sangre, sudor y lágrimas, mantener el doble género, no era una doble vida, porque en algún momento pude disfrutar de muchas cosas, sobre todo cuando nacieron ellos. Y bueno, así como iba a facultad con ellos, jugué como loca con ellos. Me encantó, dos matrimonios distintos de dos edades completamente distintas, pero me encantaba tirarme en el piso con las crayolas, los draypenes, las acuarelas, me gustaba tirar todo en el piso. Y, él desde un lado y yo del otro, con las hojas caballito, ¿se acuerdan? Capaz que están todavía. Y bueno, disfruté con ellos, jugué, jugué y jugué. Hice un seguimiento después de los divorcios.

Pero hoy estoy dolida por su respuesta. Por la no aceptación, es muy cruel. Es demasiado cruel. Queda feo, sobre todo por los estudiantes de psicología, se van a hacer una panzada conmigo, yo voy a usar la palabra culpa, pero no sé, quizás responsabilidad. Sí, la responsabilidad del desequilibrio familiar, de mi familia, de la que construí, la única responsable

soy yo. Porque yo cambié las reglas del juego, yo fui en contra de una masculinidad que prediqué toda la vida, destruí una imagen que tenían de mí, la sustituí por otra. Tanto es así que el más chico, el de 24 años, se refiere a mi como puta: “¿Qué hacés, puta? ¿cómo te va?”. Vivo sola, y a veces me golpea la ventana y a veces ni siquiera entra y me dice: “¿Qué hacés, putita?”. ¡Pah! Es difícil. La palabra no me importa, no me molesta ya, igual que *puto* y tanta cosa que me han dicho, ya no tiene sentido, porque cambié mi vida y soy feliz. Estoy contenta, con un montón de desafíos por delante. Pero ese tono irónico, ese tono de desprecio es el que me termina matando. Y otra de mis tristezas más grandes es que soy abuela, desde hace tres años, y no me permiten verla. Mi hijo mayor me dijo: “Viejo, tu nieta necesita un abuelo, no un brisco”. Fue muy duro, demasiado duro, la conozco por el Facebook. Lucía es su hermoso nombre y mi hijo lo hizo con toda la intención, porque Lucía se iba a llamar mi hija, esa hija que no nació, pero que ya tenía nombre, ya la esperaba, y que la que fue mi señora también, entonces en honor a eso le puso Lucía a mi nieta. O sea que hoy la conclusión de mi familia es una fotografía instantánea. Se han ablandado un poco los muchachos, al menos me reconocen en mi forma femenina, ¿no? “¿Qué haces, putita?” no es “¿Qué hacés, puto?”. Son pequeñas tonterías, pequeñas cosas que alivian, que han dado pautas de cierto acercamiento. Pero la dureza con la que soy juzgada, sabido es que los hijos juzgan a los padres, y ¡caramba que son duros! ¡Caramba!» (Cecilia Estévez)

CAPÍTULO V

Personas LGTBI y el ciclo de vida

INFANCIAS TRANS: DESAFÍOS Y PROBLEMAS

LAS «PALOMITAS BLANCAS» Y EL ACOSO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

LA VEJEZ COMO PROBLEMA

Personas LGTBI y el ciclo de vida

Tradicionalmente la academia uruguaya ha tenido grandes dificultades para pensar la dimensión generacional. En general en los últimos treinta años ha habido una fuerte ausencia de este asunto en las ciencias sociales locales, déficit que en forma más reciente se ha intentado comenzar a subsanar gracias a algunos trabajos que abordan juventud, adolescencia, infancia y vejez. Pero es una producción que sigue siendo periférica en el campo académico y que se encuentra circunscripta a algunos temas en particular (violencia, VIH-Sida, educación, drogas, participación, consumos, salud).

Si el campo en este tema ya de por sí es pequeño, aún existe mucha menos producción sobre el clivaje género, diversidad y generaciones. La mayor acumulación en este cruce se ha producido sobre adolescencia y derechos sexuales y derechos reproductivos y en particular en el preocupante problema de lo que se llamó en un momento *embarazo adolescente*.

Por eso estas jornadas y el eje de reflexión que abordaron fueron pioneros, en muchas formas, así como muy fecundos para Uruguay. Funcionaron como un pretexto que permitió poner a reflexionar en dos instancias diferentes a actores sociales, operadores políticos y académicos locales, argentinos y brasileros sobre los posibles desafíos para generar una política pública que aborde ciclo de vida y sexualidades no heteroconformes.

En términos generales se puede decir que una conclusión general del encuentro fue que si a nivel de discursos públicos la sexualidad, el género y el cuerpo siempre importan, la ansiedad, las aproximaciones autoritarias y la obsesión por la vigilancia se incrementan cuanto más baja es la edad

de la persona analizada, lo que implica que aumenten las posibilidades de que el debate sea absorbido por formas de pánico moral que impiden una discusión racional. Las discusiones allí siempre terminan recortando autonomía y buscando definir límites rígidos que aseguren, sin saltos ni desvíos, el tránsito de los individuos a una adultez heteronormativa. Este asunto pone en el centro de la reflexión la tensión entre Estado, familia y niños y adolescentes. ¿Hasta dónde deben llegar las políticas públicas educativas? ¿Hasta dónde se debe involucrar en ese proceso a las familias y hasta dónde no? ¿Hasta dónde los niños son sujetos de derechos y el Estado debe garantizar su acceso a la información y el respeto de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, más allá de las creencias religiosas o valorativas que tiene y vive su familia?

La otra conclusión importante que arrojó la reflexión sobre generaciones y población LGTBI es que los dos extremos del ciclo de vida, la infancia y la vejez, son construidos a nivel social como trayectos de la vida completamente desexualizados. Por ello las políticas públicas pensadas para ambos grupos etarios ignoran por completo esta dimensión central de la vida y reifican la creencia social extendida sobre que no es un asunto oportuno ni importante de tener en cuenta.

En este capítulo se presentan algunos ejes y debates que tuvieron lugar en las dos jornadas de reflexión. La primera tuvo lugar el 23 de agosto y se centró sobre infancia y adolescencia y personas LGTBI y la segunda fue el 9 de octubre de 2017 y se centró sobre vejez y personas LGTBI. De ambas instancias participaron en calidad de expositores un total de treinta personas.

INFANCIAS TRANS: DESAFÍOS Y PROBLEMAS

En 2013, Luana obtuvo a los nueve años su nuevo documento de identidad en la vecina orilla, uno que respeta su identidad de género femenina. Este proceso no fue fácil, pero fue posible gracias a una familia que buscó acompañar y a la ayuda de una especialista que estuvo dispuesta a escuchar más allá de los límites definidos por las grandes tradicionales teóricas. «Yo no salí preparada de la universidad para ese acompañamiento, salí preparada para pensar en psicosis o perversión. Y poder poner en

tensión la teoría, preguntarle al texto, poder escuchar fue fundamental», confiesa Valeria Pavan, psicoanalista y coordinadora del área de Salud de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), quien viene trabajando con Luana desde 2011.

La mayoría de las personas ha comenzado sus expresiones muy temprano, en la infancia, y las respuestas casi siempre fueron la violencia, la expulsión del hogar o de la escuela. Por eso uno ve a niñas de once o doce años prostituyéndose. Y después vienen encastradas todas las otras exclusiones, la educación, la salud, la imposibilidad de conseguir un trabajo formal o acceder a una vivienda,

recalca.

Cuando llegaron a su consultorio el padre y la madre de Luana, recuerda Pavan, no le llamó tanto la atención la historia de la niña, pero sí la disposición de sus padres a escuchar y tratar de acompañar lo mejor posible un recorrido, más allá de que no lo entendieran del todo. Pavan tuvo que trabajar con el colegio y sus docentes, a efectos de explicar que no había ninguna patología sino una forma más de habitar la identidad. «Hay gente que toma conciencia en la infancia, otros en la adolescencia e incluso algunos en la edad adulta», señala. Pero cuando este proceso tiene lugar durante los primeros años de vida, muchas veces se produce incluso antes que la persona tome conciencia de la diferencia anatómica. «Tenemos que pensar en una estructura identitaria previa al conocimiento de la diferencia sexual, ya que una vez que esta se vuelve visible algunos sienten gran desconformidad con su cuerpo, otros no, pese a que no existe un alineamiento socialmente esperado entre anatomía e identidad de género», concluyó.

Esta experiencia acumulada de acompañar el proceso de transición de muchos usuarios/as del servicio de salud de la CHA le permitió detectar el peso que tiene la presión social en las intervenciones biomédicas a las que se someten las personas trans. «Muchos se sometieron a operaciones como resultado de la presión social, por eso trabajamos los cuerpos, buscando evitar las intervenciones medicalizadas, a efectos de que los niños y niñas se hagan a su cuerpo tal cual como es. Y en aquellos casos en que es realmente necesario apelamos a los bloqueadores como

una solución que resulta muy eficaz», agregó. El principal problema, asegura Pavan, es la falta de políticas públicas que cuestionen el binarismo y permitan una atención e integración de estas corporalidades sin mayores problemas.

En Uruguay tampoco existe casi ninguna política pública que tome en cuenta las necesidades de la infancia trans. En ese sentido, Forrisi, funcionaria del Ministerio de Salud Pública reconoció que el escenario sigue siendo bastante adverso. Pese a ello subrayó que existen equipos comprometidos con esta agenda que han comenzado a modificar las formas de trabajo y los abordajes de salud. Durante su presentación sintetizó algunos logros obtenidos en los últimos años: la inclusión de la pregunta a adolescente varones y mujeres sobre si tienen novio o novia en los espacios adolescentes, la integración de algunas pautas de atención para diversidad sexual en las guías de adolescentes y en el carnet de adolescente y la creación de una aplicación sobre sexualidad y derechos para jóvenes en la que se está tratando de incluir la temática de diversidad sexual. Forrisi recordó también cómo la Ley de Cambio de Nombre y Sexo Registral, sin mencionarlo, permite a niños y adolescentes acceder al cambio de documentación ejercitando la autonomía progresiva que consagra del Código de la Infancia y la Adolescencia. Además, recordó la importancia de la Guía de Hormonización que hace dos años publicó la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y los cursos de formación para operadores de salud en diversidad sexual que se han realizado en los últimos años.

Una dificultad importante, para Daniel Márquez, encargado de la guardia de los martes de la policlínica del Hospital Saint Bois, es que el personal de salud uruguayo está acostumbrado a intervenir solo cuando hay una enfermedad o un problema de salud, cuando también se pueden hacer intervenciones médicas en cuerpos sanos. En la misma línea, Gabriela Perrota, coordinadora técnica del programa de Salud y Procreación Responsable del Ministerio de Salud, subrayó lo mucho que falta aún en el abordaje de las mujeres lesbianas en la consulta ginecológica. A su juicio, es clave ver cómo se pregunta y qué lugar se le da a la usuaria para que pueda sentirse habilitada a plantear abiertamente sus dudas y necesidades. Asumir la heterosexualidad del consultante es la norma y a veces, cuando la persona se desmarca de esto, rompe

barreras y se anima a hacer preguntas específicas, el médico desconoce la información solicitada (hormonización, formas de protección para sexo entre chicas, etc.). «El problema es que la consulta se organiza a partir de un modelo heteronormativo que deja poco espacio para lo diferente y lo nuevo», concluyó.

Por su parte, Agostina Chiodi, integrante del Programa Nacional Salud Adolescente (Argentina), destacó cómo cuesta que los profesionales asimilen el cambio de un paradigma centrado en la tutela de los menores por otro donde se los reconoce como sujetos de derecho. Chiodi señaló que en su país se está tratando de incorporar en los últimos años la perspectiva de género, masculinidad y diversidad sexual, así como trabajar en favorecer la confidencialidad y el respeto de su privacidad, fomentando la autonomía frente al acompañamiento compulsivo del adulto.

Finalmente, varios de los expositores señalaron cómo siempre se exige al sistema público introducir cambios y hacer adaptaciones, excluyendo o minimizando las exigencias para el sector privado, espacio que tanto en las áreas de salud y la educación tiene a cargo a un gran porcentaje de la población.

LAS «PALOMITAS BLANCAS» Y EL ACOSO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Las infancias son un invento moderno. «Uno beneficioso», recalcó el sexólogo y psicólogo Ruben Campero, ya que «han facilitado una resonancia emocional con una vulnerabilidad ante otro que no es adulto, un ser que necesita protección y que tiene derechos específicos». Pero en la medida en que en la infancia se juega el corazón mismo de la reproducción social, se constituye como un territorio de fuertes disputas políticas. Estas batallas son invisibilizadas a través de la proliferación de representaciones sociales que definen a la infancia como un momento cargado de inocencia y pureza, como una etapa en la que los sujetos están completamente desexualizados. «Esta creencia busca despolitizar el tema y está vinculada con el famoso mito judeocristiano de que el conocimiento es sinónimo de comer la fruta prohibida. Esta inocencia es heteronormativa, los niños no pueden saber porque de lo contrario esto implica que se

corrompen», explicó Campero. Esta visión, además, agrega, naturaliza las formas en las que trabaja cotidianamente la heteronormatividad, ya que

...parece que no tuviera connotaciones sexuales ni de género preguntarle a un estudiante sobre sus novias en el liceo, algo que no es visto como una forma de heterosexualización o corrupción. Frente al creciente discurso sobre la existencia de una ideología de género es necesario hablar también de una ideología heteronormativa, que es impuesta en forma compulsiva e invisibiliza otras posibilidades.

Por su parte, José Ramallo, integrante del Colectivo Ovejas Negras, señaló la fuerte discriminación cotidiana que enfrentan los adolescentes en la educación media. Según la Encuesta de Clima Escolar de 2016, realizada por su organización junto a GLESEN y Todo Mejora, más del 67 % de los estudiantes dice sentirse inseguro en su centro educativo debido a su orientación sexual o identidad de género, así como un 70 % ha escuchado comentarios homofóbicos o negativos entre estudiantes y profesores. También el 70 % de los estudiantes ha sido acosado en su centro educativo por sus expresiones de género o su sexualidad. La encuesta demuestra que existe una selectividad hacia hombres que tienen expresiones de género socialmente no esperadas, lo que confirma cómo la institución educativa vigila y promueve en forma violenta masculinidades hegemónicas.

Por último, el problema del acoso y la violencia es señalado por muchos estudiantes como la razón por la que se ausentan o no asisten a su centro educativo, dificultad que en el sistema educativo también está presente entre los docentes LGTBI. «Paradójicamente, en Uruguay podemos casarnos, podemos adoptar, pero no podés hablar de tu novio o esposo dentro del liceo y mucho menos darle un beso de despedida si te acompaña a la puerta de tu trabajo», afirmó Ramallo.

Varios docentes sensibilizados con el tema de la diversidad sexual y los desafíos que instala en los centros educativos comenzaron a investigar y trabajar en forma coordinada. Algunos, como el grupo GEDUCA (colectivo de docentes que brinda talleres de género y diversidad sexual en las aulas públicas), terminaron conformando colectivos de trabajo que buscan promover la igualdad de género y el respeto y reconocimiento de la

diversidad sexual. «El colectivo nació en 2015 y reunió a varios docentes jóvenes que dese la militancia, el voluntariado o por la formación académica nos interesábamos en trabajar en estos temas, sobre los que había un gran vacío institucional», explicó Jimena García. El proceso implicó estudiar, hacer muchas consultas con personas con fuerte acumulación en este tema, así como ir acumulando experiencia haciendo talleres e intervenciones para niños, adolescentes y docentes. «El primer gran trabajo que tuvimos que hacer fue repensarnos a nosotros mismos. Problematizar el machismo que teníamos incorporado», confesó.

Pero el trabajo de cambiar el sistema educativo también tiene como protagonista a los propios estudiantes. Tamara Savio, de la Comisión Género y Diversidad del gremio de estudiantes del Liceo IAVA, narró dos experiencias que tuvieron impacto en la opinión pública durante el 2017: la primera fue la jornada de las polleras (actividad que este año tuvo muchos participantes pero que ya tiene cierta historicidad), en la que un grupo de estudiantes varones asistió al centro de estudios usando esta prenda a efectos de protestar contra las reglas heteronormativas que regulan la vestimenta en Secundaria. La segunda fue la transformación de los baños binarios del liceo durante setiembre de 2016 en baños género neutrales, a efectos de empezar a combatir la heteronormatividad en la regulación vigente sobre los sanitarios.

*Resistiré para seguir viviendo**

José, estudiante de 14 años (Rivera)

«En todos los años de la Secundaria sufrí *bullying*. En los corredores siempre te cruzás con alguien que te grita un insulto, te empuja o te pega. En primer año un grupo de chicos, por el simple hecho de aparentar ser gay, se juntaron para pegarme, ¡me quedó un dolor en la espalda!

* La mayoría de estos testimonios fueron presentados por Ramallo en la jornada y recopilados durante la realización de la encuesta que realizó Ovejas Negras sobre el clima escolar en Uruguay

No es grave, pero ta. Siempre me llegan mensajes como “Te espero en la esquina” o “Te vamos a golpear al final de la clase”. También siempre encuentro carteles pegados en mi mochila diciendo “puto”, “gay” o “marica”. [...] espero que este año el centro educativo cambie y muestre la realidad en el mundo. Porque nunca en mi vida vi a un profesor enseñar sobre la diversidad sexual».

Laura, estudiante lesbiana de 16 años (Montevideo)

«Yo había sido recientemente transferida del liceo, me había mudado cuando denuncié las agresiones, cosa que nunca me había pasado en anteriores liceos. La adscripta me dijo que era mi culpa, que yo con mi forma de vestir provocaba las agresiones verbales, que ese era un liceo muy tranquilo y yo había ido a revolucionarlo todo con mi forma de expresarme. Incluso llamó por teléfono a mi madre para decirle esos disparates. Cuando ella me dijo todas esas cosas me puse a llorar, no podía creer que un adulto estuviera degradándose en lugar de ayudarme. Cuando llamó a mi madre le dijo que yo necesitaba ir a psicólogo porque mi forma de vestir, de peinar y de actuar no era normal. Una pésima experiencia».

Rodrigo Falcón (Transboys)

«Yo era un niño, jugaba a la pelota y subía a los árboles. En la escuela era “Falcón, ¡bajate de ahí y andá a la dirección!”. Era un varón y el pene me iba a nacer o crecer por arte de magia en algún momento. Yo se lo pedía a Dios todas las noches. Mi familia era cristiana pero no tuve discriminación. Jugábamos todos juntos y no había eso de que sos machona. Sí la tuve en el liceo, cuando pasé a ser una adolescente, ahí se complicó la cosa. Pasé a ser la torta de la clase y era feo porque yo no me consideraba así y además no me podía sentar al lado de mis compañeras de clase porque todos empezaban a molestar e insultarme».

En busca de una representación

Leho de Sosa (artista y activista)

«Quiero compartir una anécdota familiar. Cuando yo tenía tres años era fanático de la Mujer Maravilla. Entonces me ponía un poncho y giraba intentando transformarme en la Mujer Maravilla. Esto a toda mi familia le parecía muy divertido. Con los años entendí que lo que evidentemente había ahí era un niño puto. Esa invisibilización de nuestras realidades me llevó a pensar que las personas trans o diversas realmente no tienen personajes en la niñez y en la adolescencia en los que mirarse. Es más fácil imaginarte en un Superman o en una Mujer Maravilla, pero las personas trans no tienen ese tipo de imágenes. No existen. Una ausencia más. Entonces se me ocurrió crear cuatro personajes, cuatro superhéroes adolescentes que tienen la particularidad de ser trans y que adquieren sus poderes cuando toman la decisión de asumir su identidad. De eso fue la exposición de cuadros que presenté en la edición de [la Semana de] Arte Trans el año pasado. Intenté reflejar ese momento de rebeldía, de aceptación, de inquietud, ese miedo. Todas esas cosas que nos pasan a todos como adolescentes cuando nos miramos en frente a un espejo y nos asumimos como somos. Y aparece entonces el maquillaje, el canto o el baile, o probar un corte de pelo».

LA VEJEZ COMO PROBLEMA

Así como la infancia estuvo, y está aún en muchos círculos sociales, completamente desexualizada, la vejez ha sido construida históricamente como un momento disociado de la vida sexual, el erotismo y de otras sendas alternativas a las que impone la heterosexualidad obligatoria.

El experto en gerontología LGTBI Carlos Eduardo Henning, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Federal de Goiás (Brasil) advirtió sobre una suerte de «imperialismo generacional» que subraya la existencia de diferencias muy importantes entre

diferentes cohortes, tanto a nivel de percepción, como de necesidades y de trayectorias. «Los momentos del curso de vida son profundamente plásticos. Lo que hoy definimos como vejez probablemente en algunos años ya no tenga validez. Nociones como vida, muerte, edad, generación, infancia, adolescencia, juventud, vejez están en constante transformación», afirmó.

De hecho, en Estados Unidos luego de que se comenzó a visibilizar una batería de problemas específicos surgieron interesantes experiencias que intentaron dar respuesta a la vejez LGBTI. En primer lugar, hubo que pensar un plan de viviendas sociales para personas LGBTI viejas en situación de calle, luego crear un servicio de visitante amistoso que trabajara con las personas viejas que quedan muy aisladas debido a la pérdida de red social por la pandemia del VIH-Sida y ahora comenzaron a aparecer servicios que trabajan con las personas trans, un grupo que no había sido abordado hasta el presente.

El otro cambio importante, en los últimos años, ha sido la erotización de la vejez, algo que hasta hace algunos años no se consideraba pertinente tematizar por considerar esa área como algo demasiado íntimo e irrelevante para pensar una política pública. La contraparte de este proceso es que comenzó a surgir una visión prescriptiva de lo que es la vejez exitosa, según la cual tener una vida sexual activa es la piedra angular. Este discurso es problemático, aseguró Henning, porque hay personas para quienes la conclusión de la carrera sexual en la vejez es algo positivo. «Muchas mujeres en investigaciones recientes manifestaron su alivio por el cese de la vida sexual en la vejez, ya que la que tenían con sus maridos era muy insatisfactoria, poco placentera», agregó.

De todas formas, este relativo estallido de los discursos sobre la sexualidad en la vejez siempre se centró en las sexualidades heteronormativas monogámicas, invisibilizando y negando la existencia de otras posibilidades. Como respuesta a este silencio nació la gerontología LGBTI a fines de los años sesenta en Estados Unidos. Henning historió las diferentes formas en las que se fue pensando la vejez LGBTI desde los años sesenta hasta la actualidad.

En la primera etapa, en los años sesenta y setenta, las investigaciones se centraron en comprender las prácticas y el impacto en la vejez de estar en el armario en un momento en que por primera vez, gracias al

movimiento de liberación homosexual, se podía vivir la sexualidad en forma abierta. Además, los investigadores manejaron durante este período una visión muy negativa, centrada en los hombres homosexuales (no se trabajó la problemática de las lesbianas y trans), afirmando que estos vivían una vejez prematura, a partir de los 30-35 años de edad, por su creciente desvalorización y exclusión de los círculos de socialización y levante homosexuales. Una exclusión de los lugares comunitarios que los obligaba a realizar fiestas privadas y reforzar los vínculos amicales.

La hipótesis del envejecimiento acelerado actualmente está muy desacreditada y las investigaciones llegaron incluso a invertir por completo la interpretación: se pasó de la visión negativa a una completamente positiva. De esta forma, en el segundo momento, en los años ochenta, los especialistas comenzaron a hablar de que los hombres homosexuales eran jóvenes por más tiempo, ya que no tenían las marcas biológicas que hacen a los hombres heterosexuales sentirse más viejos: matrimonio e hijos. También durante esta etapa se creyó que, dado que la salida del armario solía ser tan difícil o incluso traumática, los gays tenían mayor entrenamiento y preparación para hacer frente y gestionar momentos de crisis.

Esta visión no permitió la construcción de una política pública que atendiera las demandas y necesidades de la vejez LGTBI. En primer lugar, al estar exclusivamente centrada en la población gay, se invisibilizaba una vez más la situación de lesbianas y trans y sus urgencias y necesidades. En segundo lugar, al ser esta visión tan positiva y optimista sobre la vejez, no permitía el surgimiento de una ventana de oportunidad que facilitara la construcción de una política pública orientada a la vejez LGTBI.

El tercer momento, entre fines de los ochenta y los años noventa, se centró en varios de estos asuntos pendientes. Se comenzó a investigar la problemática de la vejez trans y sus duras condiciones de vida, así como se analizó la situación de las mujeres lesbianas, a partir de lo que resultados de investigaciones confirmaban notables diferencias entre ellas y los gays viejos. Muchas mujeres que desean a otras mujeres tienen trayectorias vitales en las que tuvieron encuentros heterosexuales, matrimonios e hijos, lo que implica la persistencia de una gran cantidad de redes sociales en la vejez que permiten transitar esa etapa con mucho más acompañamiento.

A fines de los años noventa comenzó el cuarto momento, conocido como el *giro pragmático*, cuando se pierde interés en discutir a nivel teórico y se opta por construir políticas públicas orientadas a esta población. Es en este momento que surgen dos modelos para pensar y construir una política orientada a la vejez LGTBI. El primero, que primó en la costa este estadounidense, promueve políticas universales para la vejez que incluyan, entre otras cosas, a las personas LGTBI. Aquí se promueven cursos de formación y sensibilización para los prestadores de servicios a efectos de preparar a todos los implicados en las necesidades y particularidades de la población LGTBI. Pero hay muchos establecimientos que son administrados por organizaciones religiosas, lo que obliga a personas trans a revertir su transición y a gays y lesbianas a volver al armario o al menos a dessexualizar esa etapa de su vida para ser aceptados.

El otro modelo, que tiene fuerza en la zona oeste estadounidense, busca construir políticas focalizadas en la vejez LGTBI para evitar este tipo de situaciones que enfrentan los viejos cuando son recibidos o internados en servicios con prestaciones de carácter universal. Pero esta forma de hacer política pública, afirma Henning, también tiene su punto ciego: no aceptan a inmigrantes, personas que no hablen inglés, por más que sean viejos LGTBI.

Toda esta literatura, agrega Henning, tiene un problema importante: en primer lugar, trabaja en forma naturalizada con el binarismo heterosexual/homosexual y el trans/cis sin siquiera pensar y considerar la gran cantidad de alternativas y recorridos que existen que rompen con esos estrictos moldes. Los trabajos académicos no han dado lugar aún a una gerontología queer, lo que exacerba las diferencias dentro del binomio sin problematizar los puentes y conexiones con otras comunidades.

En segundo lugar, los debates sobre cuál es el mejor modelo para construir una política pública orientada a la vejez LGTBI resultan más productivos si se piensan ambas alternativas (modelos del este y del oeste) más como dimensiones complementarias antes que excluyentes. De hecho, agregó Henning, actualmente algunas agencias están haciendo las dos cosas al mismo tiempo, lo que permite más opciones a los usuarios sin desatender las necesidades particulares que instalan con urgencia estas personas en el día a día.

Y, en tercer lugar, toda esa literatura promueve, legítima y fabrica visiones prescriptivas sobre lo que es una vejez LGTBI exitosa y feliz que resulta una fuente de sufrimiento subjetivo para miles de personas que no logran ubicarse dentro de los estrechos márgenes definidos.

¿Qué es una vejez exitosa? Para estas visiones por ejemplo se debe haber medicalizado por completo la vida, se debe estar en pareja y además mantener relaciones con la familia de origen. Muchas de estas cosas son muy arbitrarias y para algunas personas las relaciones con sus familias de origen fueron traumáticas y lo saludable es lograr haber podido seguir luego de su ruptura,

concluyó

Este mapeo global fue completado con la intervención de Maia Calvo, integrante del Área Académica Queer de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República), quien abordó la situación de la vejez LGTBI en Uruguay.¹ Esta especialista propuso como punto de partida tres aclaraciones: las identidades no pueden reducirse a una única categoría, por lo que cuando se habla de vejez y de diversidad sexual, es central detenerse a analizar cómo ambas cosas se cruzan para rescatar las trayectorias singulares y evitar cualquier homogenización. A su vez, en estos procesos es clave el contexto en el que tuvo lugar la trayectoria vital, el que marca a fuego y define estrechos márgenes de lo posible. Y, en tercer lugar, la falta en las políticas públicas de una perspectiva que incluya este eje no solo es un problema de reconocimiento sino sobre todo una forma de precarización de sus vidas, las que ya enfrentan grandes dificultades y fuertes desamparos.

Los gays, lesbianas y trans entrevistados para la investigación, asegura Calvo, enfrentaron diferentes desafíos: un primer momento, en el cual no había garantías de ningún tipo y había una absoluta exclusión de cualquier política estatal; otro en el que hubo persecución y represión expresa (dictadura y primeros años de democracia), signado por la

1 Véase Calvo (2013).

tortura y la muerte, y un tercero, el actual, cuando el Estado inicia su reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI. La experiencia de persecución y violencia estatal marcó a fuego a muchas biografías y varios de los miedos que inculcó siguen vigentes aún hoy pese a que el contexto cambió en forma significativa.

La generación actual de viejos LGTBI, afirma Calvo, tuvo tres posicionamientos vitales diferentes: el primero, en el que la identidad de género o la orientación sexual no se ocultó, lo que implicó entrar en guerra con el contexto en forma cotidiana; el segundo, en el cual la heteronorma se impuso en el cuerpo de las personas y estos aspectos vitales fueron vividos como una carga, por lo que la persona llegó a la vejez deseando haber vivido otra vida, una en la que no hubiera sido gay, lesbiana o trans, y, por último, están las personas que vivieron esta dimensión de su vida como un secreto fundante de su personalidad y se lo ocultaron a familiares, conocidos y amigos.

Algunas de estas personas fueron expulsados de los centros educativos, los espacios familiares y laborales debido a los fuertes problemas de discriminación y hoy no tienen forma de acreditar trayectorias que les permitan acceder a jubilaciones o pensiones compatibles con una vida digna. También enfrentan graves problemas de salud, ya que sus corporalidades no eran aceptadas dentro del sistema biomédico, lo que promovió la automedicación y transformaciones físicas clandestinas (hormonización sin supervisión médica, silicona líquida o aceite industrial).

Otro de los asuntos que aparece es que casi ninguno de los/as entrevistados/as pensó vivir la vejez y muchos de ellos no se autoidentifican como viejos ni viejas y tampoco con alguna de las categorías que incluye la diversidad sexual. «Muchos decían “Soy una persona y punto”», aclara Calvo. Esto instala un fuerte desafío para la construcción de la política pública: «¿Cómo construir una política sin el discurso de un sujeto concreto en primera persona? En un contexto donde visibilizar implica la posibilidad de desacreditar y romper delicados sistemas de equilibrios, ¿cómo hacer para construir una política pública que los incluya sin nombrarlos en forma explícita?», se preguntó.

Por último, Calvo introdujo una reflexión central: si se está de acuerdo con que los conceptos de vejez y generación son plásticos y están

sujetos a permanentes modificaciones, sería importante someter esta categoría a una crítica a sus perspectivas heteronormativas implícitas, a efectos de repensar la vejez para las personas trans.

Si tomamos en cuenta el deterioro corporal, los problemas de salud, la expulsión del mercado sexual, las personas trans son viejas a los cuarenta o cincuenta años. Este cambio en la forma de pensar nos debería llevar a diseñar políticas públicas que atiendan esta particularidad y que efectivamente contribuyan a transformar su vida cotidiana»,

concluyó.

El debate posterior fue rico y giró, entre otras cosas, en torno a la dimensión material y a la vejez: cómo tener recursos permite garantizar mayores niveles de autonomía de los viejos LGTBI y cómo promueve que familiares y conocidos se acerquen. Cuando la persona no tiene recursos sucede exactamente lo opuesto: se agrava la soledad y el aislamiento. Uno de los participantes planteó la necesidad de empezar a introducir a nivel de la comunidad gay la posibilidad de imaginar e inventar la vejez que se quiere vivir: «algo que hasta el momento era como algo inviable o terrible para los gays pero que ahora cada vez se vuelve más real y plausible».

Águeda Restaino, representante de la Red Nacional de Adultos Mayores (REDAM) señaló cómo las personas mayores viven permanentemente problemas de discriminación por su edad.

Siempre dicen «¿Para qué querés tener sexo si sos vieja?». Y yo escribí cuando me casé que no había fecha de vencimiento. Las personas mayores tenemos derecho a la sexualidad, sea la que nos guste o la que elijamos. Todas las organizaciones debemos apoyarnos para luchar contra estas formas de exclusión y promover la igualdad y la diversidad. Es necesario hablar claro, sin miedo,

afirmó

Por su parte, Romina Mauros, integrante del Colectivo Ovejas Negras, señaló la importancia de hablar de vejeces a efectos de visibilizar la diversidad de formas de llegar a esta etapa de la vida, así como planteó la necesidad de transversalizar la dimensión generacional tanto en las

políticas públicas como a nivel de los movimientos sociales a efectos de que se vuelven efectivamente amigables para los y las viejos/as. Scagliola cerró la jornada recordando precisamente como en la edición 2017 de la Marcha de la Diversidad participó un coro de personas mayores que están trabajando en los programas que lleva adelante la Secretaría de Personas Mayores de la IM. «200 viejos y viejas cantaron *A quién le importa y Soy lo que soy*. Fue muy interesante ver cómo toda esa gente participó y esto la llevo a preguntarse, cuestionarse, pedir información» concluyó. ¶

CAPÍTULO VI

Privación de libertad y población LGTBI

ALGUNOS CAMBIOS INSTRUMENTADOS

ENCIERRO A LA MEXICANA

ALGUNOS EJES PENDIENTES EN URUGUAY

Privación de libertad y población LGBTI

La cárcel surgió como una institución disciplinaria (Foucault, 1996) que buscaba el disciplinamiento de los cuerpos, la reeducación y la profilaxis del delito. Estas metas convivieron desde el inicio con un diagnóstico muy crítico sobre su verdadera capacidad de transformación individual e infinitas propuestas de reforma y reestructura. Con el tiempo estas utopías reformistas se fueron erosionando y actualmente predomina en la opinión pública antes que nada una demanda punitiva que asocia cárcel con venganza y castigo, por lo que está dispuesta a olvidar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Como si fuera poco, la cárcel no es una isla en la vida social, sino que todo lo que tiene presencia y fuerza en el mundo exterior aparece y crece, muchas veces incluso en forma más extrema, dentro de sus paredes. De ahí que la discriminación, la violencia y la heteronormatividad estén presentes en el sistema penitenciario y que sea un gran desafío pensar caminos posibles para lograr transformar la cultura institucional que habitan tanto los funcionarios como las propias personas privadas de libertad (PPL) (Mogul, Ritchie y Whitlock, 2011). Es que la disidencia sexual y genérica estuvo criminalizada durante décadas o fue considerada un agravante en muchos países de América Latina y Occidente, por lo que, al formar parte de un complejo sistema penal, la cárcel reproduce viejas prácticas y refuerza ideas regulatorias heteronormativas que definen diferentes expectativas para cada uno de los géneros (Carrabine y Longhurst, 1998).

En ese sentido, pensar la diversidad sexual en la cárcel implica poner en debate su fuerte política binarista, asumir las tensiones y los desafíos que introducen en una institución total las corporalidades trans, hablar

sobre la sexualidad entre reclusos, de la violencia sexual, de aspectos de salud y de integración, de las regulaciones heterosexistas que operan sobre el sistema de visitas íntimas y sobre las visitas cotidianas, etc. Es que al ser una institución total la cárcel no deja prácticamente ningún aspecto de la vida afuera, con el agravante de que al ser una experiencia tan masiva atraviesa en forma perdurable la trayectoria vital de aquellas personas que terminan capturadas por este dispositivo.

En este capítulo se introducen algunas ideas y fragmentos de las participaciones de algunos representantes de Ministerio del Interior (MI) y del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) durante la sesión «Personas LGBTI privadas de libertad» que tuvo lugar el 8 de noviembre de 2017 con protagonismo de la interesante experiencia que lleva adelante en el contexto mexicano la organización Almas Cautivas, y algunos testimonios de personas trans que estuvieron privadas de libertad en los últimos años. Es importante destacar que no existe prácticamente acumulación académica a nivel local que aborde esta complejidad.

ALGUNOS CAMBIOS INSTRUMENTADOS

En los últimos años, las diferentes dependencias del MI y del INR han logrado introducir cambios en la forma que se gestiona a nivel institucional la diversidad sexual tanto entre sus funcionarios como entre la población detenida o privada de libertad. Los cambios se lograron gracias a la existencia de «puntos focales» (funcionarios o unidades con formación especializada que actúan como catalizadores) dentro de estas instituciones, que trabajaron en algunas ocasiones con organizaciones sociales a efectos de alcanzar metas y objetivos concretos.

Paula Lacaño, directora del departamento de Género y Diversidad del INR, historió brevemente la creación de la estructura interna que permitió realizar un diagnóstico y llevar adelante toda una batería de cambios institucionales. Primero, se creó una Comisión de Género en setiembre de 2012, un espacio de articulación semanal sin recursos propios, que se abocó a monitorear la situación de las unidades penitenciarias y a definir un plan de posibles mejoras. Dos años más tarde se logró que se asignaran a la Comisión dos funcionarios permanentes y en 2016 se logró

consolidar la creación de un departamento con recursos propios y autonomía, que depende directamente de la dirección del INR.

Esta nueva unidad tiene como meta transversalizar todas las políticas penitenciarias para funcionarios del INR y para las PPL con la perspectiva de género y diversidad. Dentro de esta meta, el departamento trabajó especialmente en la lucha contra las formas de discriminación hacia la población LGTBI, intentando garantizar el pleno acceso a los derechos y adecuar la experiencia carcelaria a las particularidades que introduce la población no heteroconforme.

Una forma de facilitar la instrumentación de cambios a nivel más reticular fue proponer la creación de referentes de género en cada unidad, los que se vuelven el nexo con el departamento y permiten una circulación fluida de información interna y evaluar el impacto de los cambios introducidos.

El punto de partida de toda esta línea de trabajo, señaló Lacaño, surgió por la discusión que generó la transformación del sistema informático donde se registra a las PPL y a sus visitas. Luego de mucho debate se logró, a partir del 2015, que se incluyera la categoría de género y también se reconociera en la institución la existencia de un nombre social que no coincide con el nombre jurídico de la persona. «Cuando ingresa la persona, más allá de los documentos identificatorios, se le pregunta el nombre social y se le pregunta su identidad de género. Creemos que esto fue un paso muy importante para el derecho de reconocimiento de la identidad de género y todo lo que conlleva», aclaró Lacaño. El otro gran tema era cómo se ubican las corporalidades trans en el estricto y fuertemente binario sistema penitenciario. Tradicionalmente se consideraba que la anatomía era el destino (una teoría expresiva del género) por lo que las trans femeninas iban a los centros de reclusión de hombres y los trans masculinos al de mujeres, ubicándose en el primer caso a todas en un pabellón aparte por razones de seguridad. El IRN luego de ensayar en forma exploratoria una flexibilización de este criterio resolvió a fines del 2016 que aquellas personas trans que tienen ya cambiando su documento de identidad sean privadas de libertad en el centro que le corresponde de acuerdo a su identidad legal, mientras que aquellas personas que siguen sin hacer los trámites correspondientes sean ubicadas como establecía el criterio tradicional.

Otro avance significativo, señala, estuvo en el área de capacitación. En los últimos tres años se logró que la currícula de formación penitenciara se transversalizara con la perspectiva de género y diversidad. Este cambio implicó que los nuevos operadores que ingresaron a la institución en 2016 y 2017 ya tuvieron formación en esta área temática y además también se realizaron en forma paralela cursos para policías que ya están trabajando en los diferentes centros de privación de libertad, con especial énfasis en aquellos que están en las áreas de seguridad, revisoría y en el grupo de requisa. Además se buscó iniciar el ciclo de charlas con los operadores y policías que trabajan en el interior del país, a los que muy pocas veces llegan las estrategias de formación.

Asimismo, el departamento, asegura Lacaño, ha diseñado tres programas que buscan cubrir ejes claves: el primero, llamado «Ser mujer», está dirigido en forma focalizada a mujeres privadas de libertad; el segundo, llamado «Masculinidades», busca deconstruir las masculinidades hegemónicas entre los hombres privados de libertad y, en tercer lugar, el llamado «Transitar la privación de libertad», dirigido a la población trans y que desde 2014 se lleva adelante en forma conjunta con la sociedad civil (militantes de UTRU), en el Pabellón 4 de la Penitenciaría Santiago Vázquez (ex Comcar).

Originariamente, la población trans estaba recluida en Santiago Vázquez con las personas que habían cometido delitos sexuales, pero a partir de 2014 se creó una unidad aparte para las personas trans y homosexuales. El motivo por el que se resolvió unir en un mismo lugar a ambas poblaciones fue un tema de espacio: al ser tan grande el pabellón y tan reducido el grupo de personas trans, este necesariamente tenía que convivir con otro grupo. Entonces se pensó que los homosexuales eran el grupo que podía tener más proximidad con el de las trans en todo lo relacionado con necesidades, problemas y reclamos dentro del sistema penitenciario. En ese sentido Lacaño señaló:

Es todo un asunto el tema que el espacio sea compartido. Es claro que hay homosexuales en diversos módulos, pero ingresan al Pabellón 4 los que piden por seguridad. En realidad se dan dinámicas en la que algunos internos para estar en un lugar más digno dicen que son homosexuales... Entonces, cuando detectamos que hay un varón que declaró

ser homosexual, que quiere seguridad y vemos que tiene visitas íntimas con una mujer que viene a verlo o que tiene familia, se lo vuelve a entrevistar, se lo consulta. Y a veces te dicen: «No, en realidad mentí, quería estar en un lugar mejor». Y ahí se les asigna otro lugar que no los perjudique, pero se los traslada para tratar de mantener el agrupamiento. O también pasa mucho que son pareja de las mujeres trans, es difícil porque es un tema de autopercepción.

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) creó en 2013 la Tarjeta Uruguay Social (TUS) Trans que permite el acceso a toda la población trans a una prestación mensual mínima. Pero las trans privadas de libertad no podían acceder a esta prestación, limitación que logró subsanarse gracias a las negociaciones llevadas adelante por el Departamento de Género y Diversidad. Un cambio importante, porque las personas trans no tienen prácticamente visitas en la cárcel ni red social que las apoye, por lo que una prestación económica de este tipo resulta clave para sus estrategias de sobrevivencia durante el encierro. Además, recuerda Lacaño, gracias a la articulación entre el MIDES, la UTU y el Inefop se logró instrumentar una serie de cursos de peluquería para todas las interesadas y también se logró que varias se integraran al polo de trabajo industrial, algo impensable hace algunos años. Como si fuera poco, varias también se integraron a la comparsa que existe en el INR y pudieron desplegar aspectos más ligados a lo expresivo y a lo corporal.

Por último, el departamento logró coordinar con la policlínica del Saint Bois, lo que permitió a una de las reclusas reiniciar su proceso de hormonización, así como se logró que infectólogos visiten semanalmente el pabellón junto a militantes de RUJAP y MASVIHDAS, quienes llevaron adelante una serie de talleres de sensibilización sobre este tema.

Aún está pendiente, reconoció Lacaño, modificar la reglamentación que establece el proceso de revisoría. El artículo que actualmente se está discutiendo en la esfera ministerial establece que las personas trans puedan decidir el género de la persona que va a proceder con la revisión. Además, también se logró que los sistemas penitenciarios reconozcan sin problemas las visitas íntimas entre parejas homosexuales, pero todavía esta posibilidad no es tan fácil de concretar cuando está implicada una persona trans (tanto cuando son la visita o cuando reciben visitas).

Por su parte, en la Secretaría de Estado también se vienen produciendo cambios a nivel interno. Cecilia Erhardt, de la División de Género del MI, repasó algunos de las transformaciones que promovió su dependencia en el área de la seguridad pública. En 2015 la División publicó una *Guía de Diversidad Sexual* donde se introduce una conceptualización base y luego una serie de recomendaciones para mejorar la actuación policial cuando se interactúa con población LGTBI, y se hizo una campaña antidiscriminatoria a través de la impresión de folletería y afiches. Además, se logró modificar el programa en el que todos los policías cargan la información y novedades, mediante la inclusión de un campo donde se permite incluir el nombre social de la persona cuando no coincide con su documento legal y que la identidad de género sea tenida en cuenta cuando sea necesario para conducir una investigación policial. Por último, la División intentó dar un empuje fuerte al proceso de formación de sus recursos humanos y logró capacitar en género y diversidad sexual en todo el país aproximadamente a unos cinco mil policías entre 2016 y 2017.

ENCIERRO A LA MEXICANA

En la Ciudad de México existen diez centros penitenciarios que responden a los diferentes niveles de organización política: por eso hay cárceles federales, estatales y, por último, municipales. Se calcula que la población privada de libertad ronda las treinta mil personas, de las cuales 550 reclusos son personas LGTBI. De este total, unas 150 (30 %) son mujeres trans, cuyas trayectorias incluyen la cárcel, situación de calle, abandono familiar, violencia social y violencia institucional. Según los datos aportados por la Ari Vera, Presidenta de la Asociación Civil Almas Cautivas de la Ciudad de México, el 53 % de las personas trans reclusas lo fueron por el delito de hurto, pero la parte acusadora recurrentemente resulta ser la Policía. «Es muy sospechoso además que gran parte de las acusadas por la policía sean trabajadoras sexuales. En realidad, estos piden el “moje” y como la chica no lo otorgó, la acusa y como es la palabra del policía la que vale el sistema judicial la encierra», señaló Vera.

A su vez la mayoría de las personas LGBTI entrevistadas por la organización Almas Cautivas prefería pasar su tiempo de encierro con otras personas LGBTI, mientras que siete de cada diez personas trans consultadas prefieren ser encerradas en la cárcel de hombres, ya que allí pueden ejercer el comercio sexual, trabajar como peluqueras y maquillar a las visitas, así como construir un proyecto de vida con una eventual pareja. «Cambiarlas a una cárcel de mujeres sería precarizar aún más su situación, por lo que por el momento parece conveniente mantener la situación tal cual está», agregó.

El trabajo de Vera en un tema tan duro y difícil comenzó a raíz de su propia experiencia de encierro. «Mi activismo nace cuando fui detenida. Si bien por suerte se aclaró la situación y recuperé mi libertad después de cuatro meses, eso bastó para ver de primera mano lo que viven las personas trans en la cárcel. Era muy triste ver que yo era la única persona en el pabellón LGBTI que tenía una visita familiar», explicó. A partir de allí, junto con Daniela Vázquez, Frida Monroy y Lía García, resolvió fundar la organización Almas Cautivas en 2013. Se trata de un grupo que busca dar respuesta a gran parte de las necesidades que tienen las personas LGBTI encerradas a través de cuatro programas diferentes: 1) «Alma Generosa» ofrece insumos básicos a las PPL (comida, ropa, productos de higiene); 2) «Alma Emprendedora» busca crear proyectos productivos con las personas LGBTI; 3) «Alma Creativa» pretende insertar a la población en actividades lúdico-recreativas, y 4) «Alma Formadora» intenta capacitar al personal de los centros de privación de libertad en temas de género y diversidad sexual.

Los programas buscan dar respuesta a necesidades concretas y no exigen a sus usuarios nada a cambio. Una de las tareas clave con las personas trans, subraya Vera, es intentar detener el retroceso que viven en sus procesos identitarios cuando son privadas de libertad. Muchas trans se hormonizaban antes de caer presas, explica, y entre los barrotes no solo pierden la libertad, sino que empiezan a quedar prisioneras de un cuerpo que se vuelve extraño, ajeno y cada vez más masculino debido a la supresión del fármaco. «Esta construcción de una masculinidad forzada tiene un gran impacto emocional en las chicas, las desestabiliza y las deprime, por lo que debe ser tenido en cuenta como un asunto a resolver. Hicimos entonces una campaña que se llama “Hoy soy yo” en homenaje

a mi compañera de celda Bárbara, quien al verse en el espejo con peluca, arreglada y maquillada me dijo muy emocionada: “Hermana, después de siete años, hoy soy yo”», señaló.

También para Vera es imprescindible avanzar en el proceso de formación por más que esta tarea supere ampliamente la capacidad logística y de impacto de la organización.

Formar es clave. En un taller los custodios nos decían que estaban en un lugar de hombres por lo que las mujeres trans debían ser tratadas como cabrones. Que se tenían que comportar de acuerdo con el reglamento, que había que cortarles el cabello por razones de higiene y prohibirles usar el maquillaje porque podían usarlo como un medio para el escape. Había todo tipo de prejuicios. Cuando uno entiende que no se los ve como humanos comprende por qué a veces los guardias golpean los implantes de las trans: si estallan les generan un grave problema de salud,

explicó.

El trabajo de Almas Cautivas permitió primero instalar el tema LGTBI en la Secretaría del sistema penitenciario de la Ciudad de México y finalmente construir para el personal técnico un protocolo de atención a las personas LGTBI. Pero si bien estos cambios ayudaron a mejorar la situación de encierro de la población no heteroconforme, aún faltan muchas cosas por resolver.

Tenemos que discutir la salida. No podemos hablar de reinserción de las personas trans porque sencillamente nunca estuvieron insertas. Los proyectos productivos que hemos llevado adelante sirven, pero las posibilidades reales de conseguir trabajo una vez que son liberadas son muy bajas. Hay que pensar líneas pragmáticas, conseguir apoyos y financiamiento. De lo contrario resulta muy difícil revertir el problema, concluyó Vera.

ALGUNOS EJES PENDIENTES EN URUGUAY

Varios participantes de la jornada fueron activistas de diferentes organizaciones que han tenido algún tipo de trabajo sostenido en el tiempo con población LGTBI en el espacio carcelario. Martínez, de UTRU, rescató en ese sentido el valor que tuvo el trabajo de sus compañeras de organización con las chicas del Pabellón 4 de Santiago Vázquez, pero planteó que la forma en que se lleva adelante el trabajo no es sustentable en el mediano y largo plazo.

Las visitas significaron mucho para las chicas, el contacto con el afuera, el respeto, mejoraron su autoestima, pero el empoderamiento dentro de una cárcel no basta, hay que cubrir necesidades y para eso se necesitan recursos. Además, nosotras mismas somos parte de la población que está siendo vulnerada, entonces sin un trabajo es muy difícil de sostener este tipo de proyectos. Queremos seguir yendo, pero es algo muy utópico seguir cuando ni siquiera se cubre el boleto,

afirmó.

Por su parte, Mariana Riso, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), confirmó la necesidad de combatir las formas enquistadas de discriminación por orientación sexual e identidad de género en los centros de privación de libertad, así como evitar la generación de formas de aislamiento de la población LGTBI amparándose en razones de seguridad. Para Riso, otro de los problemas pendientes son las requisas y la necesidad de que se ajusten a principios de necesidad y proporcionalidad. Para lograr esto, a su juicio, tiene que haber un monitoreo constante que evite que se vuelvan un instrumento abusivo, así como tiene que darse mucha más capacitación a todo el personal que trabaja en la seguridad pública.

Finalmente, para Ramallo, del Colectivo Ovejas Negras, se ha avanzado en la capacitación de los funcionarios del MI pero lo viejo y lo nuevo aún convive en cada una de las dependencias de esa Secretaría de Estado. «Junto al nuevo lenguaje que habla de PPL y de operadores están circulando todavía las palabras *presos* y *guardias*», subrayó Ramallo. Durante su participación en una serie de cursos orientados a formar a la

policía en género y diversidad sexual, Ramallo detectó que hay un fuerte esencialismo, una gran confusión entre orientación sexual e identidad de género y un discurso fuertemente interpelante del paradigma con el que se trabajaba. Explicó que

Nosotros abordamos los temas desde una perspectiva de derechos humanos. Y lo primero que nos decían muchos policías era: «¿Y los derechos humanos de los policías?». Se ponían en debate dos concepciones de quiénes eran humanos, pero también aparecía un fuerte malestar policial vinculado a los salarios, al estigma que viven cotidianamente y a las formas de violencia comunitaria que muchas veces enfrentan sus familias en el barrio.

Por último, Ramallo planteó la necesidad de abordar centralmente también la situación de las personas gays y lesbianas privadas de libertad.

Participé en un taller en la cárcel de Punta de Rieles sobre la concepción que tenían los reclusos sobre los homosexuales. El debate se creó a partir de que el director resolvió consultarlos sobre si les parecía oportuno permitir que varios homosexuales fueran trasladados a esa cárcel. La respuesta unánime fue en contra y las visiones que circularon sobre lo gay durante la discusión eran altamente preocupantes. Incluso hubo reclusos que plantearon que «Yo con un puto no tomo mate, mirá si me contagia»,

recordó. ¶

Natalia, una experiencia que confirma los cambios

«Yo estuve privada de libertad dos veces. La primera vez fue en los años 2002-2003 por tentativa de homicidio. A los 16 años me vine a Montevideo a prostituirme y ahí entré en la noche y en la droga.

Me terminé enganchando con la pasta base, tanto que al final empecé a sentir voces en mi cabeza que me decían que la matara. E intenté hacerlo, por suerte sin éxito. Cuando me di cuenta de lo que había hecho esperé a que viniera la policía, ahí me derivaron al psiquiátrico, estuve diez meses en el Vilardebó, en la sala de seguridad, con las chicas, no con los chicos. Al final me hicieron una pericia psiquiátrica, se me consideró imputable y me trasladaron al Comcar. La llegada fue terrible: primero pasé por la parte de sanidad, que es la peluquería, donde me cortaron el pelo. El peluquero, que era homosexual, se paseó por todo el Comcar con uno de mis rulos como trofeo. Después fui al 222, la policía me hizo entrar a un cuartito, me rompieron la bombacha con un palo y me metían el palo no para adentro de la cola pero más o menos. Me humillaron de las peores formas que se les puedan ocurrir y al final me mandaron al módulo.

Y la segunda vez que estuve presa fue en 2014. Esta vez caí por tentativa de rapiña. Es que terminé recayendo y quedé en situación de calle. Estaba todo el día durmiendo en la calle y después iba al refugio a seguir durmiendo. No existía, no tenía ganas de nada. Y un día me quedé sin droga y fui a la plaza de los bomberos, estuve un rato ahí. Después quedé parada en Minas y Colonia. En la cuadra había un señor y una muchacha esperando un ómnibus. Yo andaba con un cortecito (una sierrita) que era para raspar la pipa, para sacar los restos de la pasta base. Y decidí robarle a la chica. Le robé el celular, se cayó al piso, no le saqué la cartera y me fui, pero dejé mi cartera con mis documentos. Después me empezaron a buscar. Yo un día fui a donde estaba mi madre viviendo en ese momento y me dijeron que me andaba buscando la policía. Entonces me presenté en la tercera y negué que hubiera sido yo. Al final pasé al espejo y ahí fui presa. Pero cuando entré al Comcar me encontré con que el módulo 1, que yo había conocido, ya no existía. Me encontré con que no me cortaron el pelo, me encontré con que me pusieron con otras chicas y que uno de los operadores me llamaba por mi nombre elegido. La verdad es que desde el 2003 al 2014 ha habido muchos cambios».

Uno de los testimonios, el de Carla, hizo hincapié en dos asuntos clave: las dificultades subjetivas personales para el cambio y las estrategias de los funcionarios para reproducir viejas prácticas: «Fui la primera que inauguró el vertedero. Como no tenía visita, no tenía nada, tuve que conseguir las cosas para comer y cocinarme de alguna manera. Ya estaban yendo las muchachas de género y empezamos a tener charlas para ingresar al polo industrial a trabajar. A mí me daba mucho miedo que me pasara algo porque iba a ser la única trans que iba a subir al polo. Era toda gente diferente y yo era la única. Me costó casi un mes subir y la verdad es que valió la pena, fue una buena experiencia. Jamás nadie me faltó el respeto. Tuve apoyo de la gente de ahí, como de la gente de género. Me sostuvieron tanto adentro como afuera. Es verdad que había gente que no subía porque la pareja le decía que no lo hiciera, y por eso abandonaron un montón de cosas».

«Cuesta cambiar la mentalidad de muchos policías de antes porque son muy cerrados, para mucha gente ahí adentro somos números no personas, somos un expediente [...] Para ellos no tenés derechos. Era impresionante: cuando llegaba la gente de género luchaban y peleaban con todo el mundo y entonces adelante de ellas eran una cosa, ellas se iban y todo volvía a la normalidad, cambiaban totalmente».

Algunos datos sobre trans privadas de libertad

El Censo de población Trans realizado en 2016 por el MIDES permite tener alguna información cuantitativa sobre las personas trans privadas de libertad. Según el censo, el 80 % de las personas trans privadas de libertad está en Montevideo, la amplia mayoría son trans femeninas (87 %), todas son jóvenes (salvo una) y el 73 % no tiene hijos.

A nivel de integración y ejercicio de derechos, el 54 % no ha hecho el cambio de nombre y sexo registral y el 55 % trabaja en algunos de los empleos que ofrece el sistema penitenciario (panadería, limpieza, biblioteca). A nivel educativo, un 27 % tiene primaria incompleta y el 57 % el ciclo básico incompleto. En términos sanitarios, el 80 % no toma hormonas y solo un porcentaje muy bajo de ellas afirmó tener VIH-Sida.

En lo que tiene que ver con violencia y discriminación parece haber una gran naturalización: solo el 47 % afirmó haber sido discriminada en algún centro de detención. Los encuestados señalan que el 40 % de las situaciones de discriminación fueron protagonizadas por un policía o por otro recluso. Y solo un 30 % afirma haber sido discriminada por su familia en algún momento, dato que habría que problematizar a la luz de cuántas efectivamente reciben visitas familiares durante su encierro.

CAPÍTULO VII

Múltiples ejes, múltiples debates

EL REGRESO A UNA EPIDEMIA CONCENTRADA

PENSANDO LA DISCAPACIDAD

MOVIMIENTOS SOCIALES: AUSENCIAS Y POSIBLES DIÁLOGOS

MIGRANTES LGTBI: EL DESEMBARCO DE LO GLOBAL

INMIGRANTES LGTBI EN LA URBE

Múltiples ejes, múltiples debates

El ciclo «Intersecciones LGBTI, plurales y singulares» incluyó una gran pluralidad de ejes, pero no todas las sesiones ocuparon el mismo tiempo en el cronograma ni tuvieron el mismo nivel de participación. Estas diferencias, de alguna forma, reproducían una realidad dispar tanto en la acumulación académica sobre algunos ejes como respecto a la visibilidad y centralidad de estos nudos en la agenda de los movimientos sociales. En este capítulo, por razones de espacio, se reúnen tres ejes distintos que fueron abordados durante el ciclo organizado por la Secretaría de la Diversidad. El primero giró en torno a los desafíos que en la actualidad instala la pandemia del VIH-Sida en América Latina y en particular en Uruguay. El segundo aborda la relación casi inexplorada a nivel local entre discapacidad y diversidad sexual. Por último, se presentan los principales mojones de la discusión de la última discusión del ciclo, en la cual se abordó el eje migración y población LGBTI.

EL REGRESO A UNA EPIDEMIA CONCENTRADA

La pandemia del VIH-Sida generó en Uruguay —al igual que en el resto del mundo— una fuerte alarma social entre la población LGBTI, ya que la prensa aplicó durante los años ochenta y parte de los noventa abordajes significativamente discriminatorios utilizando motes como la «peste rosa», el «demonio del Sida», el «azote de Dios» o titulares como «Travesti con sida asaltó a anciana» (Gobbi y Villar, 1991: 127-128) que reforzaron el estigma que enfrentaban homosexuales y travestis y la

asociación entre lo abyecto y lo enfermo.¹ Primero el VIH-Sida fue visto por los medios como un fenómeno externo (Claridget, 1991: 41), que era traído al país por homosexuales y personas «promiscuas», y recién en 1987, cuando se asumió como un problema de salud nacional, comenzaron las primeras campañas durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, que se centraron en forma alarmista sobre las consecuencias del virus («Sida o vida») y no en sus formas de transmisión.

Esta forma en la que se construyeron el problema y la agenda implicó que el movimiento LGTBI tuviera que enfrentar un gran dilema. Por un lado, no se podía ignorar la necesidad de trabajar un problema de salud que afectaba a la población gay y trans en particular y, por otro, desarrollar esta línea de trabajo implicaba reforzar indirectamente la asociación entre VIH y homosexualidad y la idea estigmatizante de *grupo de riesgo*. Esta tensión no fue siempre fácil de resolver para las organizaciones, pero la progresiva heterosexualización de la pandemia en los años noventa diluyó el problema.

Sin embargo, veinte años más tarde, el problema reapareció: las últimas cifras confirman una fuerte concentración del virus en la población no heteroconforme en América Latina, solo que ahora tanto la población general como la LGTBI en particular tienen una muy baja percepción de riesgo asociada al virus gracias al desarrollo de medicamentos más eficaces que permiten volver esta enfermedad un problema crónico de salud. Según Rubén Mayorga, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 80 y el 90 % de los casos nuevos de VIH-Sida en América Latina corresponde a gays y mujeres trans, por lo que «si bien es cierto que la pandemia no afecta exclusivamente a la población LGTBI, sí los afecta unas 18 a veinte veces más que al resto de la sociedad». Mayorga convocó a no mirar para otro lado, a seguir trabajando para deconstruir el estigma, pero al mismo tiempo sin evitar enfrentar la problemática actual: «las poblaciones que tienen riesgo de infectarse toda su vida pueden disminuir notablemente su riesgo, pero no hemos logrado esto aún

1 El 29 de julio de 1983 se diagnosticó el primer caso de una persona contagiada con VIH-Sida en Uruguay y desde entonces hasta el momento se han registrado 15.218 casos de VIH-Sida (MSP, 2012).

en América Latina: detectar esta población y disminuir las infecciones —agregó—. Es hora, recalcó, de que se supere ese viejo dilema y de que el movimiento social LGTBI pase a la acción».

Además, Inés Arístegui, integrante de la organización Huésped, señaló como aún en la actualidad en el Cono Sur sigue teniendo mucha fuerza el estigma de convivir con el VIH-Sida. «A partir de una investigación que realizamos en Argentina logramos confirmar cómo la carga del estigma de tener VIH es independiente del grupo identitario que habite la persona y por ello es muy útil el concepto de interseccionalidad para trabajar este tema, porque se suma al estigma previo, como una suerte de capas de discriminación». Los problemas de discriminación aparecen en casi todos los casos en los mismos lugares: la familia, el trabajo, la educación y el servicio de salud. Y en general el recorrido de gays y trans es bastante similar a partir de un diagnóstico positivo, pero se separa cuando se inicia el recorrido en el sistema de salud: mientras los gays parecen sentirse más cómodos, las mujeres trans enfrentan muchas más dificultades. Muchas evitan atenderse porque sufrieron alguna forma de discriminación en otra instancia de su vida y esto desalienta claramente que vuelvan a consultar una vez que han sido diagnosticadas.

A su vez, esta nueva concentración de la pandemia en gay y trans en América Latina se produce en un contexto en el que también hubo importantes avances en la lucha contra el VIH-Sida. En ese sentido, Juan José Meré, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA), inició la sesión con una presentación de tres novedades significativas: por cuarto año consecutivo en Uruguay descendió la cantidad de nuevos casos de infección en VIH-Sida; a nivel regional, el número de infecciones se sigue manteniendo estable en toda América Latina (se detuvo el crecimiento), y, por último, a nivel global, los últimos estudios demuestran que en las parejas serodiscordantes no existe riesgo de contagio, por más que no se utilicen preservativos, cuando la persona que está conviviendo con el virus tiene una carga indetectable gracias a los tratamientos.

Por su parte, Susana Cabrera, directora del Programa de VIH-Sida del MSP, explicó durante la jornada sus objetivos estratégicos. El primero es disminuir un 30 % la tasa de morbilidad por VIH-Sida en Uruguay. Si bien la cantidad de personas que mueren por Sida viene bajando desde

2012, actualmente siguen muriendo 170 personas al año, algo que podría reducirse a cero gracias al abordaje medicalizado existente. La clave para lograr esta reducción es el diagnóstico oportuno y la adhesión al tratamiento. En segundo lugar, el programa pretende diagnosticar al 90 % de las personas que están conviviendo con el virus. Como explicó Cabrera, no se sabe con exactitud cuántas personas conviven con el virus actualmente en Uruguay y solo hay cálculos estimativos que calculan que este grupo estaría formado por diez a catorce mil personas, de las que hasta el momento solo se logró diagnosticar a once mil, aproximadamente el 75 % del total. En tercer lugar, se pretende aumentar la cobertura del tratamiento antirretroviral de un 52 % al 80 % y aumentar significativamente la cantidad de personas que logran tener un carga indetectable, ya que estos dejan de transmitir la infección, algo que tiene un gran impacto en la salud pública porque logra cortar el ciclo.

Asimismo, señaló la necesidad de atender la franja de varones entre 15 y 24 años, en la que entre 2014 y 2016 aumentó la cantidad de casos diagnosticados, de los que 60 % son varones que tienen sexo con varones. Además, dentro del grupo de personas diagnosticadas dentro de esta franja etaria un 40 % no está tratado y hay personas incluso que ni siquiera están vinculadas al sistema de salud. Este problema obliga a reflexionar sobre la persistencia de barreras de acceso a la salud, trabas que persisten incluso pese a la reforma de la salud y el desarrollo de una red de atención primaria que busca tener mucha más proximidad con la población y las diferentes localidades. Para Cabrera se debe tener en cuenta que la aplicación de los tests en las policlínicas es intermitente, que estos servicios están focalizados en la salud materno-infantil y el embarazo y que pese a que existe un cambio en el diagnóstico, los operadores de salud que trabajan en la primera línea siguen pensando que es necesario tener una especialización en consejería, ya que se sigue creyendo que se está dando un diagnóstico de muerte cuando se comunica que el test dio positivo. Además, Cabrera considera que fallan los seguimientos de los tratamientos y que si bien se logró descentralizar la atención aún falta mucho para lograr niveles aceptables de eficacia, todavía hay poca utilización de herramientas tecnológicas (celulares, por ejemplo) y falta apoyo de la sociedad civil en el acompañamiento de pares, una herramienta sumamente eficiente para lograr el diagnóstico y la adhesión al tratamiento.

A su vez, Analice Berón, directora de la División de Salud de la IM señaló cómo las 24 policlínicas municipales buscaron durante un año, gracias a un fondo concursable, promover la realización del diagnóstico a partir de tests rápidos. Este proyecto implicó capacitar a los equipos de las policlínicas para el abordaje de las personas vulneradas en sus derechos y diversidad, el desarrollo de campañas para llegar a la población objetivo y una fuerte coordinación interinstitucional y con la sociedad civil. «En diez meses llevamos hechos más de cuatro mil tests rápidos. Si comparamos con otras experiencias, en las que con una población de siete millones se hicieron seis mil tests en dos años, nosotros, con una población de un millón y medio, llevamos 4300. Fue un trabajo intenso pero con muy buenos resultados», recalcó Berón.

Para Inés Arístegui, otras estrategias que han sido exitosas para facilitar el religamiento de la población LGTBI y el sistema de salud es la creación de horarios flexibles (vespertinos), así como la figura del *navegador de pares*, una persona que conoce el sistema de salud y ayuda a los potenciales usuarios a navegar con eficacia dentro del sistema de salud. Arístegui también recalcó la necesidad de trabajar en forma integral los problemas de salud, así como de promover las formas de autocuidado y aumentar la posibilidad de realizarse testeos rápidos, así como la profilaxis posexposición.

La jornada se cerró con la intervención de diferentes representantes de organizaciones sociales uruguayas que vienen trabajando en forma central la temática del VIH-Sida, quienes que señalaron los nuevos emergentes a atender en el presente. Gloria Álvarez (ATRU) señaló que uno de los grupos más vulnerables son las personas trans privadas de libertad, que no reciben tratamientos en tiempo y forma para lidiar con el virus, mientras que César Dos Santos (ASEPO) destacó como imprescindible atender la creciente cantidad de casos de varones de entre catorce y diecinueve años que son diagnosticados en forma positiva luego de haberse iniciado en sus relaciones sexuales con otros varones. «Esto es lo nuevo. Tanto los afectados como el tipo de discurso han cambiado en los casi treinta años que llevamos trabajando este tema. Es necesario atender siempre lo nuevo», subrayó. Por último, Mauricio Sosa (MASVIH-DAS) exigió más voluntad política para luchar contra la pandemia y señaló cómo en la edición de la Marcha de la Diversidad de 2016 el tema fue

instalado como uno de los puntos centrales en la proclama, superando así el tabú histórico que ha tenido el movimiento de la diversidad sexual con esta agenda, algo que también destacó Santiago Álvez (Ovejas Negras): «Consideramos un hecho histórico la integración de la RUJAP y este año de MasVhidas en la coordinadora de la marcha, porque vino a politizar en primera persona la identidad de personas viviendo con VIH, algo que hacía mucha falta».

A forma de cierre, Scagliola, de la secretaría de la Diversidad (IM), señaló la necesidad de incluir en forma definitiva el tema del VIH-Sida en la agenda de derechos y felicitó el trabajo de la RUJAP con varias organizaciones, que facilitó la transversalización de esta problemática. «Está en nuestras historias a lo largo de toda la vida el miedo al estigma, el miedo a hacernos el test y a que dé positivo. Eso lo hemos vivido en forma permanente».

PENSANDO LA DISCAPACIDAD

En Uruguay no existen casi antecedentes en el trabajo sobre el cruce entre discapacidad y diversidad sexual. Esta ausencia de diálogo y reflexión previa se visualizó en forma clara durante la jornada que abordó este eje el 5 de diciembre de 2017. No existía un lenguaje común: los términos, las conceptualizaciones utilizadas por unos y otros generaban confusión y en ocasiones algo de irritación entre los propios participantes, pese a que primó la buena voluntad. Además, el otro asunto interesante de la jornada fue que se visualizaron durante el debate tanto las buenas prácticas como las malas, lo que funcionó como un disparador prometedor para futuras coordinaciones que permitan solucionarlas rápidamente. Dos cosas quedaron claramente evidenciadas al concluir el encuentro: ambos colectivos sufren importantes formas de exclusión, violencia y estigmatización en la vida cotidiana y además existe voluntad política tanto en las organizaciones que trabajan discapacidad como en las que trabajan diversidad sexual de comenzar a transversalizar y trabajar en forma conjunta.

El tema de la sexualidad, y en particular el de la diversidad sexual, es muy poco trabajado dentro del campo activista de la discapacidad. Heber Da Cunha, del Programa Nacional de Discapacidad, explicitó cómo entre

los muchos derechos que le son vulnerados a las personas con discapacidad está el de amar a quien quieran, el de tener una vida sexual plena. Existen numerosos casos en los que la familia niega esa posibilidad:

Me tocó participar en una situación en la que los padres de un adolescente gay con una discapacidad intelectual construían su orientación sexual como si ahora «se le antoja que le gusten los hombres». Además estaba el problema de que el adolescente no conocía los códigos sociales y rituales de seducción por lo que se exponía a veces a situaciones complejas. Hubo una reunión con ellos, el psiquiatra y las explicaciones no conformaron a sus padres. Entonces el psiquiatra propuso darle algo para bajar su deseo sexual. Terrible, ¿no? Este adolescente no necesitaba nada, salvo acompañamiento y apoyo ya que el deseo sexual es un síntoma de salud.

El Pronadis, agregó Da Cunha, está promoviendo cambiar el paradigma de abordaje de la discapacidad: pasar del modelo de sustitución en la toma de decisiones a otro en el que se facilite apoyo a las personas con discapacidad para transitar instancias y decisiones cuando efectivamente necesitan acompañamiento de algún tipo. Esto implica derribar el instituto de la tutela que declara a la persona incapaz, lo que significa que no se puede casar ni tomar ninguna decisión sobre su vida. La nueva reglamentación propone relativizar esto y reintegrar a la persona la posibilidad de tomar decisiones sobre algunos asuntos y no seguir sustituyéndola en todo. Otra participante de Pronadis, Antonia Irazábal, subrayó cómo este programa utiliza una perspectiva interseccional en su trabajo cotidiano. De hecho, la creación de un Área de Género y Discapacidad es fruto de un trabajo académico y político de intentar visualizar el cruce entre estas dos formas de desigualdad: «Con Natalia Farías hicimos una investigación sobre la sexualidad de las mujeres con discapacidad y lo que encontramos es que la discapacidad lo cubre todo volviendo a las personas asexuadas y negando por completo esta dimensión y cuestionándose cualquier intento de acercar información».

A su vez, para Sergio Meresman, del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, explorar en los cruces interseccionales en los «extremos de la diferencia» tiene una utilidad cualitativa, ya

que constituye una oportunidad para pensar de qué manera las dificultades que encuentra un grupo se convierten en una alternativa de emancipación colectiva. Para este especialista es necesario trabajar en la visibilidad: difundir que solo el 6 % de las discapacidades son severas y que las restantes son moderadas o leves, lo que hace mucho más fácil pensar en políticas de integración. Pero para avanzar en la construcción de políticas públicas adecuadas se necesitan más datos sobre la discapacidad y visualizar su complejidad y potencialidades. Esto va de la mano con la segunda prioridad en una futura agenda posible: pensar en cómo incluir y dismantlar las principales barreras y problemas para las personas con discapacidad. Para Meresman, las principales barreras son longitudinales: las propias personas con discapacidad no se sienten bienvenidas en los servicios de salud ni invitadas a consultar o preguntar. Muchas veces las personas evitan el encuentro con los individuos que tienen alguna discapacidad porque no saben cómo nombrar, cómo lidiar con el miedo que les da decir o hacer algo incorrecto.

En tercer lugar, señaló, es necesario fortalecer y promover la participación, darle voz a los que no tienen voz y no tienen rostro. «Esto es clave porque las personas con discapacidad, por estrategias de supervivencia, han generado sus propios recursos, conocimientos, habilidades, organizaciones. Todo un conjunto de prácticas y saberes que se deben traer a la política pública», agregó. Por último, Meresman consideró que no existen solidaridades automáticas, sino que estas surgen del encuentro y gracias al trabajo político y social sostenido.

Presuponer que es posible un encuentro entre discapacidad y LGTBI no responde a la historia ni a la realidad. Les doy un ejemplo: nosotros publicamos el libro *Es parte de la vida*, donde se trabaja educación sexual y discapacidad, pero cuando el libro fue impreso en Costa Rica, sacaron de la tapa a la pareja de chicos besándose que originariamente estaba en ella. Esto muestra cómo la cuestión de la censura, la intolerancia, reaparece en lugares donde la experiencia de exclusión permitiría presuponer otra reacción,

concluyó.

Muchas veces las barreras sociales son muy altas debido, antes que nada, a cómo la gente piensa y construye la discapacidad. Adriana Riotot, de la Asociación de Padres de Sordos del Uruguay, señaló sobre este asunto:

¿Cuándo vamos a cambiar la mirada que tenemos? ¿Cuándo nos van a enseñar a cambiarla? Mi hija es sorda y yo estuve convencida de que era una discapacidad hasta que alguien me iluminó y me hizo ver que ese estado no le iba a prohibir ser feliz, tener una familia, una vocación y realizarse como ser humano. Es lo único que quiero, pero es muy difícil precisamente porque muy pocos cambiamos la mirada. Yo logré hacerlo, pero miro cómo la miran los demás y le siguen poniendo techo. Ella no tiene techo, si lo tiene hoy es porque se lo están poniendo los demás, es la sociedad la que le impide seguir creciendo.

Es difícil tener siempre presente la diversidad en todas sus dimensiones, aseguró Anabel Bernicelli, de la Facultad de Psicología (Universidad de la República), pero eso es lo que facilita y estimula utilizar la herramienta interseccional. Su servicio universitario generó el primer baño inclusivo en Uruguay, un baño que no reproduce el binarismo y que además tienen accesibilidad para todo tipo de personas, incluso un cambiador para bebé que le permite al varón ejercer sus roles de cuidado. «Pero cuando empezamos a hacer un sondeo de opiniones en la Facultad casi siempre aparecía la palabra, entre docentes y estudiantes, *pobrecitos* al lado de *discapacidad*, y cuando contábamos el proyecto muchos se alertaban, “Pero nos vamos a mezclar todos ahora”, decían. Y apareció allí entonces el terror a la sexualidad y la preocupación porque se generaran situaciones de violencia», recordó. Algo similar comentó Tania Aguerrebere, de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión de la IM, quien subrayó la necesidad de seguir avanzando en la construcción de diálogos de este tipo que permitan pensar una ciudad sin barreras y verdaderamente accesible a todos/as. «Creo que dimos un paso en este camino con la construcción del Primer Plan de Accesibilidad de la IM, que incluye metas y objetivos de cada una de las dependencias de la municipalidad en esta agenda. Estos compromisos nos van a permitir avanzar en forma significativa y volver la ciudad efectivamente más vivible», dijo.

Por su parte, Scagliola, de la Secretaría de Diversidad, aprovechó la instancia para difundir que a principios del 2019 su dependencia convocará a organizaciones para que presenten proyectos que trabajen específicamente la interseccionalidad entre discapacidad y diversidad sexual a efectos de facilitar el diálogo y la construcción de redes entre ambos movimientos. Por último, convocó a ponerse de acuerdo y a construir un protocolo de actuación ante personas que enfrentan múltiples desigualdades, con el fin de lograr una mayor celeridad y eficacia en las intervenciones estatales.

MOVIMIENTOS SOCIALES: AUSENCIAS Y POSIBLES DIÁLOGOS

La discusión de la temática de la diversidad sexual está poco presente en la agenda del movimiento de la discapacidad. Como señaló Gabriel Soto, de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, es un gran debe. «La doble discriminación existe: ya existe cuando hay una discapacidad, sin lugar a dudas mucho más cuando a esto se suma cuando vivís una orientación sexual socialmente no esperada. Hemos avanzado mucho en leyes, pero poco y nada en la transformación cultural a nivel social» recalcó. Algo similar evaluó Dieva Larrosa, del Espacio por la Accesibilidad, para quien las personas con discapacidad casi siempre son infantilizadas y negadas en su sexualidad y deseos. «Una persona con discapacidad tiene sexo, disfruta la vida igual que cualquier otra persona con discapacidad. Uno ya es mirado diferente por la discapacidad, ahora imagínense una persona con discapacidad que diga “Papá, mamá, soy lesbiana o bisexual”, ¿Cómo entrás en un mundo que discrimina?», subrayó.

Por su parte, Diego Puntigliano, del Colectivo Ovejas Negras, relató las múltiples acciones y experiencias que esta organización viene desarrollando hace años para trabajar la interseccionalidad entre discapacidad y diversidad sexual. «Hemos intentando desde el principio combatir el mito de que las personas con discapacidad no tienen sexualidad y en particular una sexualidad no heteronormativa. Lo hicimos hablando y tratando de entender cuáles son esas sexualidades y qué necesidades instalan en el terreno de los derechos y el espacio público». Este interés se traduce en toda una batería de acciones prácticas: todas las campañas

La complejidad y la política pública

Wilmar salió del armario con su familia y si al principio esta tomó bien el asunto, cuando las palabras se volvieron prácticas y la experiencia homoerótica de su hijo cobró materialidad, la familia reaccionó en forma violenta y lo dejó en situación de calle. Fue entonces cuando comenzó su periplo por toda una serie de instituciones solicitando apoyo. «Dormí en casa de amigos y compañeros de estudio, rotando todos los días para evitar molestar o abusar. Y cuando se hacía de día “¿A dónde voy?” me preguntaba. Fui al MIDES pidiendo lugar en un refugio y me dijeron que no porque no tenía el perfil. Lo único que me podían ofrecer era la Tarjeta Uruguay Social y me recomendaban seguir de casa en casa o que pidiera en la Facultad lugar en algún albergue estudiantil. Fui y tampoco tuve suerte. Hablé con algunos colectivos y ninguno pudo ayudarme tampoco, ya que estos trabajan otro tipo de problemas y no esto. Fui al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Vivienda y tampoco había ninguna solución viable. Después de golpear tantas puertas me dicen que ya que estoy recibiendo una jubilación provisoria, que fuera al BPS para pedir lugar en un albergue. Este me dijo que no y me derivó a la Intendencia. Ahí me encontré con la Secretaría de la Diversidad y por sus contactos con la directora de Pronadis. Finalmente obtengo un lugar en el Instituto Artigas, espacio que está destinado para personas mayores de 55 años con discapacidad visual en situación de vulnerabilidad y calle y para personas del interior que vienen a Montevideo a hacer cursos. Lo que veo es que falta unión, diálogo, articulación en la forma en que se piensa y aplica la política pública».

y materiales audiovisuales de la organización incluyen subtítulos además de una voz en *off*, los actos, actividades o la lectura de la proclama de la Marcha de la Diversidad cuentan con un intérprete de lenguaje de señas; durante el año del bicentenario Ovejas Negras trabajó junto con la Fundación Braille y el grupo Mizangas para realizar en diferentes partes del país talleres sobre los olvidados de la conmemoración, un trabajo que

fue muy productivo y convocó a una nutrida audiencia. También en 2012 Ovejas Negras creó, junto con la IM, el UNFPA y Mizangas, la Trivia Diversa, un material educativo en el que se trabaja lúdicamente diversidad sexual, afrodescendencia y discapacidad. Además, Ovejas participa en coaliciones que hacen *lobby* a nivel internacional, instancias en las que le ha tocado trabajar con organizaciones de personas discapacitadas e incluso presentar informes conjuntos sobre problemas comunes.

La jornada se cerró con las palabras de la directora del Pronadis, Begoña Grau, quien señaló el compromiso de avanzar con las líneas de género y discapacidad que vienen promoviéndose desde hace ya tres años. Grau aseguró que el enfoque del programa es el de derechos y reconoció que existe pese a todo esto un debe importante.

Que estemos hoy aquí hablando de interseccionalidad es importante, quién iba a decir hace unos años que esto hubiera sido posible. Creo que esto es un buen punto de partida para empezar a trabajar juntos, a pensar cómo podemos transversalizar esta política. Es necesario salir del caso o de la intervención concreta para pensar en términos generales la política y ver cómo se puede trabajar específicamente el área de salud, de inserción laboral y mejorar el acceso a la justicia.

MIGRANTES LGTBI: EL DESEMBARCO DE LO GLOBAL

Andrés Scgaliola abrió esta última jornada de encuentro procurando formular una genealogía de este espacio de diálogo. La recapitulación buscó además plantear el desarrollo de una nueva etapa dentro de la reflexión en torno a la interseccionalidad. La IM, junto con los gobiernos de Barcelona, Berlín, Medellín, Ciudad de México y Buenos Aires, gracias al apoyo del Proyecto Metrópolis, comenzó a fines de 2017 el proyecto «Interseccionalidad en las políticas LGTBI metropolitanas». Esta última sesión del debate local se volvió a su vez la primera de un debate a nivel global que busca intercambiar prácticas y experiencias de políticas públicas que trabajen con esta perspectiva, con el propósito de construir un manual general que facilite la inclusión de una perspectiva interseccional en las políticas públicas LGTBI.

En ese sentido, Octavi de la Varga, secretario general de la Asociación Mundial de Grandes Metrópolis, señaló que la meta de hacer de las ciudades espacios globales no busca otra cosa que mejorar la vida de los ciudadanos, así como generar lugares de intercambio y aprendizaje.

Ya no es posible pensar políticas homogéneas e idénticas para todo el mundo. Y esto es aún más fuerte en los espacios metropolitanos, atravesados por una gran diversidad y gran cantidad de desafíos para la convivencia. Pensar los problemas de integración no implica solo hablar de inmigrantes, sino de ciclos de vida, discapacidad y segmentación territorial por clase social. La realidad es compleja e implica que se afecten muchos elementos al mismo tiempo,

aclaró.

Por su parte, el intendente Daniel Martínez subrayó cómo la democracia es mucho más que votar cada cinco años: «Democracia es garantizar participación, control ciudadano, transparencia, y permitir que cada uno pueda vivir en paz y alcanzar sus sueños». La complejidad es intrínseca a cualquier política de la ciudad, confirmó el intendente, quien ejemplificó: «Pensar una política de movilidad implica necesariamente pensar en personas mayores, en personas con discapacidad y en todos los actores sociales que pueden estar implicados. Hay que tener la capacidad de pensar globalmente y generar espacios de reflexión que se concreten en políticas públicas específicas que logren mejorar la vida de la gente».

INMIGRANTES LGTBI EN LA URBE

Meritxell Sàez de la ciudad de Barcelona presentó tres políticas que su ciudad tiene diseñadas para gestionar los desafíos que introduce la llegada de contingentes inmigratorios: intercultural y de ciudadanía; política de atención y acogida de inmigrantes, y políticas relacionadas con refugios. La acogida implica dar, en primera instancia, atención básica y luego servicios más especializados. Allí funciona ya un protocolo que implica mencionar la existencia de colectivos LGTBI en la ciudad, explicar cuál es su situación en la ciudad y cuáles son los lugares de acogida.

Lo más desarrollado, aseguró Sàez, son los dos pisos de acogida para refugiados LGTBI porque muchas veces enfrentaban en los lugares de acogida episodios de violencia por parte de sus propios pares. Esta técnica de la política pública LGBTI del Ayuntamiento de Barcelona aseguró que se busca trabajar en forma integral la integración del refugiado, promoviendo el estudio del idioma, la inserción laboral y la obtención de su propia vivienda. «La persona puede vivir en el piso por un año, prorrogable por seis meses más. Hay un plan de trabajo con otros servicios y profesionales que acompañan a la persona, el objetivo es conseguir la autonomía, algo que no siempre es fácil», reconoció.

Por último, se está intentando promover el diálogo entre la diversidad sexual y el pueblo gitano, en el que se busca visibilizar diferencias, construir valores comunes y promover formas de respeto. Este proceso, aseguró, no es fácil, pero lo importante en la perspectiva interseccional es trabajar con calidad, valorando antes que nada el proceso mismo, «encontrarse y compartir» y no estar tan preocupados por los resultados.

Por su parte, Tomás Caballero, quien trabaja en el gobierno de Medellín, señaló que en su ciudad hay una importante cantidad de inmigración interna, muchas personas escapando de la violencia de la guerra. Caballero reconoció que no existen programas para trabajar con esta población el eje LGTBI, así como tampoco existen, por el momento, cuotas de trabajo para la población trans.

La situación opuesta a la de Medellín es la de Berlín, ciudad que en 2015 abrió sus puertas por razones humanitarias a un importante contingente inmigratorio. «No estábamos preparados», confiesa Florencio Chicote, quien trabaja en la Unidad LGBTI del Departamento del Senado de Justicia, Defensa del Consumidor y Antidiscriminación. Si bien la ciudad trabaja desde 1989 temas LGTBI y desde el 2009 viene llevando adelante un plan de acción que subraya las transversalizaciones y construye 64 medidas concretas, lo que se tuvo que enfrentar en los dos últimos dos años solo se pudo gestionar gracias a la solidaridad de los berlineses y al trabajo voluntario.

Chicote señaló una serie de medidas que el gobierno de Berlín viene aplicando para lograr que esta transversalidad encarne: integrar a organizaciones LGBTI en consejos que abordan otros temas (vejez, cuidados, familia, establecimientos penitenciarios, etc.); financiar proyectos que

trabajen aspectos LGTBI en diálogo con otros ejes de desigualdad; realizar campañas que promuevan la proliferación de representaciones de la población LGTBI y que busquen romper los moldes de lo esperado. «Mostramos a mujeres trans mayores trabajando, gays no musculosos, ni rubios o lesbianas con características étnicas alternativas a las estereotípicas», señaló. También se capacita a las organizaciones que trabajan con población migrante en la temática LGTBI, se obliga a las organizaciones paraguayas o de tercer nivel que cuenten con representación de la diversidad sexual y se generó un espacio de asesoramiento para lesbianas.

Además, a partir de 2015, con la llegada del fuerte contingente inmigratorio, la ciudad mezcla a todas las recién llegados y los ubica en campos deportivos o viviendas. «Allí se producen violaciones a personas trans, actos violentos homofóbicos, lo que nos exigió pensar un modelo propio para afrontar la complejidad que veíamos», explicó. Finalmente, afirma Chicote, se logró reconocer como una categoría específica de refugiados a las personas LGTBI, lo que facilitó crear un centro especializado que atendiera sus necesidades. Se creó un refugio para ellos con 126 plazas, que está completamente lleno, y también se trabajó con los intérpretes para formarlos en el vocabulario específico y para resolver sus propios prejuicios o problemas con el tema LGTBI. «A veces no traducían la palabra gay por miedo o no sabían qué era intersex y no lo traducían», señaló.

Afortunadamente, la situación de emergencia es por el momento menos masiva en la Ciudad de México, donde existe una inmigración interna, una cantidad importante de retornados y algunos inmigrantes extranjeros que originariamente pensaban ir a Estados Unidos o Canadá y finalmente quedaron varados en esa ciudad. Gracias al trabajo conjunto con la organización Arcoíris se lograron producir cifras sobre la situación de la población LGTBI inmigrante en la capital. Según Margarita Castilla, integrante del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las investigaciones confirman que prácticamente la mitad de las mujeres trans en situación de comercio sexual en la capital mexicana son extranjeras y «podrían estar viviendo hace veinte años en la ciudad sin tener ningún documento legal. Nos contaron muchas de ellas historias terribles, episodios de violencia policial. Por ejemplo una de ellas, guatemalteca, nos contó que la policía la había prendido fuego viva y que no pudo acceder a la atención médica en su momento».

La llegada de refugiados a Buenos Aires también es escasa. Según David Cohen, del gobierno de la ciudad, en su país existen actualmente setenta refugiados, número que al ser tan reducido permite un abordaje de calidad e integral. No obstante eso, Cohen subrayó cómo la capital porteña es un lugar de inmigración para muchos latinoamericanos (Venezuela, Colombia, Perú, Chile) y un lugar de llegada para la inmigración interna. Pese a ello, las medidas y políticas orientadas a la población LGTBI por el momento no tienen conexión con la situación de la población migrante.

En Uruguay la situación tampoco es del todo positiva. Según Valeria España, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, los desafíos que plantea la inmigración es un debate que se ha postergado en nuestro país pese a su fuerte vigencia y relevancia. España señaló cómo la Ley 18.250 que regula los procesos migratorios no incluye ninguna mención a aspectos referidos a la orientación sexual o a la identidad de género.

Existe un documento marco de política migratoria que se aprobó en 2016, pero no se refiere en absoluto a esta temática. En realidad todas las baterías en Uruguay están puestas en la diáspora, es una política migratoria que es antes que nada una política de retención de la población, que busca mantener vínculos con los uruguayos en el exterior», aclaró. La invisibilización de la nueva agenda de derechos termina generando problemas, porque deja librado a la discrecionalidad del funcionario lidiar con los casos en los que se cruza lo LGTBI y la situación migratoria. Siempre digo que la frontera invisible del progresismo legislativo sigue siendo la condición de extranjera»,

afirmó.

Además, España presentó dos casos que confirman los límites y alcances de la transformación normativa de los últimos años. El primer caso involucra las barreras infranqueables con las que tiene que lidiar una persona extranjera para realizar el cambio de nombre y sexo registral: «Hemos identificado el caso de una personas trans peruana, que vino hace quince años al país, probablemente en una situación de trata, rumbo a Roma y despertó en Montevideo y se quedó acá, y no ha podido

Llegar a Montevideo

Durante la jornada se contó con el testimonio de varios inmigrantes LGBTI. La mayoría de estos relatos puso especial hincapié en las dificultades aquí encontradas: poca receptividad por parte de las instituciones, gran lentitud e ineficacia en llevar adelante los procedimientos burocráticos, grandes dificultades para conseguir trabajo o integrarse socialmente.

El único de los participantes que opinó en forma positiva de todo el proceso fue el venezolano Camilo Ortiz, quien migró aquí porque en su país no podía vivir su sexualidad. «Me vine con mi pareja y nos casamos aquí. Cuando recién llegué todo el mundo me preguntaba por qué Uruguay. La respuesta es sencilla, me siento libre. Creo que aquí no saben lo excepcional que es tener un marco normativo como el que se tiene. Acá me pude casar. Para muchos capaz que esto es algo natural. Pero en realidad es un privilegio que en muy pocos lados se puede tener», señaló.

La historia de Jacqueline De Francis es menos auspiciosa. Vino desde Brasil hace tres años para casarse con el que en ese entonces era su novio y buscando poder ingresar a la Facultad de Medicina. «El proceso para legalizar mis estudios en Brasil sigue aún. Y la discriminación aquí a las personas trans es muy importante. Este país es más abierto a nivel de leyes pero muy conservador a nivel social, mientras que Brasil es muy cerrado a nivel de leyes pero la sociedad es mucho más abierta. Yo en Brasil trabajaba en una peluquería sumamente exclusiva y no había problemas con mi identidad de género, aquí cuando muestro el documento automáticamente quedo excluida de cualquier posibilidad», aclaró.

Adil Zabiran vino de mucho más lejos. Llegó a Uruguay desde Rusia junto a su esposo y sus hijos. «Mi exesposo también es trans. En Rusia yo tenía todo el cambio de género hecho pero él no. No sabíamos español ni sabíamos nada de este país. Me costó mucho adaptarme, a mis hijos no tanto. Aquí si uno no tiene conocidos no consigue trabajo, llevar CV es una mentira, porque te lo reciben pero nunca te toman».

realizar el cambio de nombre y sexo registral. Está la dificultad de acceder a su partida de nacimiento en Perú y está el trato en masculino por parte de los funcionarios de emigración». El segundo caso tuvo que ver con la aplicación en el Registro Civil de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo/género. «Por suerte el amor no reconoce fronteras», ironizó España, pero el Estado uruguayo parece seguir aplicándolas por más que la ley no lo habilita. «Si se casa una pareja heterosexual y uno de ellos es extranjero no se le pide residencia, pero si es del mismo sexo en el Registro se la exigían para evitar el turismo igualitario. Si habrá que trabajar entonces», recalcó.

Un problema similar se plantea para los emigrantes LGTBI que se quedan a vivir aquí y quieren obtener la credencial cívica. La normativa que rige la Corte Electoral es de 1920 por lo que considera a las mujeres como incapaces relativas y exige entre otras cosas para acceder a la ciudadanía plena que presenten una carta de sus maridos autorizándolas a ejercer el derecho al voto. Estos casos confirman para España, por un lado, cómo sigue incorporada en las lógicas burocráticas el concepto de nación, el que compite y gana incluso en los hechos a la legislación de avanzada aprobada.

Delmira Botti, representante de la Secretaría para la Equidad Étnico Racial y de Poblaciones Migrantes de la IM, señaló que la mayoría de las personas que atiende esta secretaría tiene buen nivel educativo (universidad y secundaria), que aproximadamente la mitad viene en busca de trabajo y la otra mitad en busca de una mejor calidad de vida. La Secretaría ofrece cursos de lengua y cultura y de historia nacional y un lugar de referencia que facilite el proceso de integración. ¶

CAPÍTULO VIII

Algunas reflexiones finales

MOVIMIENTOS SOCIALES

POLÍTICAS PÚBLICAS

ACADEMIA

Algunas reflexiones finales

A través de los cada uno de los capítulos presentados hasta aquí se fue pasando revista a las diferentes posibilidades de pensar las sexualidades y las identidades genéricas no heteroconformes atravesadas por otro tipo de desigualdades. A partir de este acumulado se propone en este capítulo final una serie de recomendaciones generales que permitan pensar los desafíos por venir para lograr una mayor inclusión de la perspectiva interseccional tanto en el movimiento social como en el terreno de las políticas públicas y la academia.

MOVIMIENTOS SOCIALES

Parece existir acuerdo, tanto en la literatura especializada local como entre los participantes del ciclo, en que los mayores avances de la perspectiva interseccional en Uruguay tuvieron lugar en el campo del movimiento social. Tanto el movimiento feminista como el de la diversidad sexual y una parte del afrodescendiente integraron aquí la perspectiva interseccional en forma temprana, con énfasis en diferentes clivajes de desigualdad según la coyuntura. Esta realidad es visualizada en la literatura (Cruells, 2015) como un elemento facilitador de la instalación de políticas públicas que tengan este paradigma.

Dicho esto, también varios participantes señalaron durante el ciclo los límites y alcances acotados que tiene por el momento esto en las prácticas políticas actuales del movimiento social. Parece claro que algunos eventos tienen mucho más incorporada esta dimensión que otros (coordinadora de la Marcha de la Diversidad) y que existen algunos ejes

que tienen más dificultad para ser reconocidos como clave (por ejemplo, el étnico-racial, que sigue teniendo dificultades para visibilizarse a nivel social). Frente a este problema cabe preguntarse qué estrategias pueden facilitar superar estas trabas o desarrollos desiguales.

Parece claro que es prioritario generar espacios de diálogo y negociación entre los movimientos sociales para definir una nueva agenda interseccional de trabajo conjunta y precisar objetivos, prioridades y formas de participación. Este debate se puede volver mucho más ágil si se logran encontrar problemas, enemigos u objetivos en común para todas las organizaciones involucradas en la discusión. Esta alternativa es mucho mejor que buscar nucleamientos con base en identidades. Por allí resulta poco probable el realineamiento de marcos interpretativos o el camino de tratar de descentrar la acción colectiva de cada una de las organizaciones en función de la agenda específica de otra organización, ya que implica mucho trabajo político y educativo lograr que se entienda el cambio en la base social de la acción colectiva. Resulta claro que el proceso es más fácil en los movimientos que desarrollan perspectivas identitarias menos esencialistas y fijas o tienden a utilizarlas en forma estratégica y contingente para pensar formas históricas y contextualizadas de desigualdad (Sempol, 2012, 2013; Cruells 2015).

Para lograr la consagración de un trabajo interseccional, buena parte de la literatura señala la conveniencia de promover formas de trabajo y diálogo horizontales, así como explicitar cada vez que se pueda el lugar desde el que se habla y hacer visibles las trayectorias de militancia o de politización de cada uno quienes participan en el intercambio. Uruguay tiene una fuerte tradición de formación de coaliciones, lo que puede ser una excelente base para la construcción de agendas políticas de tipo interseccional, por lo que otra recomendación posible sería fortalecer la formación de redes y organizaciones que trabajen desde el vamos con una perspectiva interseccional, algo que permite ampliar el escenario local de reflexión y dar una base social más fuerte a la instrumentación de políticas públicas de tipo interseccional.

También es clave lograr que la dirigencia de los movimientos sociales reconozca sus propios lugares de privilegio y que se permita una apertura en las formas de hacer política, en los monitoreos y en la producción de

conocimiento. En ese sentido, por ejemplo, el movimiento de la diversidad sexual debería reconocer la presencia abrumadora de dirigentes blancos dentro de sus organizaciones, mientras que el afro debería tener una apertura mayor a la agenda de género y LGBTI. Comprender en definitiva que la perspectiva interseccional implica un paradigma para acercarse a la forma en que se construye la desigualdad, lo subalterno, pero también es una herramienta muy útil para pensar y problematizar y reconocer las desigualdades que atraviesan el propio proceso de emancipación.

POLÍTICAS PÚBLICAS

En Uruguay, en los últimos quince años, en lo que menos se ha avanzado es en el área de políticas públicas con una perspectiva interseccional. Esto tiene que ver con la fuerte tradición que existe aquí en desarrollar políticas sociales de carácter universal y la visualización de cualquier particularización con base en identidades o grupos como una política focalizada de carácter neoliberal o un quiebre inaceptable de la igualdad jurídica. Basta analizar la gran dificultad que existe en la aceptación de la opinión pública de la aprobación de acciones afirmativas para grupos a los que incluso se les reconoce socialmente grandes vulnerabilidades para tomar nota de la fuerte legitimidad que tienen los acercamientos supuestamente universalistas.

Otra barrera clave es la resistencia de cuadros medios y de primera línea de cambiar ciertas inercias institucionales, asignación de presupuestos y construcciones institucionales en base a una única desigualdad, que llevaron mucho trabajo político y debate lograr instalar. La institucionalidad sigue esta lógica y utiliza un modelo múltiple en el que se crean instituciones paralelas que buscan trabajar sobre un eje principal y luego construir algunas acciones más interseccionales en forma subordinada. Un ejemplo de esto podría ser Inmujeres y su línea de trabajo afro o lésbica o Pronadis y su trabajo en cruce con género. Estas formas de transversalización se revelan poco eficaces en los hechos y su alcance o impacto es limitado en la política, de modo que sus contenidos se diluyen frecuentemente al momento de la instrumentación.

Otra cosa común aquí es el desarrollo de trabajos «estratificados» (Cruells, 2015) en los que diferentes instituciones que trabajan cada una un eje diferente de desigualdad combinan su trabajo en forma simétrica, mientras se mantiene de todas formas la desigualdad en la protección normativa y las estructuras. Esto es especialmente visible en el trabajo interinstitucional y en la formación de mesas de discusión o comisiones, como por ejemplo la comisión de las mujeres privadas de libertad o en estrategias conjuntas para afrontar problemas sanitarios como los del uso problemático de drogas.

Además, el trabajo interseccional tiene que lidiar con la existencia de diferentes niveles de protección normativa según los grupos poblacionales, algo que, como señalan Verloo et al. (2012), aumenta las barreras para el avance de esta perspectiva en la política pública, si bien no es absolutamente necesario resolver estas diferencias para lograr concretar un cambio de rumbo en la política.

Por último, la creación de medidas de acción afirmativa se ha hecho siguiendo un criterio de identidades fijas, sin incluir una reflexión sobre la relación e interseccionalidad de las diferentes medidas aprobadas. ¿Cómo dialoga la cuota trans con la cuota para afrodescendientes y la definida para discapacidad? ¿Cómo se va a trabajar con aquellos casos en los que el individuo esté atravesado por dos o más de estas desigualdades?

ACADEMIA

La producción de conocimiento académico es central para la instrumentación de políticas públicas con una perspectiva interseccional. Es necesario producir investigación aplicada que permita tener insumos para su diseño, que monitoree desde el principio la instrumentación y genere información que facilite la introducción de cambios correctivos durante el proceso, en aquellos casos en los que se diagnostique que la intervención genera problemas no esperados o formas nuevas de desigualdad.

Para lograr este diálogo entre academia, movimiento social y políticas públicas es necesario formar a una generación de investigadores en la perspectiva interseccional, a efectos de generar un campo de reflexión crítico donde se puedan construir programas y líneas de investigación.

Una de los principales resultados de este tipo de trabajo es visibilizar los ejes de desigualdad con más peso en cada momento, así como caracterizar en un contexto determinando qué cosas pueden habilitar/facilitar una perspectiva interseccional y cuáles pueden funcionar como una barrera, algo que implica poner en diálogo el caso con la literatura global y contribuir a un proceso de acumulación reflexiva sobre experiencias concretas que permita identificar con precisión variables y su relación con la estructura política y social.

El tercer punto fundamental para el trabajo académico es la visualización y el reconocimiento de grupos y voces que tradicionalmente no han sido escuchadas en el espacio público pero que también están luchando por lograr igualdad y alguna política social (Collins, 2009; Verloo, 2013). El trabajo de diagnosticar en cada contexto cuáles son los principales indicadores de desigualdad, cómo trabajan juntos o no y cuáles son las mejores estrategias para solucionarlos es antes que nada un trabajo que le corresponde a una academia comprometida con los problemas sociales y la lucha contra la desigualdad.

Finalmente, es necesario tener claro que no existe una única forma de aplicar una perspectiva interseccional (Hancock, 2007; Verloo, 2013). Probablemente, una de las mayores potencialidades que tiene este paradigma de análisis es pensarlo como una herramienta epistemológica y política (Cruells, 2015) que cobra diferentes formas y posibilidades según el contexto en donde se trabaje, potencialidad que solo se realizará en forma plena gracias a una articulación sostenida en el tiempo entre los tres actores sociales aquí planteados: movimiento social, cuadros burocráticos y academia. ¶

BIBLIOGRAFÍA

- Beck, U. y Beck Gernsheim, E. (1990). *El normal caos del amor. Las nuevas formas de la relación amorosa*. Barcelona: Paidós.
- Bidaseca, K. (2011). «Mujeres blancas buscando salvar a las mujeres color café de los hombres color café. O reflexiones sobre desigualdad y colonialismo jurídico desde el feminismo poscolonial», en Bidaseca, K. y Vazquez, V. (comps.). *Feminismos y poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América Latina*. Buenos Aires: Ediciones Godot.
- Butler, J. (2006). *Deshacer el género*. Barcelona: Paidós.
- Calvo, M. (2013). «La vejez y las identidades que aun sin poder ser, fueron», en Sempol, D. (coord.) *Políticas Públicas y diversidad sexual. Análisis de la heteronormatividad en la vida de las personas y las instituciones*. Montevideo: MIDES.
- Carrabine, E. y Longhurst, B. (1998). «Gender and Prison Organisation: Some Comments on Masculinities and Prison Management». *The Howard Journal of Criminal Justice*, 37 (2), 161-176.
- Claridget, J. P. (1991). «Asepo: una opción de lucha solidaria con las personas que viven con VIH-Sida», en *Todos contra uno. La batalla anti-Sida en Uruguay*, tomo 1. Montevideo: La República-IDES.
- Collins, P. H. (2009). *Black Feminist Thought. Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Londres: Routledge.
- Combahee River Collective (1977/1981). «A Black Feminist Statement», en Moraga, Ch. y Anzaldúa, G. (eds.). *This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color*. Nueva York: Kitchen Table, Women of Color Press.
- Crenshaw, K. (1989). «Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics». *University of Chicago Legal Forum*, 139-167.

- Cruells, M. (2015). *La interseccionalidad política: tipos y factores de entrada en la agenda política, jurídica y de los movimientos sociales*. Tesis doctoral. Doctorado en Políticas Públicas y Transformación Social. Instituto de Gobierno y políticas públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona.
- Curiel, O. (2014). «Hacia la construcción de un feminismo descolonizado. A propósito de la realización del Encuentro Feminista Autónomo: haciendo comunidad en la casa de las diferencias», en Espinosa, Y.; Gómez, D. y Ochoa, K. (eds.). *Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Dhmoon, R. (2009) *Identity/difference politics: How difference is produced and why it matters*. Vancouver: UBC Press
- Davis, A. (1981). *Women, Race and Class*. Nueva York: Random House.
- Espinosa, Y. (2009). «Etnocentrismo y colonialidad en los feminismos latinoamericanos: Complicidades y consolidación de las hegemonías feministas en el espacio transnacional». *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer*, 14 (33), 37-54.
- Gómez, D. y Ochoa, K. (2014). «Introducción», en Espinosa, Y.; Gómez, D. y Ochoa, K. (eds.). *Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Ferree, M. M. (2011). «The Discursive Politics of Feminist Intersectionality», en Lutz, H.; Herrera Vivar, M. T. y Supik, L. (eds.). *Framing Intersectionality: Debates on a Multi-Faceted Concept in Gender Studies*. Ashgate
- Foucault, M. (1996). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Madrid: Siglo XXI.
- Fry, P. y Mac Rae, E. (1985). *O que é homossexualidade*. San Pablo: Abril Cultural/Brasiliense.
- García Bedolla, L. (2008). «Intersections of inequality: Understanding marginalization and privilege in the post-civil rights era». *Politics & Gender* 3(2): 232-48
- Giddens, A. (1992). *La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas*. Madrid: Cátedra.
- Gobbi, C. & Villar, I. (1991). «El Sida en los medios de comunicación», en *Todos contra uno. La batalla anti-Sida en Uruguay*, tomo 2. Montevideo: La República-IDES.
- Hancock, A.-M. (2007). «When multiplication doesn't equal quick addition: Examining intersectionality as a research paradigm». *Perspectives on Politics*, 5 (01), 63-79.

- Hankivsky, O. y Cormier, R. (2010). «Intersectionality and Public Policy: Some Lessons from Existing Models». *Political Research Quarterly*, 65 (1), 217-229.
- Halperin, D. (2002). *How to do the history of Homosexuality*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hannet, S. (2003). «Equality at the Intersections: The legislative and Judicial failure to tackle Multiple Discrimination». *Oxford Journal of Legal Studies*, 23 (1), 65-86.
- Hooks, B. (1984/2004). «Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista», en Hooks, B.; Brah, A.; Sandoval, Ch. y Anzaldúa, G.. *Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras*. Madrid: Traficantes de sueños.
- Lorde, A. (1979). «Las herramientas del amo nunca desarmarán la casa del amo», en Moraga, C. y Anzaldúa, G. *Esta puente mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos*. San Francisco: Ism Press.
- Lugones, M. (2015). *Subjetividad esclava, colonialidad de género, marginalidad y opresiones múltiples*. Córdoba [mimeo].
- Ministerio de Salud Pública (2012). *Informe de la Situación Nacional de VIH-Sida*. Montevideo: MSP.
- Mogul, J.; Ritchie, A. y Whitlock, K. (2011) *'Queer' in Justice: The Criminalization of LGBT People in the United States*. Boston: Beacon Press.
- Muñoz, C. (1996). *Uruguay homosexual*. Montevideo: Ediciones Trilce.
- Perlongher, N. (1987). *El negocio del deseo. La prostitución masculina en San Pablo*. Buenos Aires: Paidós.
- Platero, R. (Lucas) (ed.) (2012). *Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada. Temas contemporáneos*. Madrid: Ediciones Bellaterra.
- Roussel, L. (1995). «El futuro de la familia», en VVAA: *El capital humano europeo en el umbral del siglo XXI*. Madrid: Ministerio de Trabajo.
- Segato, R. (2011). «Género y colonialidad: en busca de claves de lectura y de un vocabulario estratégico descolonial», en Bidaseca, K. y Vazquez, V.; (comps.). *Feminismos y poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América Latina*. Buenos Aires: Ediciones Godot.
- Sempol, D. (2013). *De los baños a la calle. Historia del movimiento Lésbico Gay Trans uruguayo 1983-2013*. Montevideo: Debate.
- (2012) *Políticas públicas y diversidad sexual*. Montevideo: MIDES
- Townsend-Bell, E. (2011). «What is Relevance? Defining Intersectional Praxis in Uruguay». *Political Research Quarterly*, 64 (1), 187-199.

- Verloo, M. (2013). «Intersectional and cross-movement politics and policies: reflection on current practices and debates». *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 38 (4), 893-915.
- Meier, P.; Lauwers, S. y Martens, S. (2012). «Putting intersectionality into Practice in Different Configurations of Equality Architecture: Belgium and the Netherlands». *Social Politics*, 19 (4), 513-538.
- Walby, S. (2007). «Complexity theory, systems theory and multiple intersecting social inequalities». *Philosophy of the Social Sciences*, 37 (4): 449-470
- Weldon, L. (2006). «The structure of Intersectionality: A comparative Politics of Gender». *Politics and Gender*, 2 (2), 235-248.
- Yuval-Davis, N. (2006). «Intersectionality and Feminist Politics». *European Journal of Women's Studies*, 13 (3): 193-209



Identidad diseñada especialmente para el ciclo por Daniel Arzola, artista venezolano. Se trata de la imagen de una persona intencionadamente difícil de clasificar en términos étnicos y de género. Según términos del propio autor: «Su mirada no refiere a la tristeza sino al drama».



Juan Meré, asesor de UNFPA, junto a Alma Belenguer del CFCE y Fabiana Goyeneche, Directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, en el lanzamiento del ciclo. Del mismo panel, participan Patricia González, Directora de la Asesoría para la Igualdad de Género, y Andrés Scagliola.



Gerard Coll Planas, Doctor en Sociología por la Universitat Autònoma de Barcelona, experto en temas de diversidad sexual y de género e interseccionalidad, ponente junto a Marta Crüells, Doctora en Ciencia Política y asesora en el Ayuntamiento de Barcelona, en el lanzamiento del ciclo en el mes de marzo.



Mesa de materiales en el diálogo «Afro LGBTI», quizá el más potente de los debates, en el mes de julio.



Andrés Scagliola, Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de la Diversidad y responsable del ciclo, de la Intendencia de Montevideo, junto a Romina Mauros, de Ovejas Negras, en el diálogo «Vejez LGBTI», en el mes de octubre.



Ari Vera, presidenta de la organización social Almas Cautivas de la Ciudad de México, ponente en el diálogo sobre «Personas LGBTI privadas de libertad», en el mes de noviembre.



Paula Lacaño, responsable del Departamento de Género y Diversidad del Instituto Nacional de Rehabilitación, y Tania Ramírez, activista afro, participando del taller de Ari Vera, en el diálogo sobre «Personas LGBTI privadas de libertad», en el mes de noviembre.



Sergio Meresman, experto en temas de sexualidad y discapacidad, en uno de los paneles del diálogo sobre «Personas LGBTI con discapacidad», coordinado por Rina Piana, en el mes de diciembre.



Karina Pankievich, Presidenta de Asociación Trans del Uruguay, y Gloria Alvez, referente de REDLACTRANS, en el diálogo sobre «Personas LGBTI migrantes y refugiadas», en el mes de diciembre.



Cecilia Estévez, docente y activista trans participando de uno de los diálogos.



Roberto Acosta, activista LGBTI y referente de la Marcha por la Diversidad, participando de uno de los diálogos.



Rodrigo Falcón, Presidente de Trans Boys Uruguay, junto a Morena Ferreira, modelo y activista trans, en uno de los paneles de los diálogos.



Delfina Martínez, de Unión Trans, y Elizabeth Suárez, Coordinador Ejecutiva de la Secretaría para la Equidad Étnico Racial y de Poblaciones Migrantes, de la Intendencia de Montevideo.



Sergio Sánchez, integrante de la Secretaría de la Diversidad, en uno de los momentos del lanzamiento. Junto a Rina Piana y Mariana Corrales, fueron fundamentales para el desarrollo de Intersecciones.



De izquierda a derecha: Nelson Fernández, Andrés Scagliola y Fabiana Goyeneche de la Intendencia de Montevideo; Daniel Martínez, Intendente de Montevideo; y Tomás Caballero (Medellín), Margarita Castilla (Ciudad de México), Meritxell Sàez (Barcelona) y Florencio Chicote (Berlín), referentes del proyecto «Interseccionalidad en las políticas LGBTI metropolitanas» de la Asociación Mundial de Grandes Metropolis, en el cierre del ciclo Intersecciones.

La ciudad es un escenario clave en las luchas de gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersex por el reconocimiento de sus derechos. La polis deviene espacio público de lucha y de resistencia y, a la vez, de transformación y celebración. Conocerla, en su complejidad, es fundamental. Esta serie de publicaciones, abierta, es un aporte a pensar la ciudad con relación a la diversidad sexual y de género de las personas que la habitan.